**C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO**

_____ y _____, por nuestro propio derecho y en nuestra calidad de padres de los menores _____, ejerciendo el derecho a la patria potestad de dichos menores y en su nombre y representación; señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en _____ y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los Licenciados _____, ante Usted con todo respeto comparecemos a exponer:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I; 107, fracciones I y IV Constitucional; 1º, fracción I; 35, 37, 107, fracciones I, II y III y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, venimos a promover **DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO** en contra de las autoridades que más adelante precisamos y por la violación de las garantías individuales de que somos titulares. Al efecto y para cumplir con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, manifestamos:

A) QUEJOSOS: _____ y _____, por nuestro propio derecho y en nuestra calidad de padres de los menores _____, ejerciendo el derecho a la patria potestad de dichos menores y en su nombre y representación, con el domicilio que para oír y recibir notificaciones ha quedado precisado en el proemio de este escrito y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionales que allí mismo se mencionan.

B) TERCERO INTERESADO: No Existe.

C) AUTORIDADES RESPONSABLES:

- 1.- El C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
- 2.- La C. Secretaria de Educación Pública
- 3.- El C. Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública
- 4.- El C. Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública
- 5.- El C. Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública.

D) ACTOS RECLAMADOS:

1.- Orden de acudir a clases presenciales.- La orden para que de manera inevitable se presenten mis menores hijos a clases presenciales en el Ciclo Escolar 2021-2022, a pesar de que el país se encuentra en Pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Este acto se los atribuimos en cuanto a su emisión al C. Presidente de la República.

2.- Orden para que no se impartan clases por medios remotos.- La orden para que no se impartan clases vía remota; es decir, por medios televisivos y/o internet para los alumnos de escuelas públicas o privadas en el Ciclo Escolar 2021-2022, lo que entraña la cancelación del programa “Aprende en Casa”.

Este acto se lo atribuimos indistintamente a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables.

3.- Negativa a continuar clases vía remota.- La negativa a continuar con el esquema de clases vía remota, bien sea con las impartidas por medios televisivos o incluso por medios electrónicos (Internet).

Este acto se lo atribuimos indistintamente a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables.

4.- Desconocimiento del Ciclo Escolar 2021-2022.- El desconocimiento de la posibilidad de acreditar el Ciclo Escolar 2021-2022 por parte de nuestros menores hijos, en función de la inasistencia a clases presenciales.

Estos actos se los atribuimos indistintamente a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables.

5.- Prohibición o Impedimento.- La prohibición y/o impedimento para que nuestros menores hijos cursen el Ciclo Escolar 2021-2022 vía remota; es decir, por medios televisivos o electrónicos (internet).

Estos actos se los atribuimos indistintamente a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables.

6.- Efectos y Consecuencias.- Todos los efectos y consecuencias que de hecho y de derecho deriven de los actos reclamados.

Estos actos se los atribuimos indistintamente a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables.

E) PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS: Los artículos 1º, 3º, 4º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

F) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Los que se esgrimen en la presente demanda de garantías.

G) PROTESTA LEGAL: Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que los antecedentes de los actos reclamados, así como los fundamentos de los conceptos de violación SON CIERTOS.

Antes de hacer el relato de los Antecedentes de esta demanda de garantías (el que se ubica a partir de la **página 25**), es pertinente acotar los siguientes aspectos sobre: **1.- Personería** y **2.- Procedencia de este Juicio de Garantías**, lo que involucra los aspectos de: **a) Excepciones al Principio de Definitividad** y **b) Interés Legítimo** de los petitionarios de garantías, mismos que se tratan a continuación:

PERSONERÍA

I.- Propio Derecho.- Los suscritos _____ y _____, promovemos por nuestro propio derecho, ejerciendo tanto nuestro *interés jurídico*, como el *interés legítimo* que nos confiere la fracción I del artículo 107 de la Carta Magna, en consonancia con los diversos preceptos 1º, 4º y 31, fracción I de la propia Constitución Federal, a más de lo señalado en los numerales 6º de la Ley de Amparo, 2º, último párrafo; 4º, 10, fracción I; 12, fracción I; 22 *in fine*; 32 y 33, fracción IX y XV de la Ley General de Educación, y en los numerales 1º, 2, 3, 7, 12, 25, 26 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28 y 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; las Observaciones Generales Números 3 y 14; del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte; 2, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 27, 28, 29, 31, 41 y 42 de la Convención sobre los Derechos del Niño; II, VI, XII, XIII, XV, XXX y XXXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1º, 2, 5, 11, 13, 19, 24, 26, 29 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica; 1º, 2, 3, 5, 10, 13, 14, 15 y 16 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; 34, inciso i), de la Carta de la Organización de los Estados Americanos -incorporado con motivo del protocolo de reformas a la propia carta, suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 5 de diciembre de 1985-; V de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 33 y 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, visto que *tenemos derecho a elegir las mejores condiciones educativas para nuestros menores hijos* _____, tal como se explica más adelante, lo que ineludiblemente también involucra *la conveniencia de enviarlos o no a clases presenciales durante una pandemia*.

II.- Patria Potestad.- Los suscritos somos titulares de la patria potestad de nuestros menores hijos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 411, 412, 413, 414, 414 bis, 416 Ter, 422, 424, 425 y 427 del Código Civil para el Distrito Federal y demás relativos de las

Entidades Federativas, lo que implica nuestro derecho y obligación de representarlos ante cualquier autoridad, para lograr su mayor beneficio. Esta calidad se implica en las actas de nacimiento de cada uno de ellos, mismas que se acompañan en copia certificada a esta demanda de garantías, y nos permiten ejercer su representación en este juicio de amparo.

Por otra parte, el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nos impone la obligación de **garantizar los derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de los derechos de nuestros menores hijos**, señalando además, que **los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de educación**, entre otras (fracción I).

El propio dispositivo legal nos impone la obligación de **asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo** y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo (fracción III); de **impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada a nuestros menores hijos** (fracción IV) y de asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad (fracción V), entre otras.

De esa guisa, estamos obligados a buscar las mejores condiciones de desarrollo de la capacidad intelectual y personalidad de nuestros hijos, **con la seguridad que amerita su minoría de edad y su exposición a una enfermedad tan grave que llega a ser mortal, como es el virus SARS-CoV2 (COVID-19)** que es exactamente lo que pretendemos hacer y nos resulta vedado por los actos reclamados¹.

¹ A este respecto son aplicables la Tesis 1a. LXIII/2013 (10a.) que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Primera Sala, página 828 (Registro 2002848); la Tesis que se lee en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Tercera Sala, página 330 (Registro 207590) que en el Informe de 1988 y en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 30, Cuarta Parte, página 69, esta tesis aparece bajo el rubro “PATRIA POTESTAD. PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO QUE LOS PADRES TENGAN LA GUARDA DEL MENOR” y la Tesis que figura en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 51, Cuarta Parte, Tercera Sala, página 49 (Registro 241923), que enseñan: **“PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS HIJOS.-** La configuración actual de las relaciones paterno-filiales ha sido fruto de una importante evolución jurídica. Con la inclusión en nuestra Constitución del interés superior del menor, los órganos judiciales deben abandonar la vieja concepción de la patria potestad como poder omnímodo del padre sobre los hijos. Hoy en día, la patria potestad no se configura como un derecho del padre, sino **como una función que se le encomienda a los padres en beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial,** acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución en consideración prioritaria del interés del menor. Es por ello que abordar en nuestros días el estudio jurídico de las relaciones paterno-filiales y en particular de la patria potestad, requiere que los órganos jurisdiccionales partan de dos ideas fundamentales, como son la protección del hijo menor y su plena subjetividad jurídica. En efecto, por un lado, el menor de edad está necesitado de especial protección habida cuenta el estado de desarrollo y formación en el que se encuentra inmerso durante esta etapa vital. La protección integral del menor constituye un mandato constitucional que se impone a los padres y a los poderes públicos. Al mismo tiempo, no es posible dejar de considerar que el menor es persona y, como tal, titular de derechos, estando dotado además de una capacidad progresiva para ejercerlos en función de su nivel de madurez”; **“PATRIA POTESTAD, GUARDA DEL MENOR NECESARIA PARA EL EJERCICIO POR LOS PADRES DE LA.-** La patria potestad se ha establecido principalmente en beneficio del hijo y para prestarle un poderoso auxilio a su debilidad, su ignorancia

PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO

I.- Excepciones al Principio de Definitividad.- En la especie se gestan claras excepciones al principio de definitividad, como a continuación se explica:

A) Excepciones Constitucionales.

1.- Derechos de Menores.- El artículo 107, fracción III, inciso a) que se refiere al amparo directo, establece el principio de definitividad. No obstante, el último párrafo del numeral en cita a su vez prescribe la excepción al principio de definitividad en el caso de los asuntos que afecten *derechos de menores*, señalando que el requisito de agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, no será exigible en tales hipótesis.

2.- Ausencia de Fundamentación y Violaciones Directas a la Constitución.- El propio Ordinal 107, fracción IV *in fine*, establece como excepciones al principio de definitividad² las siguientes:

- a) La falta de fundamentación de los actos reclamados; y
- b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución.

II.- Interés Jurídico e Interés Legítimo de los Quejosos.- En la especie se gestan patentemente tanto el *interés jurídico* como el *interés legítimo* de los quejosos, siendo que ambos revelan la procedencia de la vía constitucional, como se demuestra a continuación:

A) Interés jurídico.- El interés jurídico de la parte quejosa se demuestra de modo irrefutable en la medida en que *los actos reclamados afectan a nuestros menores hijos de modo ineludible en tanto se les pretende obligar a acudir a clases presenciales a pesar de ponerse en grave riesgo su vida misma*. Así y con base los actos reclamados *se les pretende denegar su derecho a la educación y a la posibilidad de acreditar el ciclo escolar*, desconociendo los derechos y garantías que les *conceden la Constitución Federal, los Tratados Internacionales y la propia Ley*. En ese sentido, *los padres tenemos el derecho y la obligación de proporcionarles la protección de su salud y velar porque obtengan la educación necesaria*, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables en la especie, como

y su inexperiencia; de donde se infiere que para que los padres puedan cumplir cabalmente con esos *deberes que les impone la patria potestad, como son velar por la seguridad e integridad corporal del hijo, el cuidado de dirigir su educación, de vigilar su conducta, sus relaciones y su correspondencia, y el formar su carácter*, es de todo punto necesario que dichos padres tengan la guarda del hijo, es decir, la posesión del hijo mediante la convivencia cotidiana, bajo el mismo techo e ininterrumpidamente” y “**PATRIA POTESTAD, EJERCICIO DE LA, POR AMBOS PADRES.-** La patria potestad legalmente se ejerce sobre los hijos, en los casos y circunstancias que expresamente señala la ley. Su finalidad es la de proteger los intereses de los hijos; es por eso que, precisamente, el legislador ha querido que la patria potestad, como regla general, se ejerza por los dos padres conjuntamente, y solamente como excepción, deje de ejercerla uno de ellos”.

² Lo anterior se reitera en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que señala al efecto: “No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia”.

son los artículos 1º, 4º y 31, fracción I de la propia Carta Magna, a más de lo señalado en los numerales 2º, último párrafo; 4º, 10, fracción I; 12, fracción I; 22 *in fine*; 32 y 33, fracción IX y XV de la Ley General de Educación, entre otros, y en los preceptos Artículos 1º, 2, 3, 7, 12, 25, 26 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos³; 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28 y 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas⁴; 2, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas⁵; las Observaciones Generales Números 3 y 14; del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte; 2, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas⁶; 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 27, 28, 29, 31, 41 y 42 de la Convención sobre los Derechos del Niño⁷; II, VI, XII, XIII, XV, XXX y XXXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre⁸; 1º, 2, 5, 11, 13, 19, 24, 26, 29 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁹; 1º, 2, 3, 5, 10, 13, 14, 15 y 16 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 34, inciso i), de la Carta de la Organización de los Estados Americanos¹⁰ -incorporado con motivo del protocolo de reformas a la propia carta, suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 5 de diciembre de 1985-Culturales “Protocolo de San Salvador”¹¹; V de la Declaración de los

³ Este Tratado fue Adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a través de la Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.

⁴ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas fue adoptado en Nueva York, Estados Unidos de América 16 de diciembre de 1966; la adhesión de México se produjo el 24 de marzo de 1981 y el Decreto Promulgatorio correspondiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981

⁵ El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, fue adoptado en Nueva York, Estados Unidos de América el 16 de diciembre de 1966; la adhesión de México se produjo el 23 de marzo de 1981 y el Decreto Promulgatorio correspondiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.

⁶ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas fue adoptado en Nueva York, Estados Unidos de América 16 de diciembre de 1966; la adhesión de México se produjo el 24 de marzo de 1981 y el Decreto Promulgatorio correspondiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981

⁷ Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por México el 21 de septiembre de 1989 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.

⁸ Este Tratado se Adoptó en la IX Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 1948.

⁹ Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1981.

¹⁰ Reformada por los Protocolos de Buenos Aires, 27 de febrero de 1967, Cartagena de Indias, 5 de diciembre de 1985, Washington, 14 de diciembre de 1992, y Managua, 10 de junio de 1993, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1949.

“Artículo 34.- Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas:

“i) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica;...”.

¹¹ Este instrumento internacional, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1º de septiembre de 1998.

Derechos del Hombre y del Ciudadano y 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 33 y 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por lo que es inconcuso que *tanto los suscritos como nuestros menores hijos tenemos interés jurídico en este juicio de garantías.*

B) Interés Legítimo.- En función de la Reforma a los artículos 103 y 107 Constitucionales publicada en el Diario Oficial el 6 de junio de 2011, este juicio resulta procedente dado el interés legítimo que asiste a la quejosa.

III.- Características del Interés Legítimo.

A) Conceptos que se hallan en la Constitución y en la Ley de Amparo.- Del texto de la fracción I del artículo 107 constitucional, se desprende lo siguiente:

“I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o *de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución* y con ello *se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.*

“Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;...”.

Dicho texto se reitera en el artículo 5º, fracción I de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el Martes 2 de abril de 2013.

1.- Características del Interés Legítimo establecidas desde el texto constitucional y que se reiteran en la Ley de Amparo.- Del texto constitucional y legal se desprenden las siguientes circunstancias:

a) Sujetos legitimados.- Puede promover aduciendo interés legítimo *cualquier gobernado*, sea un individuo o una colectividad;

b) Condición argumentativa.- Basta con que *se aduzca* que el acto reclamado viola los derechos consagrados en la propia Carta Magna (garantías del gobernado);

c) Situación del quejoso.- El acto reclamado ha de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que puede ser de manera directa, *o* simplemente *por la situación que guarda frente al orden jurídico*; y

d) Desaparición de la exigencia del interés jurídico en amparo indirecto *in genere*.- Del segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 y del cuarto párrafo de la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo, se aprecia que *la noción de interés jurídico y su afectación de manera real, personal y directa, sólo subsiste en el caso del amparo directo,*

de suerte que en el juicio entablado *contra actos de autoridades administrativas y legislativas, como es este caso, no resultan exigibles dichos parámetros, bastando el interés legítimo*¹².

B) Corroboración de la insubsistencia de la necesidad de que se geste un agravio directo.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha corroborado que en cualquier caso, ya no es imprescindible el agravio directo para la procedencia del amparo¹³.

Así se advierte del Punto “IX. Criterio que debe prevalecer en la presente contradicción” de la Ejecutoria de la Contradicción de Tesis 111/2013 (Registro 25444), que dio origen a la **Jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.)** que se lee en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Pleno, página 60 (Registro 2007921), bajo el rubro “**INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)**”, que concluye señalando que *el interés legítimo excluye el concepto del agravio directo*. Así, en el inciso “2. Reforma al juicio de amparo, publicada el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, en relación con la reforma de derechos humanos publicada el diez de junio de dos mil once”, la ejecutoria en cita señala:

¹² La Tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) que figura en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Segunda Sala, página 1736 (Registro 2003067), *coincide de modo exacto con lo así expuesto*, al señalar: señala: “**INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO.-** La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: **1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico;** y, **4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.** Ahora, *para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo"*, ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo *suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente*, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que *al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado*, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, *el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico"*, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de *alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella*”.

¹³ En este exacto sentido se manifiesta la “**CONTRADICCIÓN DE TESIS 111/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**”, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Pleno, página 90 (Registro 25444), que dio origen a la **Jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.)** que se lee en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Pleno, página 60 (Registro 2007921), bajo el rubro “**INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)**”.

“Tal y como se puede advertir del apartado anterior, los criterios que a lo largo de las Épocas del Semanario Judicial de la Federación ha emitido esta Suprema Corte, en torno al interés necesario para promover un juicio de amparo, respondían a una redacción específica de la Constitución y la Ley de Amparo, mediante la cual, se relacionaba dicho interés con la existencia de un agravio personal y directo”.

Luego, es notorio que la Corte alude a dicho requisito como un concepto que *se exigía* derivado de lo que *establecían* las normas jurídicas antes de las reformas constitucionales al juicio de amparo y a la materia de los derechos humanos del año 2011, de forma tal que al haber cambiado las bases normativas, el concepto dejó de ser aplicable.

IV.- Necesidad jurídica de analizar el interés legítimo de modo casuista.- En la **Jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.)**¹⁴, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¹⁴ La **Jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.)** que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, **Pleno**, página 60 (Registro 2007921), señala: **“INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).**- A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, *la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto.* En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, *mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal,* por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, *la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica,* ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, *debiendo interpretarse*

ha estimado que “debido a su configuración normativa, *la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica*, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, *debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo*, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas”.

En ese sentido, la “**CONTRADICCIÓN DE TESIS 111/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Pleno, página 90 (Registro 25444), de la que deriva la Jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) citada, señala de modo nítido:

“i) Debido a su configuración normativa, *la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica*. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés”.

En la misma tesitura, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha matizado el alcance de la Jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), tal como se aprecia de la Tesis 1a. CLXVII/2015 (10a.)¹⁵, que indica que *tratándose del interés legítimo el juzgador debe realizar un estudio integral de la naturaleza del derecho y la afectación que se alega*, por lo

acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas”.

¹⁵ Dicha Tesis, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Primera Sala, página 442 (Registro 2009195) señala: “**INTERÉS LEGÍTIMO DE ASOCIACIONES CIVILES EN DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR EL DERECHO CUESTIONADO A LA LUZ DE LA AFECTACIÓN RECLAMADA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.**- De conformidad con lo que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), de título y subtítulo: “INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).”, para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en cuenta la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, la cual no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sino de la aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, por medio del cual pueda reclamar a los poderes públicos que actúen acorde con el ordenamiento; de ahí que con la concesión del amparo debe lograrse un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Así, *tratándose del interés legítimo de asociaciones civiles en defensa de derechos colectivos, el juzgador debe realizar un estudio integral de la naturaleza del derecho, el objeto social de la asociación y la afectación que se alega. Por tanto, cuando una persona jurídica alega la transgresión del derecho a la educación por parte de las autoridades estatales, no procede sobreseer en el juicio por considerar exclusivamente que los reclamos tienen por efecto salvaguardar la constitucionalidad y la legalidad del ordenamiento, sino que es necesario analizar la pretensión aducida a la luz del derecho cuestionado*, para determinar la forma en la que dicho reclamo trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que el amparo tendrá por objeto reparar la violación a su esfera jurídica”.

que cuando una persona alega la transgresión de un derecho por parte de las autoridades estatales, **no procede sobreseer en el juicio** por considerar exclusivamente que los reclamos tienen por efecto salvaguardar la constitucionalidad y la legalidad del ordenamiento, sino que ***“es necesario analizar la pretensión aducida a la luz del derecho cuestionado, para determinar la forma en la que dicho reclamo trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que el amparo tendrá por objeto reparar la violación a su esfera jurídica”***.

En idéntico sentido se presenta la Tesis XXII.1o.A.C.4 K (10a.)¹⁶ que igualmente se apoya en la Tesis apenas reseñada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

V.- Imposibilidad jurídica de desechar una demanda de amparo basada en un interés legítimo.- Bajo esta óptica, Su Señoría tiene la obligación de ***analizar la pretensión aducida a la luz del derecho cuestionado, para determinar la forma en la que dicho reclamo trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, lo que es una cuestión de fondo***.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado a propósito del concepto de ***interés legítimo***, que la afectación del mismo ***es una cuestión de fondo***, razón por la cual ***no puede dar lugar al desechamiento de plano de la demanda, como supuesto motivo manifiesto e indudable de improcedencia***.

¹⁶ Dicha Tesis que se lee en al Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1501 (Registro 2017348), señala textualmente lo siguiente: **“INTERÉS LEGÍTIMO INDIVIDUAL O COLECTIVO EN EL AMPARO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA PROBATORIA PARA ACREDITARLO CUANDO SE IMPUGNAN LEYES AUTOAPLICATIVAS.-** En materia de interés legítimo debe identificarse si el derecho que se defiende tiene reflejo en el derecho objetivo; si la intensidad de la afectación es en sentido amplio e indirecto y, finalmente, si la calidad con que se defiende el derecho es individual o colectiva, en tanto que esta última característica es determinante para establecer la flexibilidad en la carga de la prueba. Por ejemplo, en las tesis aisladas 1a. CCLXXXI/2014 (10a.) y 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), **la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en materia de amparo contra leyes no se requiere ser destinatario directo de la norma, sino un tercero, en relación con la posición jurídica que se ocupe, siempre que se resienta una afectación relevante; de ahí que, en esos casos, la carga de la prueba debe ser más flexible, porque no se exige acreditar un daño directo, sino indirecto.** Así, cuando se cuestiona la constitucionalidad de una norma por creerse destinatario de ella o por considerar que redundante en la persona, en razón de sus características específicas; esto es, cuando se acude al amparo contra leyes vía interés legítimo por una defensa individual, pueden exigirse pruebas directas o indirectas que sean concluyentes para demostrar, precisamente, ubicarse en alguna de esas categorías frente a la ley cuestionada. **Dicho parámetro suele flexibilizarse en materia de interés legítimo por defensa de intereses difusos o colectivos, en tanto que la defensa de derechos bajo una posición supraindividual o transindividual, no depende de la afectación exclusiva a una persona, sino de un beneficio que puede reflejarse a un grupo** que, por la dinámica misma de su funcionamiento, no goza siempre de una organización jerárquica y homogénea, ni tampoco siempre es fácil su identificación, por lo cual, **este esquema supone una ponderación más flexible de las pruebas, acorde con el parámetro de razonabilidad, para que del cúmulo de evidencias se determine si éstas son indicativas de que el grupo que acude al amparo cuenta con interés legítimo, por encontrarse en una situación jurídicamente relevante para su esfera de derechos.** En conclusión, **existen diferencias en materia probatoria entre el interés jurídico y el interés legítimo, este último cuya ductilidad depende también de si la promoción del amparo contra leyes de carácter autoaplicativo se hace en defensa de un interés individual o de uno difuso o colectivo,** en virtud de que en el primero se requiere demostrar con pruebas directas o indirectas que sean concluyentes de que la afectación indirecta ocurre por ubicarse como destinatario de la norma o que ésta redundante en la persona en razón de sus características específicas; mientras que **en el segundo bastan evidencias indicativas de que se pertenece al grupo que defiende el interés supraindividual o transindividual, siempre que antes se tome en cuenta el tipo de derecho que se defiende y la gradualidad o intensidad de su afectación”**.

Incluso ha definido que *la falta de afectación al interés legítimo al momento de promover, no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia*, pues reitera que aquel supuesto constituye una *cuestión de fondo* que no puede ser analizada al presentarse la demanda, sino que es susceptible de justificación durante la tramitación del juicio respectivo.

Finalmente a este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que *la circunstancia de que el acto impugnado esté desprovisto de efectos vinculatorios, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para el desechamiento de la demanda*, ya que, de acotarse la procedencia del medio de control constitucional a los casos en que se impugnan actos “vinculantes en términos jurídicos” y de considerarse que únicamente este tipo de actos causan lesión, se estaría admitiendo un requisito adicional para la procedencia de la acción, no previsto en la Norma Fundamental. Así y aunque el quejoso debe tener interés legítimo para acudir a esta vía, traducido éste en la afectación que resienta en su esfera jurídica, en razón de su especial situación frente al acto que considere lesivo, la ley no restringe ni condiciona que dicha afectación sea resultado de un acto de tal naturaleza, dejando abierta la posibilidad de que otra clase de actos sean susceptibles de generar lesión.

Lo anterior, en función de que limitar de esta manera la procedencia del amparo daría cabida a que, bajo la forma de actos “no vinculantes en términos jurídicos”, se produjeran violaciones *de facto* a la Constitución Federal que no podrían ser objeto de control¹⁷.

¹⁷ En tal sentido son aplicables por analogía la Tesis 1a. LXV/2007, que figura en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Primera Sala, página 1395; la Tesis 1a. XLIV/2002, que se lee en la propia Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de 2002, Primera Sala, página 431 y la Tesis 1a. LXIV/2007, que también se ubica en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Primera Sala, página 1396, del tenor literal siguiente: **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DARSE OPORTUNIDAD AL ACTOR DE DEMOSTRAR EL INTERÉS LEGÍTIMO QUE LE ASISTE PARA ACUDIR A ESTA VÍA Y SÓLO DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO ANTE SU FALTA, CUANDO LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN RESULTE TAN EVIDENTE QUE SEA INNECESARIO RELACIONARLA CON EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO.-** Aunque, en principio, no pueda vislumbrarse, con toda claridad, si el acto impugnado en vía de controversia constitucional es susceptible de causar afectación al interés legítimo del actor, posteriormente ello puede advertirse, al darle oportunidad de presentar los elementos de convicción que justifiquen el ejercicio de su acción. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XLIV/2002, fijó criterio en el sentido de que, *al constituir la falta de afectación al interés legítimo del actor una cuestión de fondo, ésta no puede dar lugar al desechamiento de plano de la demanda, como motivo manifiesto e indudable de improcedencia*. En este orden de ideas, debe concluirse que, únicamente habiendo dado oportunidad al accionante de demostrar que el acto impugnado le genera lesión y no habiéndose desvirtuado la presunción de falta de afectación a su interés legítimo, entonces, conforme al criterio sustentado por el Tribunal Pleno, contenido en la tesis P./J. 50/2004, de rubro **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN.”**, habría lugar al sobreseimiento en el juicio, lo cual presupone que la demanda fue admitida, con objeto de no dejar en estado de indefensión al demandante, pero que, al no haberse acreditado el interés que le asiste para acudir a la presente vía, ello ha derivado en la inviabilidad de la acción intentada, por ser éste requisito indispensable para estudiar el fondo del asunto”; **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE AFECTACIÓN AL INTERÉS DEL ACTOR, AL CONSTITUIR UNA CUESTIÓN DE FONDO QUE NO PUEDE SER ANALIZADA AL PRESENTARSE LA DEMANDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.-** El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite desechar de plano la demanda de controversia constitucional presentada, debe advertirse

Vistas las argumentaciones expuestas, *ese H. Juzgado no se halla en aptitud jurídica de desechar la demanda de garantías bajo la apreciación de que no se demuestra el interés legítimo*, pues debe estudiar tal aspecto en su completitud, y la Jurisprudencia ha señalado que no se puede desechar una demanda, por las causas que se podrían invocar para sobreeser¹⁸.

del escrito respectivo y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada; de lo contrario, la demanda deberá ser admitida, ya que dicho motivo puede ser desvirtuado durante el procedimiento, pues, de no ser así se dejaría al promovente en estado de indefensión, al no darle la oportunidad de allegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los elementos de convicción que justifiquen el ejercicio de su acción. En congruencia con lo anterior, se concluye que *la falta de afectación al interés de la parte actora al momento de promover la controversia constitucional no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues aquel supuesto constituye una cuestión de fondo que no puede ser analizada al presentarse la demanda, sino que es susceptible de justificación durante la tramitación del juicio respectivo*, ya que el auto inicial por el que se admite o desecha aquélla reviste el carácter de mero trámite en el que no se pueden esbozar consideraciones que impliquen el análisis de cuestiones de fondo del asunto o el estudio concienzudo de éste, propio de una resolución y no de un acuerdo; de ahí que deba darse oportunidad al actor para que en el transcurso del procedimiento, en su caso, mediante las pruebas correspondientes acredite la referida afectación” y **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL HECHO DE QUE EL ACTO IMPUGNADO CAREZCA DE EFECTOS VINCULATORIOS NO CONSTITUYE MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.-** *La circunstancia de que el acto impugnado en la controversia constitucional esté desprovisto de efectos vinculatorios, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para el desechamiento de la demanda*, ya que, de acotarse la procedencia de dicho medio de control constitucional a los casos en que se impugnan actos "vinculantes en términos jurídicos" y de considerarse que únicamente este tipo de actos causan lesión al status constitucional de la entidad, poder u órgano demandante, se estaría admitiendo un requisito adicional para la procedencia de la acción, no previsto en la Norma Fundamental, pues, aun cuando *el actor debe tener interés legítimo para acudir a esta vía, traducido éste en la afectación que resienta en su esfera de atribuciones, en razón de su especial situación frente al acto que considere lesivo, la ley no restringe ni condiciona que dicha afectación sea resultado de un acto de tal naturaleza, dejando abierta la posibilidad de que otra clase de actos sean susceptibles de generar lesión*. Además, limitar de esta manera la procedencia de la controversia constitucional daría cabida a que, bajo la forma de actos "no vinculantes en términos jurídicos", se produjeran violaciones de facto a la Constitución Federal que, al amparo de la anterior argumentación, no podrían ser denunciadas”.

¹⁸ Al respecto son aplicables la **Jurisprudencia XIX.10. J/6**, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, página 997; la Tesis que figura en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIX, Tercera Sala, página 4258 y la Tesis que se publicara en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Pleno, página 886, del tenor literal siguiente: **“IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE.-** Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que *simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional* solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque *son precisamente esos temas sobre los que versará el estudio de fondo* con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda”; **“DEMANDA DE AMPARO, ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LA.-** *Para admitir o desechar la demanda de garantías, no debe estudiarse la constitucionalidad del acto reclamado, ni hacerse consideraciones sobre el fondo del negocio, que en su caso, apoyarían la negativa del amparo*, sino únicamente debe analizarse si se satisfacen o no los requisitos de legitimación procesal, y si no hay motivo de indudable y manifiesta improcedencia” y **“IMPROCEDENCIA, AUTO DE.-** *No debe fundarse en razonamientos que sean propios de la sentencia que se pronuncie al conceder o negar el amparo* y que, por tanto, no pueden servir para desechar de plano la demanda relativa”.

VI.- Perspectivas sobre el Interés Legítimo.- Con base en las tesis existentes del Poder Judicial de la Federación, se pueden derivar entre otras, las siguientes *perspectivas del interés legítimo* que se surten en la especie a saber:

- A) El Interés Legítimo como Interés Cualificado.
- B) El Interés Legítimo como instrumento para perseguir la Adecuación a la Ley de los actos de autoridad.
- C) El Interés Legítimo como instrumento para impugnar la Afectación Genérica de los Derechos del Gobernado.
- D) El Interés Legítimo como instrumento del Gobernado para Evitar un Perjuicio.

Las perspectivas señaladas se explican a continuación, evidenciando el por qué se gestan en la especie:

A) El Interés Legítimo como Interés Cualificado.- Desde la iniciativa de reformas constitucionales se manejó la intención de *ampliar* en ámbito de protección constitucional con la inclusión del interés legítimo, lo que incluso ya se ha evidenciado en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, que haciendo alusión al concepto del interés legítimo, han concluido que el objeto del mismo estriba en *permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo)*, cuando se genere *un interés cualificado* respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés *que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.*

Así y para definir cuándo estamos ante dicho “interés cualificado”, las tesis que se han generado han dicho que *basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo.* De esta forma *resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos.*

Uno de los principales objetivos pretendidos con la noción del *interés legítimo* es precisamente *permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carezcan de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico).*

El interés legítimo no se ocupa del derecho subjetivo, sino simplemente del interés jurídicamente protegido *propio de las personas que por gozar de una posición calificada, diferenciable, y que se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo*¹⁹.

¹⁹ En este punto son aplicables la Tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) que figura en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Segunda Sala, página 1736 (Registro 2003067); la **Jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.)** que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, **Pleno**, página 60 (Registro 2007921); la **Jurisprudencia 8** que se advierte en el Apéndice (Actualización 2002), Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, **Segunda Sala**, página 16; la **Jurisprudencia 9** que al igual aparece en el Apéndice (Actualización 2002), Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, **Segunda Sala**, página 17; la **Jurisprudencia 2a./J. 141/2002**,

que se ve en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, **Segunda Sala**, página 241 y la Tesis que se publicara en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, página 264, que explican: **“INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO.-** La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: **1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico;** y, **4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.** Ahora, **para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo"**, ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo **suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente**, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que **al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado**, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, **el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico"**, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de **alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella**”; **“INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).-** A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, **la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto.** En consecuencia, **para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad**, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, **mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal**, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de

forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, *la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica*, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, *debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas*"; **“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.**- De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente *permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo)*, no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran acceder al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, *el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico*"; **“INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.**- De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio administrativo *basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo* para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues *el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción*. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma *resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos*, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste”; **“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.**- De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, *uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo)*, no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran acceder al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo *supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico*” e **“INTERÉS JURÍDICO. SUS ACEPCIONES TRATÁNDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.**- Para examinar la procedencia de los medios de impugnación previstos en las leyes administrativas, debe examinarse el concepto de "interesado" frente a una triple distinción: el interés como derecho subjetivo, *el interés legítimo* o de grupo y el interés simple. La primera de tales categorías ha sido

B) El Interés Legítimo como instrumento para perseguir la Adecuación a la Ley de los actos de autoridad.- Las diversas tesis del Poder Judicial de la Federación han coincidido en estimar que el *interés legítimo* debe entenderse como *la facultad para lograr que la actuación administrativa se adecúe a la ley.*

Asimismo, han apuntado que *basta que el acto de autoridad impugnado pueda tener el carácter de ilícito* y que se estime que se afecta la esfera jurídica del quejoso, *para considerar que existe interés legítimo*, en virtud de que *lo que se tutela es la legalidad in genere de la conducta de la autoridad administrativa como un elemento del Estado de derecho* que se busca mantener, resultando intrascendente, para este propósito, que el quejoso sea o no titular de un derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar no es el relativo a su pretensión, *sino el que le asiste para iniciar la acción conducente a controlar y preservar la legalidad de la conducta de la administración pública.*

Así y ejemplificativamente, se ha juzgado que *se colma el interés legítimo, en razón del derecho fundamental y garantía constitucional que derivan de los artículos 14 y 17 constitucionales, debido a que la actuación de la autoridad puede ser conculcatoria de sus intereses y derechos.*

Como colofón, *la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales* establecidas en favor de las autoridades, *las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal*²⁰.

frecuentemente delineada por los tribunales de amparo, para quienes resulta de la unión de las siguientes condiciones: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. *La segunda categoría*, poco estudiada, ya no se ocupa del derecho subjetivo, sino simplemente del interés jurídicamente protegido (generalmente grupal, no exclusivo, llamado legítimo en otras latitudes) *propio de las personas que por gozar de una posición calificada, diferenciable, se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo*, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas, *bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas*; diversas normas administrativas conceden a estos sujetos instancias, acciones o recursos, por ejemplo, los artículos 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor (previene la participación de sociedades y agrupaciones autorales en la fijación de tarifas), 19 de la Ley Federal de Radio y Televisión (establece la obligación de conceder audiencia a quienes consideren inconveniente el otorgamiento de una concesión en favor de un solicitante), 124 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (dispone la audiencia en favor de las agrupaciones de trabajadores interesados en permisos para ejecutar maniobras de servicio particular), *46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles (consagra la inconformidad de quienes estimen violado un procedimiento de licitación pública)* y 151 de la Ley de Invenciones y Marcas (da la acción de nulidad para remediar incluso la infracción de normas objetivas del sistema marcarío). Por último, en la tercera categoría se hallan los interesados simples o de hecho que, como cualquier miembro de la sociedad, desean que las leyes se cumplan y para quienes el ordenamiento sólo previene la denuncia o acción popular”.

²⁰ Resultan ilustrativas de este punto la Tesis I.4o.A.588 A, que se ubica en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, página 2651; la Tesis I.4o.A.392 A que aparece en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1768 y la **Jurisprudencia P./J. 112/2001**, que se lee en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, **Pleno**, página 881, que enseñan: **“LICITACIÓN PÚBLICA. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO EN SU DESARROLLO CRONOLÓGICO.-** El procedimiento administrativo de licitación pública, en su desarrollo

C) El Interés Legítimo como instrumento para impugnar la Afectación Genérica de los Derechos del Gobernado.- El Poder Judicial de la Federación también ha considerado que la afectación genérica de los derechos del gobernado da lugar a su interés legítimo, y específicamente *en materia administrativa, tanto la violación a los derechos subjetivos del particular, como el atentado contra sus intereses legítimos, constituyen casos de afectación a su esfera de derechos.*

Por ende, *para la procedencia del juicio de amparo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del quejoso, para que le asista un interés legítimo.* De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares *no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés*

cronológico, constituye una concatenación de actos desplegados en las siguientes etapas: I. El pliego de condiciones conforme al cual se hace el llamado a los interesados; II. La presentación de ofertas; y, III. El estudio de éstas por la administración, que culmina con la aceptación de la más conveniente en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes (conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) a través de un fallo y su notificación al interesado. En esta última etapa debe establecerse cuáles son los derechos de los participantes en la licitación que no resultaron ganadores, si es que les asiste alguno, pues aunque no tienen derecho a la adjudicación, sí lo tienen a la participación en una competencia justa. En este sentido, conviene precisar que en caso de existir actos que vicien el procedimiento de licitación, los participantes cuentan con medios de impugnación para la defensa de su *interés legítimo, el que debe entenderse como la facultad para lograr que la actuación administrativa se adecue a la ley, aunque no derive en un beneficio para ellos*"; **“INTERÉS LEGÍTIMO. LO TIENE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUIEN IMPUGNA, POR ESTIMAR ILÍCITAS LA APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, DIVERSOS DATOS RELATIVOS A PREDIOS COLINDANTES CON SU PROPIEDAD.-** Conforme a los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio contencioso administrativo *en cuanto al interés legítimo, basta que el acto de autoridad impugnado pueda tener el carácter de ilícito y que se estime que se afecta la esfera jurídica del actor, en virtud de que lo que se tutela es la legalidad in genere de la conducta de la autoridad administrativa como un elemento del Estado de derecho que se busca mantener, resultando intrascendente, para este propósito, que el actor sea o no titular de un derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar no es el relativo a su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción conducente a controlar y preservar la legalidad de la conducta de la administración pública* en relación con sujetos especialmente cualificados, atento la acción u omisión en que la autoridad pueda incurrir. En este orden de ideas, el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, que es la aprobación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal de diversos datos registrales relativos a predios colindantes con el de la actora, *colma su interés legítimo, en razón del derecho fundamental y garantía constitucional que derivan de los artículos 14 y 17 constitucionales, debido a que la actuación de la autoridad demandada puede ser eventualmente conculcatoria de sus intereses y derechos* relacionados con el predio que dice es de su propiedad” y **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.-** Si bien el medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, debe tomarse en cuenta que *la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales* establecidas en favor de tales órganos, *las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal* y, por ende, cuando a través de dicho medio de control constitucional se combate una norma general emitida por una autoridad considerada incompetente para ello, por estimar que corresponde a otro órgano regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de atribuciones que la Ley Fundamental establece, las transgresiones invocadas también están sujetas a ese medio de control constitucional, siempre y cuando exista un principio de afectación”.

jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya que *basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico*, para considerar que cuenta con interés legítimo²¹.

D) El Interés Legítimo como instrumento del Gobernado para Evitar un Perjuicio.- El Poder Judicial de la Federación ha razonado que para ser *titular de un interés legítimo*, es necesario que: *a) el gobernado sea el titular o portador de un interés (no derecho) como son tantos los que reconoce la Constitución o la ley; b) se cause una lesión subjetiva; y, c) la anulación del acto traiga como consecuencia y se concrete, ya sea en el reconocimiento de una situación individualizada*, en un beneficio o en evitar un perjuicio, adquiriendo en estos casos, por ende, un *derecho a la legalidad en el actuar de las autoridades*.

En este orden de ideas, también se ha juzgado que *es evidente que un acto de privación, proveniente del ejercicio de una norma de acción, por supuesto que les confiere*

²¹ Son aplicables por analogía, la Tesis I.13o.A.74 A que se halla en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, página 1802 y la **Jurisprudencia 2a./J. 142/2002**, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, **Segunda Sala**, página 242, del tenor literal siguiente: **“INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. CONSTITUYE UN GÉNERO QUE COMPRENDE TANTO AL DERECHO SUBJETIVO COMO AL INTERÉS LEGÍTIMO, EN TANTO QUE AMBOS ESTÁN TUTELADOS POR NORMAS DE DERECHO.-** La Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente ha interpretado el interés jurídico en su acepción de derecho subjetivo, consustancial a la materia civil, pero *en materia administrativa, tanto la violación a los derechos subjetivos del particular, como el atentado contra sus intereses legítimos, constituyen casos de afectación a su esfera de derechos*, aunque en grados distintos. Por tanto, el interés jurídico, entendido como la afectación a la esfera jurídica, en materia administrativa, abarca tanto al derecho subjetivo como al interés legítimo, pues en ambos casos existe agravio o perjuicio en la esfera de derechos del gobernado. Ello significa que el interés jurídico en el juicio de amparo constituye un género relativo a la afectación a la esfera jurídica de los gobernados, afectación que, en materia administrativa, se presenta en dos casos, a saber, con la violación a un interés legítimo, cuando lo que se pretende es la mera anulación de un acto administrativo contrario a las normas de acción, o con la violación a un derecho subjetivo, cuando lo que se solicita de la administración pública es el reconocimiento de una situación jurídica individualizada” e **“INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.-** De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, *para la procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo* para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma resulta procedente *el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico*, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste”.

una posición jurídica calificada para reclamar su ilegalidad, traduciéndose esta situación, entre otras más, en un supuesto del interés legítimo.

Como conclusión, *el interés legítimo se actualiza cuando la conducta de la autoridad sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio* a la parte que promueve *en razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentre*²².

VII.- Prueba del Interés Legítimo.- La Tesis XXII.1o.A.C.4 K (10a.)²³, la Tesis 2a. LXXX/2013 (10a.)²⁴ y la Tesis 2a. XVIII/2013 (10a.)²⁵ se refieren a la prueba del interés

²² Sobre el tema se pronuncian la Tesis I.4o.A.357 A, que aparece en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 1309 y la **Jurisprudencia P./J. 83/2001**, que se aprecia en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, **Pleno**, página 875, que ilustran lo siguiente: **“INTERÉS LEGÍTIMO. CONCEPTO.-** El gobernado en los supuestos de que *sea titular de un interés legítimo* y se considere afectado con el acto de autoridad, puede acudir a la vía contencioso administrativa a solicitar que se declare o reconozca la ilegalidad del acto autoritario que le agravia, para lo cual *es necesario que: a) sea el titular o portador de un interés (no derecho) como son tantos los que reconoce la Constitución o la ley; b) se cause una lesión subjetiva; y, c) la anulación del acto traiga como consecuencia y se concrete, ya sea en el reconocimiento de una situación individualizada, el resarcimiento de daños y perjuicios, en un beneficio o en evitar un perjuicio, adquiriendo en estos casos, por ende, un derecho a la legalidad en el actuar de las autoridades.* En este orden de ideas, *es evidente que un acto de privación, proveniente del ejercicio de una norma de acción y susceptible de incidir sobre propiedades o posesiones de uno o múltiples sujetos, por supuesto que les confiere una posición jurídica calificada para reclamar su ilegalidad, traduciéndose esta situación, entre otras más, en un supuesto del interés legítimo”* y **“CONTROVERSA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA.-** El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en la tesis número P./J. 71/2000, visible en la página novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es **“CONTROVERSAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.”**, que en la promoción de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; sin embargo, dicho agravio debe entenderse como *un interés legítimo* para acudir a esta vía el cual, a su vez, se traduce en una afectación que resienten en su esfera de atribuciones las entidades poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de su especial situación frente al acto que consideren lesivo; *dicho interés se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentre*, la cual necesariamente deberá estar legalmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

²³ Dicha Tesis que se lee en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1501 (Registro 2017348), señala textualmente lo siguiente: **“INTERÉS LEGÍTIMO INDIVIDUAL O COLECTIVO EN EL AMPARO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA PROBATORIA PARA ACREDITARLO CUANDO SE IMPUGNAN LEYES AUTOAPLICATIVAS.-** En materia de interés legítimo debe identificarse si el derecho que se defiende tiene reflejo en el derecho objetivo; si la intensidad de la afectación es en sentido amplio e indirecto y, finalmente, si la calidad con que se defiende el derecho es individual o colectiva, en tanto que esta última característica es determinante para establecer la flexibilidad en la carga de la prueba. Por ejemplo, en las tesis aisladas 1a. CCLXXXI/2014 (10a.) y 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), ***la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en materia de amparo contra leyes no se requiere ser destinatario directo de la norma, sino un tercero, en relación con la posición jurídica que se ocupe, siempre que se resienta una afectación relevante; de ahí que, en esos casos, la carga de la prueba debe ser más flexible, porque no se exige acreditar un daño directo, sino indirecto.*** Así, cuando se cuestiona la constitucionalidad de una norma por creerse destinatario de ella o por considerar que redunde en la persona, en razón de sus características específicas; esto es, cuando se acude al amparo contra leyes vía interés legítimo por una defensa individual, pueden exigirse pruebas directas o indirectas que sean concluyentes para demostrar, precisamente, ubicarse en alguna de esas categorías frente a la ley cuestionada. ***Dicho parámetro suele***

flexibilizarse en materia de interés legítimo por defensa de intereses difusos o colectivos, en tanto que la defensa de derechos bajo una posición supraindividual o transindividual, no depende de la afectación exclusiva a una persona, sino de un beneficio que puede reflejarse a un grupo que, por la dinámica misma de su funcionamiento, no goza siempre de una organización jerárquica y homogénea, ni tampoco siempre es fácil su identificación, por lo cual, *este esquema supone una ponderación más flexible de las pruebas, acorde con el parámetro de razonabilidad, para que del cúmulo de evidencias se determine si éstas son indicativas de que el grupo que acude al amparo cuenta con interés legítimo, por encontrarse en una situación jurídicamente relevante para su esfera de derechos*. En conclusión, existen diferencias en materia probatoria entre el interés jurídico y el interés legítimo, este último cuya ductilidad depende también de si la promoción del amparo contra leyes de carácter autoaplicativo se hace en defensa de un interés individual o de uno difuso o colectivo, en virtud de que en el primero se requiere demostrar con pruebas directas o indirectas que sean concluyentes de que la afectación indirecta ocurre por ubicarse como destinatario de la norma o que ésta redunde en la persona en razón de sus características específicas; mientras que *en el segundo bastan evidencias indicativas de que se pertenece al grupo que defiende el interés supraindividual o transindividual, siempre que antes se tome en cuenta el tipo de derecho que se defiende y la gradualidad o intensidad de su afectación*".

²⁴ La Tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Segunda Sala, página 1854 (Registro 2004501), reza: **"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto** establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que *atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo*, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, *el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo*, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, *para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad*. Lo anterior, porque *si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo*. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente".

²⁵ La Tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), que figura en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Segunda Sala, página 1736 (Registro 2003067), señala: **"INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO.-** La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone que debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: **1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico;** y, **4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa**. Ahora, *para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo"*, ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo *suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente*, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que *al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado*, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, *el interés legítimo no supone la existencia de un derecho*

legítimo, y son perfectamente acordes con lo argumentado hasta este momento por la quejosa, tal como se demuestra a continuación:

A) Demostración del Interés Legítimo.- La Corte señala que para demostrar el interés legítimo, el quejoso debe acreditar los siguientes extremos:

1.- Existencia de una norma constitucional.- En tales normas se debe establecer o tutelar algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada.

En la especie los artículos 1º, 3º, 4º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutelan el derecho de la quejosa para proteger la salud y obtener se respete el derecho a la educación de sus menores hijos, sin que se les exponga a riesgos tan graves como la propia muerte, y sin que se condicione su ciclo educativo a que necesariamente deban arrostrar dichos riesgos, **como pretenden las autoridades responsables**, siendo notoria la afectación que se genera en perjuicio de la quejosa, evidenciando su interés legítimo.

2.- Transgresión de dicho interés.- La infracción debe darse de manera individual o colectiva, por parte de los actos reclamados.

Visto que *los actos reclamados afectan de modo sustancial y directa la seguridad, el derecho a la salud y el derecho a la educación de los menores*, es irrefragable que se genera el interés legítimo para reclamar los actos que se impugnan, máxime que resultan patentemente contrarios a la Carta Magna.

La quejosa cuenta con interés para iniciar la acción constitucional, puesto que estamos ante *actos de autoridades administrativas que afectan sus derechos subjetivos (interés jurídico)* y además, frente a violaciones que aunque no lesionasen propiamente intereses jurídicos, *sí lesionan de manera objetiva la esfera jurídica de la quejosa*, en tanto mediante los actos reclamados *se afectan diversos derechos que la Constitución Federal le confiere*.

3.- Pertenencia del quejoso a la colectividad afectada.- En la especie los quejosos son padres de *menores de edad que pertenecen a una colectividad perfectamente definida, consistente en los educandos que cursan la educación obligatoria conforme a la Carta Magna* y que se encuentran tutelados por los 1º, 3º, 4º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dichos menores se hallan sujetos al Sistema Educativo Nacional y además por su rango de edad, ameritan especial protección en función del interés superior de la niñez.

4.- Prueba flexible y daño indirecto.- Como en el caso del interés legítimo en materia de amparo no se requiere ser destinatario directo del acto de autoridad, sino que puede tratarse de un tercero, por la posición jurídica que se ocupe, siempre que se resienta una afectación

subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella".

relevante, *la carga de la prueba debe ser más flexible, porque no se exige acreditar un daño directo, sino indirecto.*

El parámetro suele flexibilizarse en materia de interés legítimo por defensa de intereses colectivos, en tanto que la defensa de derechos bajo una posición supraindividual o transindividual, no depende de la afectación exclusiva a una persona, sino de un beneficio que puede reflejarse a un grupo.

5.- Pruebas indicativas.- Este esquema supone una *ponderación más flexible de las pruebas*, acorde con el parámetro de razonabilidad, para que del cúmulo de evidencias se determine *si éstas son indicativas de que el grupo que acude al amparo cuenta con interés legítimo, por encontrarse en una situación jurídicamente relevante para su esfera de derechos*.

Existen diferencias en materia probatoria entre el interés jurídico y el *interés legítimo*, pues en este *último cuya ductilidad depende también de si la promoción del amparo se hace en defensa de un interés individual o de uno difuso o colectivo, bastan evidencias indicativas de que se pertenece al grupo* que defiende el interés supraindividual o transindividual, siempre que antes se tome en cuenta el tipo de derecho que se defiende y la gradualidad o intensidad de su afectación.

VIII.- Interés legítimo de la parte quejosa.- En las relatadas condiciones, la quejosa cuenta con *interés legítimo para combatir los actos reclamados*, por las siguientes razones:

A) Interés Legítimo Cualificado.- El interés cualificado respecto de la legalidad de los actos que reclama la quejosa, proviene tanto de la *afectación directa a su esfera jurídica*, como de la afectación que se genera a partir de *su situación particular respecto del orden jurídico*, pues se trata de menores que tienen derecho a la protección de su salud y a la educación, sin estar sometidos a riesgos que les puedan causar hasta la muerte, que es en lo que se traducen los actos reclamados.

Lo anterior es así, porque *las Tesis del Poder Judicial de la Federación aluden a la afectación de la esfera jurídica*, como concepto amplio, que excede la mera afectación del interés jurídico. En ese sentido, *la esfera jurídica de la parte quejosa* en su calidad de padres de menores y los menores mismos, se encuentra tutelada por las disposiciones constitucionales reseñadas y en los más altos valores para el ser humano, como son la vida y la seguridad, a más de la educación, de suerte que los actos reclamados no son tan solo inconstitucionales, sino que alcanzan el ulterior grado de *anticonstitucionales*.

En ese sentido, la quejosa goza de *interés legítimo* por ubicarse en una *posición calificada, diferenciable*, misma que se desprende de la calidad que de menores y alumnos en el sistema educativo nacional tienen los quejosos que gozan de las garantías consagradas en los artículos 1º, 3º, 4º, 14, 16, 17 y 133 Constitucionales, por lo que como la afectación gestada por los actos reclamados necesariamente se traduce incluso en violación de dichos preceptos fundamentales, es palmario el interés legítimo que le acude.

Así, *la situación particular de la quejosa respecto del orden jurídico*, le ubica como beneficiaria de las normas constitucionales que hacen que los menores tengan derecho a la protección de su salud; derecho a la educación, y que ambos conceptos no se deben contraponer en función de arriesgar su vida por cumplir con su interés,.

B) Interés Legítimo para perseguir la Adecuación a la Ley por parte de las autoridades responsables.- La quejosa asimismo cuenta con *interés legítimo*, porque busca que *la actuación administrativa* de las autoridades responsables *se adecúe a la ley fundamental en primer término, y a los Tratados Internacionales*, pues resulta patentemente ilícito que las responsables ignoren los riesgos en que se pone a los menores de edad para cumplir con su objetivo de la educación, pues toda autoridad debe respetar todas las garantías de los gobernados por igual, sin hacer caso omiso de ninguna de ellas, como pretenden las autoridades responsables.

Así, la peticionaria de garantías goza de *interés legítimo*, en virtud de que a través de él se podrá *tutelar la legalidad in genere de la conducta de las autoridades administrativas responsables*, para que cumpliendo con sus obligaciones, protejan a los menores y no les impidan cursar sus estudios sin riesgos para su salud. El Interés legítimo de la quejosa, también se evidencia en la medida en que su demanda persigue *la acción conducente a controlar y preservar la legalidad de la conducta de las autoridades administrativas del Estado Federal*.

Ergo, a través de la acción de amparo se busca que se acate *la normatividad constitucional no sólo de modo formal y ficticio*, sino para que se *preserve la regularidad en el ejercicio de las atribuciones* establecidas en favor de las autoridades, *las que nunca deberían rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal*.

C) Interés Legítimo para impugnar la Afectación Genérica de los Derechos de la quejosa.- La quejosa también tiene *interés legítimo*, en tanto se puede producir una *afectación genérica de sus derechos*, pues tal como se advierte de la sola narración de los antecedentes de esta demanda de garantías, se han gestado *lesiones objetivas a la esfera jurídica de la quejosa, derivadas de su peculiar situación frente al orden jurídico*, pues los actos reclamados podrían dañar severamente la salud de los menores e incluso producirles la muerte, por el capricho del Titular del Ejecutivo Federal que haboita en un capelo, ajeno a la situación que sufre el país en la Pandemia.

D) Interés Legítimo para Evitar un Perjuicio.- La quejosa es *titular de un interés legítimo*, al reunir perfectamente las condiciones al efecto, tal como las conciben las tesis que se han reseñado antes en esta demanda, y así se enuncian a continuación:

1.- La quejosa resiente claras *lesiones subjetivas* por parte de las responsables, porque con la aplicación de los actos reclamados *ineludiblemente se expone a los menores a que sufran riesgos de salud que pueden conducir a la muerte, sin que se garantice su derecho a la educación, que se emplea más bien como una amenaza si no se acatan las órdenes de las autoridades responsables*.

2.- Al concederse el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, **la anulación de los actos de autoridad** traerá como consecuencia **el reconocimiento de una situación individualizada** consistente en que no es posible obligar a los menores a acudir a clases presenciales, sino que se les deben dar los elementos necesarios para que continúen tomándolas vía remota /por medios televisivos o internet), para lo cual el Gobierno federal deberá proveer lo necesario, como se ha venido haciendo, por lo que **al corregirse, se evitarán muchos perjuicios** para la quejosa.

Para una más fácil comprensión del presente asunto, a continuación narramos los antecedentes que dan origen a esta demanda de garantías:

A N T E C E D E N T E S

I.- Menores quejosos.- Nuestros hijos menores _____ nacieron el día _____ por lo que a la fecha cuentan con _____ de edad y cursan el _____ de Educación Primaria. **Se anexa copia certificada de las _____ actas de nacimiento (Anexos _____), así como de Registro de la Clave Única de Registro de Población de cada uno – CURP – (Anexos _____).**

II.- Ciclo Escolar 2020-2021.- Como todos los menores en el país y en el mundo, nuestros menores hijos cursaron de manera íntegra el Ciclo Escolar 2020-2021. Como también parte del Ciclo Escolar 2019-2021 vía remota, recibiendo clases en casa a través de medios remotos (clases televisivas y/o a través de internet) en función de la Pandemia de generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). **Se anexa copia de los Certificados correspondientes al Ciclo Escolar 2020-20 que acreditan que cumplieron cabalmente con sus clases y obtuvieron calificaciones aprobatorias, que les permiten acceder al grado inmediato superior (Anexos _____).**

III.- Permanencia en casa y falta de vacunas o cura respecto del virus SARS-CoV2 (COVID-19).- Los menores quejosos han permanecido en casa para evitar riesgos a su salud, y visto que a la fecha no existe una cura conocida para el virus SARS-CoV2 (COVID-19), **ni tampoco se ha previsto vacunar a menores de 16 años en México**, esto implica que todos los niños y adolescentes hasta los 15 años de edad se encuentran expuestos a sufrir la enfermedad y por ende al grave riesgo de su muerte.

IV.- Acuerdos emitidos sobre la Pandemia y su atención en México, por parte del Consejo de Salubridad General, del Presidente de la República y del Secretario de Salud.- Las autoridades de Salud han emitido los siguientes Acuerdos:

A) Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemia.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes **23 de marzo de 2020**, entró en vigor el día de su publicación según su único artículo transitorio.

En dicho acuerdo, el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, **como una enfermedad grave de atención prioritaria** y sanciona las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, diseñadas, coordinadas, y supervisadas **por la Secretaría de Salud**, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. Asimismo, señala que **la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19**, en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. Finalmente, el Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente **hasta que se disponga lo contrario**.

B) Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus de SARS-CoV2 (COVID-19) (Secretaría de Salud).- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes **24 de marzo de 2020**, entró en vigor el día de su publicación según su único artículo transitorio.

El Acuerdo tiene por objeto establecer las **medidas preventivas** que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), haciendo obligatorio su cumplimiento para los integrantes del Sistema Nacional de Salud y señalando que las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Para efectos del Acuerdo se entiende por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves.

Entre las medidas preventivas que los **sectores público**, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes:

1.- Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública, añadiendo que **las dependencias** y entidades **de la Administración Pública Federal** y las organizaciones de los sectores social y privado, **deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos** de las

personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y **de los usuarios de sus servicios.**

C) Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) (Consejo de Salubridad General) (Presidencia de la República).- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes **24 de marzo de 2020**, entró en vigor el día de su publicación según su único artículo transitorio.

Por virtud de dicho Decreto, el Presidente de la República sancionó el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el mismo día 24 de marzo de 2020 y ***dispuso que la Secretaría de Salud, a través de su Titular, realizaría todas las acciones que resultasen necesarias, a efecto de dar seguimiento a las medidas previstas en el propio Decreto*** e informaría cada veinticuatro horas al Presidente de la República sobre la situación existente.

Asimismo, se instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a coordinarse y brindar los apoyos necesarios para la instrumentación de las medidas preventivas a que se refiere el propio decreto.

D) Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) (Consejo de Salubridad General).- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes **30 de marzo de 2020**, entró en vigor el día de su publicación según su único artículo transitorio.

Por virtud de este Acuerdo, ***se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)***, señalando que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atenderla.

E) Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Secretaría de Salud).- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes **31 de marzo de 2020**, entró en vigor el día de su publicación según su primer artículo transitorio.

Según sus previsiones, este acuerdo determinó establecer como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la implementación de las medidas sanitarias siguientes, por parte de los sectores público, social y privado:

1.- Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, ***de las actividades no esenciales***, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;

2.- Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, **a cumplir resguardo domiciliario** corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible.

3.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la **modificación de la integración del Consejo de Salubridad General**, prevista en el artículo 3o. del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, para integrarse como vocales titulares a las siguientes personas:

- a) El Titular de la Secretaría de Gobernación;
- b) El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
- c) El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;
- d) El Titular de la Secretaría de Marina;
- e) El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y
- f) El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

F) Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020 (Secretaría de Salud).- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el **21 de abril de 2020**, entró en vigor el día de su publicación según su único artículo transitorio.

En función de este Acuerdo, se modificó la suspensión de las actividades no esenciales **del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020**, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, que se había establecido en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020.

G) Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias (Secretaría de Salud).- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el **14 de mayo de 2020**, entró en vigor el día de su publicación según su único artículo transitorio.

Por virtud de dicho acuerdo, se estableció una **estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como establecer acciones extraordinarias.**

La estrategia se hizo consistir en la ***reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta***, considerando las siguientes etapas:

1.- Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19;

2.- Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud, conforme al Artículo Cuarto, segundo párrafo, del presente Acuerdo, y

3.- Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, *conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.*

El semáforo que se incorporó como Anexo de este Acuerdo, establece mediante colores las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros.

ANEXO
SEMÁFORO POR REGIONES

Actividades permitidas a partir del 1 de junio de 2020

Región	Actividad	Descripción de las actividades
Rojo	Escuelas	Suspendidas
	Espacio público	Suspendidas
	Actividades económicas SOLO ESENCIALES	Solo las actividades laborales consideradas esenciales
Naranja	Escuelas	Suspendidas
	Espacio público	Aforo reducido en las actividades del espacio público en lugares abiertos. En lugares cerrados suspendidas
	Actividades económicas Generales	Actividades laborales consideradas esenciales y las actividades no esenciales con una operación reducida
Amarillo	Escuelas	Suspendidas
	Espacio público	Aforo permitido en las actividades del espacio público en lugares abiertos y en lugares cerrados con restricciones
	Actividades económicas generales	Todas las actividades laborales
Verde	Escuelas	Sin restricciones
	Espacio público	
	Actividades económicas generales	

Como se advierte con meridiana claridad, según el semáforo establecido por las autoridades, las actividades de las escuelas sólo podrían reanudarse con semáforo verde.

H) Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un

sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020 (Secretaría de Salud).- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes **15 de mayo de 2020**, entró en vigor el día de su publicación según su único artículo transitorio.

Conforme a este Acuerdo, se modificó el anterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020, en cuanto hace a Etapa 2 de la estrategia para la ***reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta***, para quedar como sigue:

2.- Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud.

D) Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19 (Secretaría de Salud).- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes **27 de julio de 2020**, entró en vigor el día de su publicación según su primer artículo transitorio.

Dicho acuerdo señala que tiene por objeto dar a conocer el medio de difusión de ***la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico*** que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19, señalando que las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, ***no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria.***

Finalmente se indica que la Secretaría de Salud dará a conocer la nueva metodología a que se refiere el propio Acuerdo en el sitio de internet coronavirus.gob.mx/semaforo.

V.- Acuerdos emitidos por parte de la Secretaría de Educación Pública.- Las Secretaría de Educación Pública ha emitido los siguientes Acuerdos:

A) Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el **16 de marzo de 2020**, entró en vigor el día de su publicación según su primer artículo transitorio.

Por virtud de dicho Acuerdo ***se suspendieron las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020*** en las escuelas de educación preescolar, primaria,

secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, ***como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la COVID-19 en el territorio nacional.***

Asimismo señaló que en caso de que existiese algún miembro de la comunidad escolar respectiva que hubiere sido diagnosticado con la COVID-19, el director del plantel informaría de manera inmediata a la Autoridad Educativa Local o Federal competente, para que estas suspendiesen, en ejercicio de sus atribuciones, las actividades en el plantel o escuela correspondiente.

B) Acuerdo número 06/03/20 por el que se amplía el periodo suspensivo del 27 de marzo al 30 de abril del año en curso y se modifica el diverso número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 2020, entró en vigor el día de su publicación según su único artículo transitorio.

En función de este Acuerdo ***se suspendieron las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 30 de abril de 2020*** en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la COVID-19 en el territorio nacional.

C) Acuerdo número 09/04/20 por el que se amplía el periodo suspensivo del 23 de marzo al 30 de mayo del año en curso y se modifica el diverso número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 30 de abril de 2020, entró en vigor el día de su publicación según su segundo artículo transitorio.

Por virtud de este Acuerdo ***se suspendieron las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 30 de mayo de 2020*** en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la COVID-19 en el territorio nacional.

D) Acuerdo número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes **5 de junio de 2020**, entró en vigor el día de su publicación según su único artículo transitorio.

Dicho Acuerdo tuvo por objeto regular acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor relativas a la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 y a las evaluaciones establecidas en los Planes y Programas de Estudio para el tipo educativo Básico (preescolar, primaria y secundaria) y Normal, así como el tipo educativo Medio Superior que dependan de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, las cuales serán aplicables tanto para la conclusión del ciclo mencionado, como para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, en función de las indicaciones de las autoridades correspondientes respecto a la emergencia sanitaria.

El propio Acuerdo se sujetó en cuanto a su alcance y vigencia, a lo que indicase las autoridades en materia de salud competentes.

E) Acuerdo número 14/07/20 por el que se reforma el diverso número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el Ciclo Escolar 2019-2020 y cumplir con los Planes y Programas de Estudio de Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria), Normal y demás para la Formación de Maestros de Educación Básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos Planes y Programas de Estudio del Tipo Medio Superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes **3 de agosto de 2020**, entró en vigor el día de su publicación según su único artículo transitorio.

De lo dispuesto en dicho acuerdo destaca el Artículo Décimo Segundo, que por su trascendencia se reproduce de manera íntegra:

“DÉCIMO SEGUNDO.- En el marco de la nueva normalidad, *priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el servicio educativo del ciclo escolar 2020-2021 se brindará utilizando fundamentalmente la televisión, con el apoyo también del avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital* a que refiere el artículo 84 de la Ley General de Educación, lo que permitirá dar cabal cumplimiento a los planes y programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria determinados por la Secretaría de Educación Pública. El inicio de dicho ciclo escolar será el 24 de agosto de 2020, por lo que las autoridades educativas locales deberán de garantizar la entrega oportuna de los libros de texto gratuitos a los estudiantes.

“Cuando en función del semáforo epidemiológico en verde y de las indicaciones de las autoridades sanitarias, se reanuden las clases presenciales en las escuelas, se llevará a cabo una etapa de valoración

diagnóstica, y de trabajo docente para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje.

“En aquellos casos en los cuales las niñas, los niños y adolescentes demuestren contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en la evaluación del ciclo escolar 2019- 2020, y ameriten una calificación mayor a la asentada en la boleta de calificaciones o certificado, la maestra o el maestro podrá realizar la rectificación de la calificación al final del periodo de diagnóstico y emitirla nuevamente. Las autoridades educativas involucradas, principalmente las áreas de control escolar, deberán realizar las gestiones necesarias con la finalidad de ejecutar el cambio de las calificaciones de manera inmediata y registrarlo en los sistemas de información escolar correspondientes”.

De esa guisa, se generó el programa “Aprende en Casa”, que con la participación del sector social y privado se implementó a través de una plataforma digital y de la red televisiva, la transmisión de diversos materiales que serían de utilidad para los educandos. En ese sentido se pueden consultar las siguientes páginas de internet²⁶ de la propia Secretaría de Educación

²⁶ Cabe acotar que el contenido de las mismas configura *hechos notorios* que hacen prueba en este juicio en términos de los artículos 88 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, máxime que la información puede ser corroborada en cada sitio correspondiente a las direcciones que se mencionan, para lo cual *en todo caso desde este momento se ofrece la inspección de dichas páginas de Internet*. En este sentido, son aplicables la Tesis I.3o.C.35 K (10a.), que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373; la *Jurisprudencia 2398*, que figura en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, página 2804; Tesis XIX.2o.P.T.37 L publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 2051; la Tesis IV.3o.A.47 K, que se ubica en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 2063; la Tesis I.7o.C.56 K, que aparece en la propia Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, página 1943; la Tesis XX.2o.33 K, que figura en la propia Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1643; la Tesis 32, que se lee en el Apéndice (actualización 2002), Tomo IV, Civil, P.R. TCC, página 99 (Genealogía Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1279, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis V.3o.9 C) y la Tesis V.3o.10 C, que figura en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 1306, que señalan: **“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.- Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate.** De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que *sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible*, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino *por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento*. Por tanto, *el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena*, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos”; **“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,**

ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.- Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, *constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular*"; **“INFORMACIÓN OBTENIDA DE UNA PÁGINA DE INTERNET. AL EQUIPARARSE SU IMPRESIÓN A UNA PRUEBA DOCUMENTAL, LE RESULTAN APLICABLES LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA ÉSTA POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO RESPECTO A SU OFRECIMIENTO, ADMISIÓN, DESAHOGO, OBJECIONES, ALCANCE Y VALOR PROBATORIO.- La información contenida en páginas de Internet constituye un adelanto científico que puede resultar útil como medio probatorio;** sin embargo, su ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración no están regulados por la legislación laboral, como sucede en relación con las pruebas confesional, testimonial, pericial y documental; no obstante ello, doctrinalmente se ha considerado que la prueba de documentos comprende todo aquel instrumento mediante el cual se representan gráficamente hechos relevantes, susceptibles de perfeccionarse y apreciarse por los sentidos, por lo que si mediante la impresión de una página de Internet se reproduce la información en un documento que puede tener valor probatorio, debe concluirse que a la impresión de esa información, dada su naturaleza, le resultan aplicables las reglas sobre el ofrecimiento, admisión, desahogo, objeciones, alcance y valor probatorio establecidas por la Ley Federal del Trabajo para la prueba documental”; **“PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBE ADMITIRSE LA DE INSPECCIÓN DE PÁGINAS OFICIALES EN INTERNET, A FIN DE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.-** El artículo 150 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de las partes en el juicio de garantías de ofrecer toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho, siempre y cuando se acate el diverso artículo 151 del propio ordenamiento y sean viables para demostrar el hecho a probar, sin que al respecto se prevea que deban ir directamente encaminadas a acreditar el acto reclamado. Por tanto, *el Juez de Distrito debe admitir la prueba de inspección de páginas oficiales en Internet ofrecida por el quejoso, a fin de demostrar la existencia de autoridades mencionadas como responsables, ya que a la luz de las señaladas disposiciones, en concordancia con los preceptos 79, 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquella ley, ese medio de prueba puede resultar válidamente útil* para esos efectos, ya que de no acreditarse que existen tales autoridades, deberá sobreseerse respecto de éstas y, en consecuencia, no se tendrá por acreditado el acto de ellas reclamado”; **“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.-** Los datos que aparecen en la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público, entre otros servicios, el directorio de sus empleados, *constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "Internet", del cual puede obtenerse el nombre del servidor público, el cargo que ocupa, así como su historial laboral; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular*"; **“DOCUMENTAL CONSISTENTE EN INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE INTERNET. EN CUANTO DOCUMENTO INNOMINADO, CON BASE EN EL ARBITRIO JUDICIAL, PUEDE ASIGNÁRSELE VALOR INDICIARIO.-** El Código de Comercio establece en sus artículos 1237, 1238 y 1297, respectivamente, cuáles son los instrumentos públicos, los privados y los simples; asimismo, en los diversos artículos 1277, 1279 y 1284 de la legislación en cita, refiere las presunciones humanas; ahora bien, de la interpretación armónica de los citados artículos se infiere que el documento que contiene información referente a las tasas de intereses recabadas de "internet", como medio de diseminación y obtención de información, el citado instrumento no constituye un documento público pues, además de no ser un documento original, no contiene sello o alguna otra característica que señale la ley para darle

Pública: <https://aprendeencasa.sep.gob.mx/> y <https://www.cicloescolar.mx/2020/04/aprende-en-casa.html>

Se anexan los “Lineamientos Generales para el uso de la Estrategia de Aprende en Casa”, publicados en Mayo de 2020 por la Secretaría de Educación Pública.

F) Acuerdo número 15/08/20 por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2020-2021, aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves **13 de agosto de 2020**, entró en vigor al día siguiente de su publicación según su primer artículo transitorio.

De conformidad con este Acuerdo, en caso de que no existiesen las condiciones sanitarias adecuadas, en términos del *Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias*, emitido por la Secretaría de Salud el día 14 de mayo del 2020, y conforme lo que las mismas autoridades sanitarias indicasen, se aplicaría en todo lo que en su caso correspondiese el *Acuerdo número 14/07/20 por el que se reforma el diverso número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los Planes y Programas de Estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos Planes y Programas de Estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos*, publicado el 3 de agosto de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

el carácter de público, ni tampoco puede considerarse como documento privado, porque no constituye un documento original, conforme lo requiere el artículo 1242 de la ley en consulta; en consecuencia, de ello se deduce que dicho instrumento sólo puede ser considerado como documento simple y, por tanto, innominado; de suerte que si éste es un medio de prueba reconocido por la ley y no se demostró que la información contenida en dicho documento sea incongruente con la realidad, de ello deriva que es apto para integrar la presuncional humana, con observancia, además, del artículo 1205, del Código de Comercio, que señala: "Son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de videos, de sonido, mensajes de datos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad."; de ahí que su valor quede al arbitrio del juzgador como indicio, y como tal deban atenderse los hechos que con dicho instrumento se pretendan demostrar, en concordancia con los demás medios de convicción que obren en autos" e **“INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO.-** El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; *ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo”*.

En otras palabras, **este Acuerdo garantizó la continuidad del programa “Aprende en Casa” hasta en tanto no se generen las condiciones sanitarias que permitan el regreso a clases presenciales en función de que el semáforo epidemiológico establecido por la Secretaría de Salud no se encuentre en color verde.**

G) Acuerdo número 26/12/20 por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) para el Ciclo Escolar 2020-2021.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes **28 de diciembre de 2020**, entró en vigor al día siguiente de su publicación según su primer artículo transitorio.

Dicho acuerdo tuvo por objeto establecer las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, en el periodo de contingencia sanitaria generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el ciclo escolar 2020-2021, encontrándose sujeto en cuanto a su alcance y vigencia, a lo que indicasen las autoridades en materia de salud competentes.

VI.- Anuncio del Presidente de la República de que las clases presenciales comenzarían en Agosto de 2021, independientemente de cualquier circunstancia.- El 14 de julio de 2021, el Presidente de la República anunció que no había ningún motivo por el cual no pudieran abrir las escuelas a finales de agosto²⁷. Pero más aún, el sábado 24 de julio de 2021 y durante una gira por el Estado de Veracruz, el Presidente de la República anunció que **en agosto se regresará a clases presenciales “llueve, truene o relampagueé”, porque “ya fue bastante”.**

De ello dieron cuenta todos los medios de comunicación²⁸, **y a pesar de la responsabilidad civil objetiva en que incide tanto el propio Titular del Ejecutivo Federal,**

²⁷ <https://www.milenio.com/politica/amlo-presentara-plan-regreso-clases-presenciales-proxima-semana>
<https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/14/politica/no-hay-nada-que-impida-el-inicio-de-ciclo-escolar-presencial-en-agosto-amlo/>
<https://www.saludiarario.com/amlo-habra-regreso-a-clases-a-pesar-de-pequeno-rebote-de-covid-19/>
<https://regeneracion.mx/ya-no-podemos-seguir-con-las-escuelas-cerradas-regreso-a-clases-en-agosto-amlo/>
<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-refrenda-su-compromiso-de-abrir-la-escuela-normal-el-mexe-finales-de-agosto>
<https://www.mediotiempo.com/otros-mundos/-no-hay-nada-que-impida-regreso-a-clases-amlo>
<https://www.reporteindigo.com/reportes/amlo-reabrira-si-o-si-escuelas-en-agosto-pese-a-tercera-ola-no-hay-nada-que-lo-impida/>
<https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/amlo-dice-que-no-hay-nada-que-impida-reabrir-las-escuelas>
<https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/14/regreso-clases-presenciales-sera-en-agosto-no-hay-nada-que-lo-impida-amlo-267802.html>

²⁸ Las notas periodísticas correspondientes pueden consultarse en los siguientes sitios de internet:
<https://www.milenio.com/politica/amlo-presentara-plan-regreso-clases-presenciales-proxima-semana>
<https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/25/habra-clases-presenciales-llueve-truene-o-relampaguee-amlo-en-medio-de-tercera-ola-de-covid-19/>

como todas las demás autoridades responsables de consuno con las previsiones de los artículos 111 Constitucional; 1910²⁹, 1913³⁰, 1915³¹, 1916³², 1917³³, 1918³⁴, 1928³⁵, 1934

<https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/7/24/llueva-truene-relampaguee-se-regresara-clases-presenciales-en-agosto-amlo-268478.html>

<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-llueve-truene-o-relampaguee-regreso-clases-presenciales-sera-en-agosto>

<https://www.excelsior.com.mx/nacional/reiniciaran-clases-presenciales-asi-llueva-truene-o-relampaguee-lopez-obrador/1461856>

<https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/07/24/amlo-llueva-truene-o-relampaguee-habra-clases-presenciales-en-agosto>

Nuevamente es de apuntar que el contenido de las mismas configura ***hechos notorios*** que hacen prueba en este juicio en términos de los artículos 88 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, máxime que la información puede ser corroborada en cada sitio correspondiente a las direcciones que se mencionan, para lo cual ***en todo caso desde este momento se ofrece la inspección de dichas páginas de Internet***. En este sentido, son aplicables la Tesis I.3o.C.35 K (10a.), que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373; la **Jurisprudencia 2398**, que figura en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, página 2804; Tesis XIX.2o.P.T.37 L publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 2051; la Tesis IV.3o.A.47 K, que se ubica en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 2063; la Tesis I.7o.C.56 K, que aparece en la propia Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, página 1943; la Tesis XX.2o.33 K, que figura en la propia Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1643; la Tesis 32, que se lee en el Apéndice (actualización 2002), Tomo IV, Civil, P.R. TCC, página 99 (Genealogía Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1279, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis V.3o.9 C) y la Tesis V.3o.10 C, que figura en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 1306, transcritas *ut supra*, de los epígrafes: **“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”**; **“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”**; **“INFORMACIÓN OBTENIDA DE UNA PÁGINA DE INTERNET. AL EQUIPARARSE SU IMPRESIÓN A UNA PRUEBA DOCUMENTAL, LE RESULTAN APLICABLES LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA ÉSTA POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO RESPECTO A SU OFRECIMIENTO, ADMISIÓN, DESAHOGO, OBJECIONES, ALCANCE Y VALOR PROBATORIO”**; **“PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBE ADMITIRSE LA DE INSPECCIÓN DE PÁGINAS OFICIALES EN INTERNET, A FIN DE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES”**; **“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”**; **“DOCUMENTAL CONSISTENTE EN INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE INTERNET. EN CUANTO DOCUMENTO INNOMINADO, CON BASE EN EL ARBITRIO JUDICIAL, PUEDE ASIGNÁRSELE VALOR INDICIARIO”**, e **“INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO”**.

²⁹ **“Artículo 1910.-** El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima”.

³⁰ **“Artículo 1913.-** Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño

que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima”.

³¹ **“Artículo 1915.-** La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.

“Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.

“Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes.

“Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2647 de este Código”.

³² **“Artículo 1916.-** Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

“Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículos 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.

“La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.

“El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

“Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original.

“Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo tanto, las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos:

I. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien;

II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa;

III. El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido, y

IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.

“La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos anteriores deberá contener la obligación de la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo espacio y la misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original, esto sin menoscabo de lo establecido en el párrafo quinto del presente artículo.

“La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo”.

³³ **“Artículo 1917.-** Las personas que han causado en común un daño, son responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligadas de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo”.

³⁴ **“Artículo 1918.-** Las personas morales son responsables de los daños y perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones”.

Bis³⁶, 2104³⁷, 2106³⁸, 2108³⁹, 2109⁴⁰, 2111⁴¹ y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal,

En más reciente noticia, el Titular del Ejecutivo Federal adujo que si los padres no quieren “que no manden a sus hijos a la escuela”⁴², llegando a aseverar que “no importa lo que piense la mayoría”⁴³, pues de todas suertes se volverá a las clases presenciales. Lo así aducido, nada resuelve, pues bajo tal óptica se pretende ignorar la posibilidad de que los educandos acrediten el Ciclo Escolar 2021-2022, y se deja sin respuesta la posibilidad de que se continúe con el sistema vía remota; es decir, con las clases por medios televisivos y/o internet (Aprende en Casa).

VII.- Gravísimos Riesgos para la Salud de los Menores.- Los actos reclamados ponen en grave riesgo la salud de los menores quejosos, pues México se halla en la tercera ola de la pandemia del virus SARS-CoV-2 y se han venido generando miles de contagios y decesos por tal causa, a lo que se suma que resulta notorio que el Gobierno Federal carece de estrategia alguna para combatir este fenómeno.

Sobre este respecto, es de reiterar que no se ha previsto en nuestro país que se vacune a menores de 16 años, con lo cual todos los niños y adolescentes de hasta 15 años de edad se encuentran en peligro de enfermar y hasta de morir, lo que jamás puede ser permisible por los padres de familia y debería ser impedido a las autoridades que deberían velar por su

³⁵ “Artículo 1928.- El que paga los daños y perjuicios causados por sus sirvientes, empleados, funcionarios y operarios, puede repetir de ellos lo que hubiere pagado”.

³⁶ “Artículo 1934 Bis.- El que cause un daño de los previstos en este Capítulo a una colectividad o grupo de personas, estará obligado a indemnizar en términos de lo dispuesto en el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles”.

³⁷ “Artículo 2104.- El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes:

“I. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste;

“II. Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080.

“El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el sólo hecho de la contravención”.

³⁸ “Artículo 2106.- La responsabilidad procedente de dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de hacerla efectiva es nula”.

³⁹ “Artículo 2108.- Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación”.

⁴⁰ “Artículo 2109.- Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación”.

⁴¹ “Artículo 2111.- Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se la impone”.

⁴² <https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/30/si-los-padres-de-familia-no-quieren-que-sus-hijos-regresen-a-clases-presenciales-pues-no-los-manden-amlo/>

<https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1959827.pues-no-los-manden-dice-amlo-a-quienes-no-quieren-que-sus-hijos-regresen-a-la-escuela.html>

⁴³ <https://www.milenio.com/politica/clases-presenciales-amlo-insiste-regreso-escuelas-pese-covid>

<https://www.pacozea.com/amlo-asegura-regreso-a-clases-aunque-la-mayoria-se-pongaa/>

<https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/29/no-me-importa-que-la-mayoria-piense-en-no-regresar-amlo-insistio-que-habra-clases-presenciales-en-agosto/>

<https://www.sinreservas.mx/no-importa-la-mayoria-aunque-no-quieran-amlo-insiste-en-regreso-a-clases-presenciales/>

seguridad y no obrar de la irresponsable e inconstitucional forma en que anuncia el Presidente de la República.

Cabe apuntar que desde que inició la pandemia, se cerraron escuelas en todo el mundo, y cuando se abrieron, se elevaron los contagios, como ha reseñado la prensa mundial. Los estudios que se han realizado sobre el tema, han señalado que los menores sí son susceptibles de contagiarse y hasta morir (ha habido muchos casos en todo el planeta⁴⁴), a más de que su asistencia a clases presenciales contribuye a la diseminación del virus entre alumnos, profesores y familiares de los menores⁴⁵.

VIII.- Urgencia del caso.- Aunque todavía faltan semanas para que inicie el siguiente ciclo escolar, y ante el anuncio efectuado por el Presidente de la República, se hace necesaria la presente demanda de garantías, a efecto de impedir que las autoridades responsables cancelen la educación a distancia y pretendan obligar a los menores a acudir a clases presenciales, so pena de desconocer sus avances académicos y no otorgarles los certificados correspondientes, aunque posean los conocimientos necesarios para acreditar el grado escolar correspondiente. Así, esta demanda amerita un tratamiento de la mayor celeridad posible, especialmente en cuanto atañe a la suspensión de los actos reclamados que se solicita en el capítulo respectivo.

⁴⁴ <https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/15/569-menores-han-fallecido-en-mexico-por-covid-19-segun-reporte-del-sipinna>
<https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/30/muertes-ninos-covid-19-brasil-ritmo-alarmante-trax/>
<https://www.dw.com/es/covid-alerta-por-muerte-de-ni%C3%B1os-en-am%C3%A9rica-latina/a-57626898>
<https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/15/reportan-569-menores-que-murieron-por-coronavirus/>
<https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/27/politica/cerca-de-600-ninos-en-mexico-han-muerto-por-covid-19-lopez-gatell/>
https://mexico.as.com/mexico/2021/06/25/actualidad/1624586468_466827.html
<https://www.animalpolitico.com/2020/07/menores-muertos-covid-19-contagios/>
<https://coronavirus.onu.org.mx/tag/mortalidad-infantil>
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56754935>
<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/al-menos-600-ninos-han-muerto-en-mexico-por-covid-19>
<https://www.youtube.com/watch?v=zvjJE6Nx9kI>

⁴⁵ Vid. entre muchos otros:

https://actualidad.rt.com/actualidad/362236-error-israel-reabrir-escuelas-coronavirus?fbclid=IwAR1cmw7ihnbUEoT_9MUzCTht3m1QYRbKfKqgXwMgFTJJJaRmC7OnTeJ2O5I
<https://www.wsj.com/articles/schools-are-reopening-then-quickly-closing-due-to-coronavirus-outbreaks-11597700886>
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.html#coronavirus-children-adolescents
<https://ourworldindata.org/grapher/school-closures-covid>
<https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker>
<https://nymag.com/intelligencer/2020/08/as-schools-open-coronavirus-outbreaks-follow.html>
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52848224>
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-08-26/no-reabrais-escuelas-coronavirus-controlado_2725123/
<https://www.milenio.com/estados/cierran-cinco-escuelas-por-casos-de-covid-19-en-sinaloa>
<https://www.xevt.com/nacional/cierre-de-escuelas-en-campeche-por-casos-de-covid-19-estaba-previsto-en-los-lineamientos-de-la-sep-hlg/151923>
<https://www.chilango.com/noticias/casos-de-covid-en-el-regreso-a-clases-en-cdmx/>

Hechas las aclaraciones apuntadas, se pasa al capítulo de Conceptos de Violación, señalando al efecto que se infringen las garantías contenidas en los artículos 1º, 3º, 4º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:

Control de convencionalidad y protección más amplia.- El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se adicionó mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, estableciendo que *todas las personas* gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y *en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte*, así como de las garantías para su protección; asimismo, el precepto estatuye que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y *con los tratados internacionales* de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas *la protección más amplia*, lo que obliga a ese H. Juzgado Federal a realizar dicho *control de convencionalidad y con la extensión que dispone el numeral citado*. En este sentido, en la especie se violan los Artículos 1º, 2, 3, 7, 12, 25, 26 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28 y 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; las Observaciones Generales Números 3 y 14; del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte; 2, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 27, 28, 29, 31, 41 y 42 de la Convención sobre los Derechos del Niño; II, VI, XII, XIII, XV, XXX y XXXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1º, 2, 5, 11, 13, 19, 24, 26, 29 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica; 1º, 2, 3, 5, 10, 13, 14, 15 y 16 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; 34, inciso i), de la Carta de la Organización de los Estados Americanos -incorporado con motivo del protocolo de reformas a la propia carta, suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 5 de diciembre de 1985-; V de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 33 y 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Derecho a la salud.- El artículo 4º de la Constitución Federal, dispone que *toda persona tiene derecho a la protección de la salud*; que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Este último precepto constitucional establece que *el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado*, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país, y que *en caso de epidemias de carácter grave* o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, *la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la*

República. Asimismo, prescribe que *la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.*

Interés superior de la niñez.- En términos de lo prescrito por los artículos 4° y 73, fracción XXIX–P constitucionales, *en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, acatando los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte* (lo que es acorde a lo dispuesto por el numeral 1° de la Carta Magna) y *garantizando de manera plena sus derechos*, pues los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de *salud y educación* para su desarrollo integral. *Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.*

El propio ordinal 4° de la *Lex Legum* señala que los ascendientes, tutores y custodios *tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios* y que *el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.*

Derecho a la educación.- El numeral 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que todo individuo tiene derecho a recibir educación, por lo cual el Estado impartirá la *educación básica*, misma que resulta *obligatoria*. En el mismo sentido, el ordinal 31, fracción I de la propia Carta Magna obliga a los suscritos a inscribir a nuestros hijos en las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior en los términos que establezca la ley. Por otro lado, la fracción III del dispositivo 3° constitucional indica que el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República, considerando los diversos sectores sociales involucrados en la educación y la fracción V del mismo precepto, ordena que además de impartir la educación, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos *necesarios para el desarrollo de la nación*, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

Además, el ordinal 3° Constitucional designa claros y muy certeros fines a la educación, señalando como *telos* el que tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, y a la vez que el criterio que orientará la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Finalmente, formula una definición del concepto ‘democracia’, al establecer que la educación será democrática, considerando a ésta no solamente como una forma de gobierno, *sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.*

Garantía de audiencia.- Para que una persona pueda ser privada de un determinado *derecho* o bien que integra su patrimonio, debe oírsele en un juicio previamente, obsequiando en su completitud las oportunidades defensiva y probatoria, permitiéndole al efecto, aportar los elementos probatorios respectivos, los cuales han de ser debidamente valorados en su

integridad y escuchándola de suerte que pueda desplegar su defensa de manera correcta y completa.

Garantía de legalidad.- El acto de molestia que emita cualquier autoridad, debe estar basado en Derecho; es decir, en las normas legales aplicables a cada caso concreto, corriendo a cargo de las responsables mencionar cuáles son las normas que sirven de sustento al acto de autoridad al que dan nacimiento, amén de que es imprescindible que la autoridad estatal indique porqué es que aplica tal o cual precepto legal, mencionando las circunstancias particulares y causas específicas por las que tales numerales o la ley invocada son aplicables al caso concreto, pues al no actuar de esa manera, es evidente la transgresión a la garantía de legalidad, tal como ocurre en la especie.

Garantía de Justicia Completa.- El Artículo 17 Constitucional prescribe la necesidad jurídica de que toda sentencia se avoque al fondo del asunto y confiera al gobernado *el mayor beneficio posible*, tal como ha sostenido la Jurisprudencia P./J. 3/2005, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, Pleno, página 5, bajo el rubro “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR LOS QUEJOSOS, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

PRIMERO.- PREMISAS JURÍDICAS QUE RIGEN EL CASO Y CUYA VIOLACIÓN VULNERA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA PARTE QUEJOSA, A MÁS DE LA CONVENCIONALIDAD.

I.- Patria Potestad.- Los suscritos somos titulares de la patria potestad de nuestros menores hijos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 411, 412, 413, 414, 414 bis, 416 Ter, 422, 424, 425 y 427 del Código Civil para el Distrito Federal y demás relativos de las Entidades Federativas, lo que implica *nuestro derecho y obligación de representarlos ante cualquier autoridad para lograr su mayor beneficio*, siendo que tal como se ha acotado *ut supra*, también presentamos esta demanda *por nuestro propio derecho* y en función del interés jurídico y legítimo que poseemos, tal como se demostró antes.

A este respecto son aplicables la Tesis 1a. LXIII/2013 (10a.) que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Primera Sala, página 828 (Registro: 2002848); la Tesis que se lee en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Tercera Sala, página 330 (Registro: 207590) que en el Informe de 1988 y en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 30, Cuarta Parte, página 69, esta tesis aparece bajo el rubro “PATRIA POTESTAD. PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO QUE LOS PADRES TENGAN LA GUARDA DEL MENOR” y la Tesis que figura en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 51, Cuarta Parte, Tercera Sala,

página 49 (Registro: 241923), bajo los rubros “PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS HIJOS”; “PATRIA POTESTAD, GUARDA DEL MENOR NECESARIA PARA EL EJERCICIO POR LOS PADRES DE LA” y “PATRIA POTESTAD, EJERCICIO DE LA, POR AMBOS PADRES”, transcritas *ut supra*, que indican que la patria potestad se configura *como una función que se le encomienda a los padres en beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial*; que involucra *nuestro deber de velar por la seguridad e integridad corporal de nuestros hijos, el cuidado de dirigir su educación, de vigilar su conducta, sus relaciones y su correspondencia, y el formar su carácter*, así como proteger sus intereses.

Es claro que la decisión de cualquier cuestión familiar suscitada en el marco de las relaciones de patria potestad debe valorar el beneficio del menor como interés prevalente. El contenido de la patria potestad como conjunto de facultades y deberes, exige su ejercicio siempre de acuerdo con la personalidad de los hijos, y el principio del interés superior del menor se consagra como criterio fundamental orientador de la actuación judicial en los procedimientos que afectan a los menores, como se verá *ut infra*.

A) Nacionalidad Mexicana de los menores.- Nuestros menores hijos son mexicanos por nacimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 30, inciso A), fracción I de la Constitución Federal.

B) Obligación de Protección de la Salud de los Menores.- El artículo 4° de la Constitución Federal, establece como garantía de los gobernados el que *toda persona tiene derecho a la protección de la salud*; que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, remitiendo a lo señalado en la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución.

Este último precepto constitucional establece que *el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado*, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país, y que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, *la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República*. Asimismo, prescribe que *la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País*.

Ahora bien, el mismo artículo 4° de la Carta Magna establece que *en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos*, pues los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de *salud y educación* para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

El propio ordinal 4° de la *Lex Legum* señala que los ascendientes, tutores y custodios *tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios y*

que *el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.*

De esa guisa, tenemos todo el derecho a que se otorgue a nuestros menores hijos la protección que la Constitución señala en materia de salud, y de exigir que así se haga por todas las autoridades responsables, que vulneran frontalmente las garantías citadas.

C) Obligación Educativa.- De consuno con lo dispuesto por el ordinal 31, fracción I de la propia Carta Magna los suscritos estamos *obligados* a inscribir a nuestros hijos en las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación en los grados que corresponden a su edad, que es exactamente lo que pretendemos hacer.

Por su parte, el numeral 414 Bis, fracción II del Código Civil para el Distrito Federal indica que quienes ejercen la patria potestad de un menor, deben dar cumplimiento, entre otras obligaciones de crianza, a *impulsar las habilidades de desarrollo intelectual y escolares de sus hijos*, lo que sería impedido por los actos reclamados, en franca violación de las garantías y derechos humanos invocados a lo largo de esta demanda de amparo. Así, la Carta Magna nos impone una obligación *que las responsables pretenden condicionar a grado tal de impedirlo*, lo que resulta inconstitucional e inconvencional.

Finalmente, el numeral 422 del mismo Código Civil para el Distrito Federal impone a las personas que tienen la patria potestad de los menores, la *obligación de educarlos convenientemente*, que es exactamente lo que venimos haciendo como objetivo cardinal, pero que se afecta al grado de impedir que avancen en la educación obligatoria, por virtud de los actos reclamados.

Por otra parte, el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nos impone la obligación de *garantizar los derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de los derechos de nuestros menores hijos*, señalando además, que *los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de educación*, entre otras (fracción I).

El propio dispositivo legal nos impone la obligación de *asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo* y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo (fracción III); de *impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada a nuestros menores hijos* (fracción IV) y de asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad (fracción V), entre otras.

De esa guisa, estamos obligados a buscar las mejores condiciones de desarrollo de la capacidad intelectual y personalidad de nuestros hijos, que es exactamente lo que pretendemos hacer y nos resulta vedado por los actos reclamados.

D) Derechos de los Padres en relación a la educación de sus hijos.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización

de las Naciones Unidas; 13. Derecho a la Educación del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y 14. Derecho a la Educación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que por ubicarse en tratados internacionales tienen el carácter de garantías del gobernado de consuno con las previsiones del ordinal 1° de nuestra Carta Magna, los padres tienen ***el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos***; los Estados Partes se comprometen a ***respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas***, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, ***y de hacer que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones***; ***los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos***, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente y ***los padres tienen derecho a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas***. Estos conceptos se desarrollan con mayor detenimiento *ut infra*.

1.- Preceptos Internacionales que tutelan específicamente el derecho de los padres en torno a la educación de sus hijos.- Como se verá con mayor detenimiento *ut infra*, los artículos 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; Artículos 14, 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; XXX Deberes para con los hijos y los padres de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 13. Derecho a la Educación del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, tutelan ***el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos***. El Estado se compromete a ***respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas***, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, ***y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones***. ***Los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos***, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente. ***Los padres tienen derecho a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas***. ***El Estado reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social***. ***A los padres les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño***. ***El Estado adoptará medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho***. ***Los padres tienen el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad***, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten. ***El Estado debe respetar los derechos y deberes de los padres de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades***. Incumbe a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados, el Estado debe prestar la asistencia apropiada a los padres para el

desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

Como colofón, sólo puede decirse que el Estado no tiene porqué pretender restringir la edad de ingreso del menor a la educación preescolar, si no es basado en criterios científicos y pedagógicos, que además, admitan la *flexibilidad* suficiente que permita a los padres y escuelas, inscribir a los menores que se hallen en un cierto parámetro de edad, como ocurre en múltiples naciones más avanzadas que la nuestra, que de otra suerte se pretende mantener en el subdesarrollo, al impedir la educación que debería ser un objetivo cardinal del Estado.

D) Obligatoriedad de la Educación.- Cabe precisar que el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que el Estado - Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Asimismo, la fracción III del dispositivo constitucional indica que el Ejecutivo Federal determinará los *planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal* para toda la República, considerando los diversos sectores sociales involucrados en la educación, entre los que sin duda se hallan *los padres de familia*.

Por su parte la fracción V del mismo precepto 3° constitucional, ordena que además de impartir la *educación preescolar, primaria, secundaria y media superior* el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos *necesarios para el desarrollo de la nación*, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

E) Interés Superior de la Niñez.- En términos de lo prescrito por los artículos 4° y 73, fracción XXIX-P constitucionales, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, *acatando los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte* (lo que es acorde a lo dispuesto por el numeral 1° de la Carta Magna) y garantizando de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de *educación para su desarrollo integral*. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Es evidente que la educación es una parte esencial de la *cultura*, y es por ello que el propio dispositivo 4° Constitucional indica que toda persona tiene derecho al acceso a la misma, así como el ejercicio de sus derechos culturales, por lo que el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura.

Finalmente y en relación con todo lo acotado, el mismo numeral 4° de la *Lex Legum* señala que el Estado *otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez*, lo que valida plenamente la intención de los suscritos de pretender inscribirlos en este año a la educación preescolar obligatoria, máxime

que en el dispositivo constitucional, textualmente se establece que *los ascendientes tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios*.

El Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, *una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño*.
2. Los Estados Partes se comprometen a *asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres*, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, *tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas*.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.

Por su parte, el precepto 416 Ter del propio Código Civil dice en su fracción I que para los efectos del propio Código, *se entenderá como interés superior del menor* la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, *el acceso a la educación que fomente su desarrollo personal*.

Ergo, es palmario que los menores tienen el derecho y nosotros también, a que se les inscriba en el nivel educativo que les corresponde, máxime que además resulta obligatorio, por lo que no se les puede coartar bajo la orden de que acudan por modo ineludible a las clases presenciales arriesgando su salud y la de su familia, o si no se les desconocerá el avance académico correspondiente, como arbitrariamente señalan los actos reclamados, con un criterio burocrático que carece de cualquier base lógica o científica.

1.- El Principio del Interés Superior del Niño tiene rango constitucional.- Tal como ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior del niño es un principio de rango constitucional, derivado de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4°. Ergo, es irrefragable que se ubica en un grado de preferencia necesaria e ineludible con relación a los actos reclamados, que al infringirlo, deben ser anulados por la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos. En ese sentido se advierte la Tesis 1a. XLVII/2011 que aparece en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Primera Sala, página 310 (Registro 162354), que expone:

“INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.- De acuerdo a una interpretación teleológica, *el interés superior del niño es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño.* En este sentido, **el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño.** En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que *el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño”.*

2.- El Principio del Interés Superior del Niño remite a la observancia de los Tratados Internacionales.- Como este principio simplemente se enuncia en nuestra Carta Magna y se desdoble en diversos conceptos que se reseñan en instrumentos normativos especializados de índole internacional, es ineludible que nuestra Constitución remite a la observancia de los mismos, según ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello que en esta demanda de garantías asimismo se acude a la noción del Control de Convencionalidad, esgrimiendo los Tratados Internacionales que sustentan el derecho de la parte quejosa para obtener lo que pretende, y que los actos reclamados hacen nugatorio, por lo que resulta que a más de inconstitucionales, son inconventionales. Sobre este aspecto, es aplicable la Tesis 1a. LXXVI/2013 (10a.), que se lee en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 887 (Registro 2003068), del tenor literal siguiente:

“INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. EL ARTÍCULO 4o. PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REPRESENTA UN PUNTO DE CONVERGENCIA CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA RECONOCIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES.- *El interés superior de la infancia, reconocido expresamente en el artículo 4o., párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma constitucional de 12 de octubre de 2011, exige la "garantía plena" de los derechos de niñas y niños.* Ahora bien, aun cuando el significado de la expresión "los derechos" puede parecer vaga, resulta importante destacar que el texto del que deriva es similar al del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en la parte que reconoce el derecho de los menores de edad a ciertas "medidas de protección" que, al igual que en la Constitución General de la República, no se enuncian. En este sentido, la aparente vaguedad en los términos empleados obedece a que ninguno de los dos

cuerpos normativos antes citados constituye un instrumento especializado en la protección de los derechos de la niñez; sin embargo, *ambos reconocen la importancia de establecer expresamente una fórmula que dé entrada a los distintos derechos o medidas previstas en los ordenamientos que sí se especializan en la materia*; de ahí que *la falta de una regulación específica del catálogo de los derechos que conforman el corpus iuris de protección de la niñez a nivel constitucional y convencional no implica su desconocimiento, sino, por el contrario, constituye una remisión expresa a los instrumentos que en forma especializada cumplen con dicha misión*. Consecuentemente, *el citado artículo 4o., párrafo octavo, representa un punto de convergencia con los derechos de los menores de edad reconocidos en tratados internacionales y constituye un parámetro de regularidad especializado respecto de los derechos de la niñez, como el que establece el artículo 1o., párrafo segundo de la Constitución General de la República respecto de los derechos humanos en general*".

En consonancia con lo anterior y en referencia a los tratados internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que esta noción implica necesariamente el perseguir que se cumplan *de modo pleno* los derechos de los menores, tal como se puede constatar en la Jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.) que se ubica en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Primera Sala, página 334 (Registro 159897), que reza:

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.- En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, *los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos* (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) *de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño"*”.

Los actos reclamados condicionan el derecho a la educación de los menores quejosos y el de sus padres a que acudan de manera presencial a la escuela, a pesar de que ello entraña graves riesgos para la salud de los menores y hasta de sus familias, dado que nuestro país se encuentra en la mitad de la tercera ola de la pandemia de coronavirus, de tal suerte que se condiciona la educación a que se corra tan grave riesgo, lo cual se opone a los tratados internacionales suscritos por nuestro país, de modo que en la especie nos hallamos ante claras transgresiones de la convencionalidad, lo que debe dar lugar a la concesión del amparo y protección de la justicia federal.

3.- El Principio del Interés Superior del Niño implica al derecho da la educación como parte del núcleo duro de derechos de los menores.- Existiendo un número considerable de derechos de los menores (que normalmente se reseñan de *modo enunciativo y no limitativo*), es natural que algunos resulten de mayor importancia que otros, siendo que los que revisten mayor trascendencia son considerados como *el núcleo duro de sus derechos*, y por ende deben primar sobre cualesquiera otras consideraciones jurídicas. Asimismo, *se debe garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos que se consideran forman parte de ese núcleo para otorgar una protección integral al menor*. Así, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender de suerte que *ese "núcleo duro de derechos" no admite restricción alguna y, constituyen un límite infranqueable para las autoridades*, siendo toral el reiterar que como parte del mismo se ubica el derecho a la educación.

Así, y como los actos reclamados restringen de modo irracional el derecho al acceso a la educación de los menores quejosos, en tanto se pretende condicionar a que por modo ineludible acudan presencialmente a la escuela corriendo el riesgo de contagiarse y hasta de perder la vida por la pandemia que azota al mundo, es inconcuso que a pesar de ser obligatoria⁴⁶, no se puede pretender que los resultados académicos se hallen condicionados a dicha concurrencia presencial, pues se afecta de modo directo ese núcleo duro de derechos que debía ser infranqueable para las autoridades, lo que redundaría en la clara inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los actos reclamados.

En ese sentido, al interpretar o aplicar una norma relacionada con menores, en atención al interés superior de éstos, el juzgador debe tener en cuenta la amplia gama de derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes relativas a proteger a los niños les confieren, pues los menores, por su falta de madurez física y mental, necesitan de una protección legal especial a fin de hacer efectivos tales derechos, los cuales les permitirán crecer en un ambiente que les garantice la satisfacción de las necesidades elementales de *educación*, entre otras.

Sobre el particular son aplicables la Tesis 1a. CXXIII/2012 (10a.), que se halla en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Primera Sala, página 259 (Registro 2000987) y la Tesis 1a. CXXII/2012 (10a.), que asimismo se puede consultar en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Primera Sala, página 260 (Registro 2000988), que explican:

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PAUTA INTERPRETATIVA PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS POR INCOMPATIBILIDAD EN EL EJERCICIO CONJUNTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.- El interés

⁴⁶ Es ineludible que toda *obligación* es correlativa a un *derecho*, de suerte que si se nos obliga a que los menores cursen la educación que corresponde a su grado académico, debe reconocerse a la vez nuestro derecho a que la misma se pueda cursar por vía remota, pues de otra suerte nos hallamos ante una *obligación imposible*.

invocado tiene la dimensión de ser una pauta interpretativa, aplicable para resolver aquellos contextos en los que se produzcan situaciones que hagan incompatible el ejercicio conjunto de dos o más derechos para un mismo niño. En estos casos, es el interés superior del menor, utilizado como pauta interpretativa, el que permite relativizar ciertos derechos frente a aquellos que constituyen el denominado "núcleo duro", para garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos que se consideran forman parte de ese núcleo dentro del sistema normativo, y con ello otorgar una protección integral al menor".

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR.- *La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección integral"*. Ahora bien, desde esta dimensión, *el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso*, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; *el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso* y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los derechos”.

4.- El Principio del Interés Superior del Niño implica la garantía y protección de los derechos de los menores para su beneficio directo.- El interés superior del menor condiciona todos los actos de autoridad que les puedan afectar de alguna manera, y por ende implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, *en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos*, de lo que se sigue que la autoridad no puede

tomar determinaciones sin base alguna que puedan afectar a los menores, tal como ocurre en la especie, pues tal como se ha hecho notar *ut supra*, el Presidente de la República ha ordenado que las clases se verifiquen por modo presencial, sin importarle las consecuencias de su determinación arbitraria y draconiana, cuando con la misma se pone en grave riesgo la salud de todos los niños y adolescentes de nuestro país, que pueden afectarse por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y hasta llegar a perder la vida, lo que además también conlleva idénticos riesgos para su familia.

En ese sentido, los quejosos ven afectado directamente su interés, en tanto que los padres buscan las mejores condiciones de salud para que la educación de sus hijos no implique arriesgar su integridad.

Son aplicables al respecto la **Jurisprudencia 1283** que aparece en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Familiar Subsección 1 – Sustantivo, página 1435 (Registro 1013882); la **Jurisprudencia I.5o.C. J/14** que figura en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2187 (Registro 162563) y la Tesis P. XLV/2008 que se lee en la misma Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Pleno, página 712 (Registro 169457), que señalan:

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO.- *El sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores*, lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que *el interés superior del menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos*”.

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO.- *El sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores*, lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que *el interés superior del menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos*”.

“MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA.- *De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos*

del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios”.

5.- El Principio del Interés Superior del Niño implica la garantía y protección de los derechos de los menores para su ejercicio pleno, para propiciar su desarrollo con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades.- En función del principio del interés superior del niño, se deben perseguir como objetivos que se garanticen y protejan sus derechos, para que los menores puedan desarrollarse de modo integral y puedan aprovechar todas sus potencialidades, lo que es particularmente trascendente en cuanto a su educación, de suerte que ésta no puede llevarse a cabo si media la posibilidad de que su salud se dañe hasta el grado de poder perder la vida.

Aquí es de recalcar que *por virtud de los actos reclamados, los menores quejosos podrían perder un ciclo escolar completo (es decir un año escolar) si no acuden presencialmente a clases, como ordena el Titular del Ejecutivo Federal, pero si lo hacen corre un gran riesgo su salud* (que podría dañarse de por vida si contraen el virus SARS-CoV2 (COVID-19), *incluso al grado de cobrar su vida*. Así, es evidente que el principio del interés superior del menor tutela a los quejosos, porque sólo si el Estado permite que continúen las clases vía remota, como se hizo desde 2020 y hasta 2021 con el programa “Aprende en Casa”, se protegerá su salud y hasta su vida, y podrán aprovechar plenamente todas sus potencialidades y desarrollarse de modo integral.

En este sentido es aplicable la Tesis 1a. CXXI/2012 (10a.), que se localiza en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Primera Sala, página 261 (Registro 2000989), que dice:

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS.- *El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como*

principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores”.

6.- El Principio del Interés Superior del Niño implica el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un *desarrollo humano integral* y a generar las *condiciones que permitan el máximo bienestar de los menores.*- Según este principio, se ha de buscar que con todos los elementos posibles, se alcance el desarrollo integral de los menores y su máximo bienestar. Es palmario que su desarrollo integral se basa de modo inevitable en la educación que puedan tener y que su máximo bienestar, *se condiciona por tan fundamental noción como es la salud*, pues sin ella no existe ninguna posibilidad de otro tipo.

En ese sentido son aplicables la Tesis I.3o.C.1022 C (9a.) que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, página 1222 (Registro 160227); la **Jurisprudencia 1284** que se ubica en el del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Familiar Subsección 1 – Sustantivo, página 1436 (Registro: 1013883) y la **Jurisprudencia I.5o.C. J/16** que se puede consultar en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2188 (Registro 162562), que enseñan:

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DEBE PONDERARSE SU PREFERENCIA EN RELACIÓN CON OTROS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ATENTO AL CASO CONCRETO.- *De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales signados por nuestro país, todas las autoridades deben velar por el interés superior del menor, el cual consiste, entre otras cosas, en asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar.* de forma tal que si bien deben velar porque los menores no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, esto tiene como excepción el interés superior del niño, como puede ocurrir en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres. Ahora, otro principio constitucional lo constituye el de seguridad jurídica, por virtud del cual las sentencias definitivas deben cumplimentarse al ser de orden público e interés general, más aún en tratándose de aquellas emitidas en las controversias del orden familiar. No obstante, tal principio no puede estar por encima del interés superior del menor de existir indicios que permitan advertir que de cumplir con una sentencia -entrega de un menor a uno de sus progenitores- éste se podría ver afectado en su psique y su integridad física, ante la existencia de conductas lesivas realizadas con posterioridad a la sentencia a cumplimentar, pues de resultar ciertos los indicios de violencia, el cumplimiento de la sentencia conllevaría a exponer al menor a todo tipo de peligros desde agresiones físicas como psicológicas o hasta sexuales, que podrían dejar marcas de por vida. Por tanto, si el juzgador de lo familiar tiene conocimiento de cualquier indicio de riesgo que vulnere el interés superior del menor, debe someter el cumplimiento de la sentencia definitiva (seguridad jurídica) a dicho principio, por virtud de lo

cual previo a ordenar el cumplimiento de una sentencia se debe allegar de las pruebas necesarias para valorar si se debe cumplimentar o no dicha sentencia. Máxime cuando en materia familiar las resoluciones no causan estado, en virtud de que éstas pueden y deben ser modificadas de existir nuevas situaciones de hecho que pudieran afectar los intereses de los niños”.

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.- *Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social”.*

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.- *Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social”.*

7.- El Principio del Interés Superior del Niño demanda de los órganos jurisdiccionales realicen un escrutinio estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión, para satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales.- En los casos concretos en que se ve involucrado un menor los jueces deben analizar con cuidado el beneficio posible que se puede obtener para el menor, y el medio idóneo al efecto, privilegiando sus necesidades básicas, entre ellas la educativa, a lo que se suma que a la vez se debe atender a la incidencia que toda alteración del derecho del menor pueda tener en su personalidad y para su futuro. Así y como los actos reclamados contrarían la posibilidad educativa de los menores quejosos haciéndola nugatoria si no acuden a las clases presenciales, nuevamente se evidencia la transgresión de este principio en detrimento de la parte quejosa.

Sobre este respecto son aplicables la Tesis 1a. LXVII/2013 (10a.) que se halla en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Primera Sala, página 824 (Registro 2002815) y la Tesis 1a. XV/2011 que se puede consultar en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Primera Sala, página 616 (Registro 162807), del tenor literal siguiente:

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS.- Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, *es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado.* Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, *es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes:* a) *se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales;* b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y *atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro.* Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, *procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor,* principio consagrado en el artículo 4o. constitucional”.

“INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.- *En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del*

niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión”.

Cabe agregar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala en diversas jurisprudencias, que la prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como ***la necesidad de satisfacer todos los derechos de los menores, lo que obliga al Estado*** e irradia efectos en la interpretación de cualesquiera otros derechos cuando el caso se refiera a menores de edad⁴⁷. Así, en la protección de los derechos de los menores rige el principio del “interés superior del niño” y ***la obligación del Estado de garantizar el acceso a todo lo necesario para su desarrollo***⁴⁸, lo que involucra ineludiblemente proteger su salud, y a la vez darles la educación que corresponde con el uso de la tecnología que existe y que ya ha probado su utilidad durante la pandemia.

Recurriendo a la Exposición de Motivos de la reforma al artículo 4° Constitucional, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado a este respecto que “En tanto principio normativo, el interés superior del niño tiene una función justificativa y una función directiva. Por un lado ***sirve para justificar todos los derechos que tienen como objeto la protección del niño.*** Por otro lado, ***constituye un criterio orientador de toda producción normativa, entendida en sentido amplio, relacionada con los derechos del niño, lo que incluye no sólo la interpretación y aplicación del derecho por parte de los jueces, sino también todas*** las medidas emprendidas por el legislador y ***las políticas públicas, programas y acciones específicas llevadas a cabo por las autoridades administrativas.*** Así, ***el principio del interés superior del niño debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal, estén relacionados directa o indirectamente con los menores***”⁴⁹.

⁴⁷ *Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana*, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, Serie C No. 130, párr. 13; *Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de mayo de 2010, Serie C No. 212, párr. 164; ***Caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México***, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C No. 205, párr. 408; *Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala*, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2009, Serie C No. 211, párr. 184. Vid. Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, Coordinadores Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, José Luis Caballero Ochoa, Christian Steiner, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Konrad Adenauer Stiftung, Primera Reimpresión, México, 2014, pp. 649 y sigs.

⁴⁸ *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C No. 110, párr. 163.

⁴⁹ Amparo Directo en revisión 1187/2010, Sentencia definitiva de 1° de septiembre de 2012.

De igual modo, la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expuesto que “En el ámbito jurisdiccional, el interés superior *es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de un menor*. Este principio ordena la realización de una *interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección a la niñez*”⁵⁰.

Como colofón, es palmario que al desatenderse el principio del interés superior del menor en la especie, se violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la parte quejosa, imponiéndose la concesión de la protección de la justicia federal, tanto por inconstitucionalidad, como por inconventionalidad de los actos reclamados.

SEGUNDO.- VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.- El derecho a la educación es un derecho humano tutelado por los ordinales 1º, 3º, 4º y 133 de la Carta Magna, máxime que se ubica en diversos Tratados Internacionales que en nuestro país conforman *garantías del gobernado*.

I.- El Derecho a la Educación como Derecho Humano tutelado por diversos Tratados Internacionales.- *El derecho a la educación es un derecho humano que debe ser tutelado en la mayor amplitud posible a favor de nuestros menores hijos*, tal como se desprende de las siguientes disposiciones internacionales aplicables al caso, especialmente de los numerales 2, 26 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos⁵¹; 2 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁵²; 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 27, 28 y 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño⁵³; XII, XIII y XXX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre⁵⁴; 1, 2, 19, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁵⁵, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica; 1, 2, 3, 5, 13, 14 y 16 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”⁵⁶ y 14, 21 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

⁵⁰ Amparo Directo en revisión 1187/2010, Sentencia definitiva de 1º de septiembre de 2012.

⁵¹ Este Tratado fue Adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a través de la Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.

⁵² Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 1981. **Artículo 24.** 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

⁵³ Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por México el 21 de septiembre de 1989 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.

⁵⁴ Este Tratado se Adoptó en la IX Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 1948.

⁵⁵ Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1981. **Artículo 19.** Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

⁵⁶ Este instrumento internacional, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1º de septiembre de 1998.

Los derechos consignados en los tratados internacionales y que en nuestro país son garantías del gobernado a la luz del artículo 1° de nuestra *Lex Legum*, se refieren a continuación, exponiendo a la vez cómo es que se infringen por los actos reclamados:

II.- Derecho a la Educación.- Los artículos 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos⁵⁷; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas⁵⁸; Artículos 14, 18, 27 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño⁵⁹; XII Derecho a la Educación y XXX Deberes para

⁵⁷ Este Tratado fue Adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a través de la Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. **Artículo 26.- 1. Toda persona tiene derecho a la educación.** La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. **2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana** y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. **3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.**

⁵⁸ **Artículo 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación.** Conviene en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conviene, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. **2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:** a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria, técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e) *Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza*, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. **3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.** **4.** Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

⁵⁹ **Artículo 14. 1.** Los Estados Partes respetarán del derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. **2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres** y, en su caso, de los representantes legales, *de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.* **3.** La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Artículo 18. 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. **2.** A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, *los Estados Partes prestarán la*

con los hijos y los padres de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre⁶⁰; 13. Derecho a la Educación del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”⁶¹ y 14. Derecho a la Educación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea⁶², tutelan este derecho como garantía del gobernado.

asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales *para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.* 3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. **Artículo 27. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. Artículo 28. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención. 3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.**

⁶⁰ **Derecho a la educación. Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación**, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. *El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.* Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos. **Deberes para con los hijos y los padres. Artículo XXX.** Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten.

⁶¹ **Artículo 13. Derecho a la Educación. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. 2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana** y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. **3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: a.** la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; **b.** la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; **c.** la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; **d.** se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación

Los preceptos referidos señalan de manera incontrovertible los siguientes derechos para los gobernados, mismos que en nuestro país tienen el rango de garantías del gobernado, merced a lo dispuesto por el ordinal 1° de nuestra Carta Magna:

A) Derecho pleno a la educación en igualdad de oportunidades.- El que *toda persona tiene derecho a la educación*, y se fija como objetivo de *lograr el pleno ejercicio de este derecho*. El derecho del niño a la educación debe perseguir *que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades*. El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, *de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado*.

En esa medida, todos los educandos deben contar con las mismas opciones; es decir, que se les impartan las clases por medios remotos como se ha venido haciendo con el programa “Aprende en Casa”, y utilizando la tecnología existente; es decir, los medios televisivos y/o internet, y no que se les obligue a acudir presencialmente a la escuela, cuando ello entraña el grave riesgo de que se afecten por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y puedan llegar hasta a perder la vida.

B) Objetivos de la educación.- El que la educación tendrá por objeto *el pleno desarrollo de la personalidad humana*. Por ello se debe proseguir activamente *el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza*.

Es claro que la salud es un concepto que condiciona cualquier otro derecho, pues sin ella se presentan dificultades y hasta la imposibilidad de ejercer cualesquiera otros derechos. Si entran en conflicto, como artificialmente lo gesta el Presidente de la República al ordenar las clases presenciales “llueva, truene o relampagueé”, es palmario que debe imperar la protección de la salud, pues si los educandos se enferman y llegan a morir, ningún derecho será posible ya.

C) Derechos de los Padres.- *El derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y en las mejores condiciones para ellos*. El Estado se compromete a *respetar el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas*. *El Estado reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y*

básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. 4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, *los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente*. 5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes.

⁶² **Artículo 14. Derecho a la educación.** 1. *Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente*. 2. *Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria*. 3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como *el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas*.

*social. A los padres les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. El Estado adoptará medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño *a dar efectividad a este derecho. Los padres tienen el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad*, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten. *El Estado debe respetar los derechos y deberes de los padres de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.* Incumbe a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados, *el Estado debe prestar la asistencia apropiada a los padres para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño* y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.*

III.- Interpretación.- Cabe hacer las siguientes anotaciones en torno a la interpretación de las normas internacionales citadas:

A) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.- Como se ha reseñado, el Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas dispone que *los Estados Partes en dicho Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación*. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conviene, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

El propio ordinal indica que *se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza* y que los Estados Partes en el Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, *y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones*.

Por su parte, y en estrecha vinculación con lo anterior, el numeral 10 del propio Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, prescribe que los Estados Partes reconocen que *se debe conceder a la familia*, que es elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y *mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo*.

El mismo dispositivo añade que se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.

En las relatadas condiciones, es ineludible que las normas internacionales citadas tutelan el derecho de los suscritos y de nuestros menores hijos, para que se les de la educación que corresponde conforme al grado que les corresponde cursar, concediéndoles la protección necesaria, de suerte que la educación no puede implicar que arriesguen su salud, como paladinamente pretende el Presidente de la República.

1.- Observaciones Generales e interpretación auténtica.- Ahora bien, en su segundo período de sesiones, celebrado en 1988, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de las Naciones Unidas (E/1988/14, párrs. 366 y 367), determinó que de conformidad con la invitación que le había dirigido el Consejo Económico y Social (resolución 1987/5), y que había hecho suya la Asamblea General (resolución 42/102), debía comenzar, a partir de su tercer período de sesiones, la preparación de *observaciones generales* sobre la base de los diversos artículos y disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con miras a prestar asistencia a los Estados Partes en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de presentación de informes⁶³. Ergo y a través del Comité citado, la ONU realiza la interpretación de los alcances del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por medio de Observaciones Generales, mismas que configuran la *interpretación auténtica* del documento⁶⁴.

2.- Calidad del derecho a la educación como derecho humano.- Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), de las Naciones Unidas reconoció de manera explícita en la Observación General N° 13, que *“La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos*. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados, económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. *La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños* contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, *la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente* y el control del crecimiento demográfico”⁶⁵.

Es claro que si no se protege la salud de los menores, resulta imposible que se realice de manera adecuada la educación, por lo que con los actos reclamados se impide que la misma se despliegue en la mejor manera en favor de los menores.

3.- Objetivos de la educación.- Además, y en la misma en la Observación General N° 13, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) ha sostenido que “De todos los objetivos de la educación que son comunes al párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al párrafo 1 del artículo 13 del Pacto, acaso el fundamental sea el que afirma que “la educación debe orientarse hacia el *pleno desarrollo de la personalidad humana*”⁶⁶”. Luego, es palmario que estos objetivos jamás se pueden alcanzar

⁶³ Fuente: N 1 a N 19: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I); N 20: E/C.12/GC/20; N 21: E/C.12/GC/21.

⁶⁴ La “interpretación auténtica” es reconocida por el Poder Judicial de la Federación, tal como se ha evidenciado *ut supra* en esta demanda de garantías.

⁶⁵ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 13, El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto), 1999, p. 1.

⁶⁶ Idem, p. 2.

si se condiciona la educación a que se arriesgue la salud y quizás la vida de los educandos, como pretende el Titular del Ejecutivo Federal.

4.- Elementos esenciales del derecho a la educación. Flexibilidad.- Finalmente a este respecto, y en la misma en la Observación General N° 13, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) ha establecido como parte de los “Elementos esenciales del derecho a la educación”, la *Accesibilidad*, que implica que las instituciones y *los programas de enseñanza deben ser accesibles a todas las personas sin discriminación*, lo que involucra entre otras cosas, que la educación debe ser accesible a todas las personas; la *Aceptabilidad*, que involucra que la forma y los contenidos de la educación deben ser aceptables, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad “para los estudiantes y, cuando proceda, los padres” y la *Adaptabilidad*, que importa que la educación *debe poder tener la flexibilidad necesaria* para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los/las alumnos/as en contextos culturales y sociales variados⁶⁷.

Contrariando lo así expuesto, el Presidente de la República pretende que los menores acudan presencialmente a clases, lo que patentemente vulnera la convencionalidad, en la medida en que *tales actos carecen de la flexibilidad* que en todo caso resulta imprescindible en este caso y que las normas internacionales señalan como un *concepto obligatorio a seguir*, pues se pretende obligar a los educandos a arriesgar su salud y hasta su vida por un capricho del Titular del Ejecutivo Federal, cuando las autoridades responsables deberían proporcionar los medios para que las clases continúen en la forma en que se han venido impartiendo, con el apoyo de medios televisivos y de internet. Así y visto que los actos reclamados resultan tan tajantes cuan arbitrarios y draconianos, pues incluso *prohíben esa flexibilidad*, cuando el Titular del Ejecutivo Federal asevera que habrá clases presenciales pase lo que pase y que no importa lo que opine la mayoría, es ineludible su inconventionalidad.

Sobre el tema resulta aplicable el principio general del derecho que enseña: *Minoribus aetas in damnis subvenire, non rebus prospere gestis obesse consuevit* (Ley 14 del Título 13 “De Procuratoribus” del Libro 2° del Código de Justiniano); esto es, “Se debe favorecer a los menores de edad en aquello que pueda afectarles, *no perjudicarles en donde obtengan ventaja*”. Ergo, no es jurídicamente admisible que se arriesgue su salud y su vida por la sola voluntad del Presidente de la República.

5.- Mínimos de Satisfacción.- Bajo el apartado de “Obligaciones básicas”, y en el punto 37 de la Observación General No. 15 se expone que “En su Observación general N° 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la *obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto*⁶⁸.”

⁶⁷ Idem, p. 3.

⁶⁸ En relación a este concepto, resulta aplicable la Tesis I.4o.A.12 K (10a.), que figura en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1345 (Registro 2002743), que enseña: “**DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONCEPTO, ALCANCES E INTERPRETACIÓN POR EL JUZGADOR.**- En el orden constitucional mexicano, el derecho al “mínimo vital” o “mínimo existencial”, el cual ha sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes

Sobre este particular, la doctrina alemana ha señalado que en realidad debemos ubicarnos ante un “*contenido maximalista* cuando se habla de una ‘realización plena’ de los derechos fundamentales”⁶⁹ y en particular en lo que toca al *derecho a la educación*, este debe caracterizarse como “derecho a la emancipación cultural-intelectual a la individualidad, a la autonomía, a la madurez político social”⁷⁰.

Este aspecto es obviamente transgredido por los actos reclamados, pues de manera simplista tajante y arbitraria, se niega el mínimo nivel de satisfacción, que estriba en tener la *flexibilidad* para continuar con las clases vía remota, como se ha venido haciendo y no obligar a los menores a acudir presencialmente a las mismas en las escuelas, donde podrían contraer el virus causante de la enfermedad del COVID-19, lo que se hace bajo apreciaciones carentes de base y de lógica alguna.

constitucionales, cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1o., 3o., 4o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123; aunado al *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, y el *Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"*, suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad, y conformados por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado (**educación**, vivienda, **salud**, salario digno, seguridad social, medio ambiente, etcétera.), por lo que se erige como un presupuesto del Estado democrático de derecho, pues si se carece de este mínimo básico, las coordenadas centrales del orden constitucional carecen de sentido. Al respecto, *el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General No. 3 de 1990, ha establecido: "la obligación mínima generalmente es determinada al observar las necesidades del grupo más vulnerable que tiene derecho a la protección del derecho en cuestión."* Así, la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales, en su connotación de interdependientes e indivisibles, fija la determinación de *un mínimo de subsistencia digna y autónoma constitucionalmente protegida, que es el universal para sujetos de la misma clase y con expectativas de progresividad en lo concerniente a prestaciones*. En este orden de ideas, este parámetro constituye el derecho al mínimo vital, el cual coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda *llevar una vida libre del temor* y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, de tal manera que este derecho abarca todas las medidas positivas o negativas necesarias para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Aunado a lo anterior, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, pues a partir de tales elementos, es que su contenido se ve definido, al ser contextualizado con los hechos del caso; por consiguiente, al igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares, por lo que debe estimarse que *el concepto no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que por el contrario, es cualitativa, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona, de esta manera cada gobernado tiene un mínimo vital diferente; esto es, el análisis de este derecho implica determinar, de manera casuística, en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo las condiciones propias del caso*”.

⁶⁹ Friauf, K. H., *Zur Role der Grundrechte im Interventions – und Leistungsstaat* (Sobre el Rol del Derecho Fundamental en las Intervenciones y en el Estado de Rendimiento), en *Deutsche Verwaltungsblatt*, 1971, p. 676. Vid. Krebs, W., *Vorbehalt des Gesetzses und Grundrechte* (Reserva de las Leyes y Derecho Fundamental), Berlin, 1975, p. 122.

⁷⁰ Reuter, L.R., *Sociales Grundrecht auf Bildung? Ansätze eines Verfassungswandels im Leistungsstaat* (¿Derecho Social Fundamental a la Educación? Piezas para una Transformación Constitucional en el Estado de Rendimiento), en *Deutsche Verwaltungsblatt*, 1974, p. 12. Cf. además, Heymann, K.D. y Stein, E., *Das Recht auf Bildung* (El Derecho a la Educación), en *Archiv des öffentlichen Rechts* 97 (1972), pp. 189 y sigs.

6.- Empleo de todos los medios apropiados para satisfacer el derecho a la educación.- En el apartado de “Aplicación en el plano nacional” y en el punto 45 de la Observación General No. 15, se establece que “De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, los Estados Partes deberán recurrir a *“todos los medios apropiados*, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas”, para dar cumplimiento a sus obligaciones dimanantes del Pacto”.

Es irrefragable que un medio apropiado para satisfacer el derecho a la educación de nuestros menores hijos en la oportunidad en la que lo necesitan, estriba en la *flexibilidad* lógica de continuar con las clases vía remota para no exponer a los menores a los riesgos de salud que entraña la pandemia, máxime que así se ha venido haciendo, contra la absurda pretensión de que necesariamente deben concurrir de modo presencial a la escuela, que se fijó de modo burocrático de gabinete y sin base alguna.

B) Derechos derivados del Pacto.- Así, el Pacto da pauta a que los padres se involucren de modo directo en la educación de sus hijos, eligiendo las condiciones y oportunidad de la misma que más se avengan a los propósitos que los mismos progenitores desean para sus hijos, lo que se persigue en este caso, máxime que los suscritos deseamos que nuestros hijos continúen con su educación, *pero en condiciones de seguridad que no les expongan al grave riesgo de contraer una enfermedad pandémica que ha cobrado millones de vidas humanas, entre ellas de menores, para quienes no existe aún vacuna.*

No debe pasar desapercibido lo explícitamente establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (Artículo 27), en cuanto hace al *derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social*, que ineludiblemente se halla condicionado por la responsabilidad de *los padres a quienes incumbe proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño*, que es exactamente lo que venimos haciendo los suscritos. El propio dispositivo internacional ordena que *el Estado adopte medidas apropiadas para ayudar a los padres a dar efectividad a este derecho*, y sucede que los actos reclamados operan de modo diametralmente opuesto; esto es, obstaculizan el cumplimiento de nuestro deber de padres y estorban para lograr la mejor educación para nuestros menores hijos, pues pretenden arriesgar su integridad física a grado tal que de contraer la enfermedad que produce el COVID-19, podrían llegar a morir, lo cual denota la inconventionalidad de los actos reclamados.

IV.- Derechos de los niños.- Los artículos 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁷¹; 19. Derechos del niño de la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁷²; 16. Derecho de la Niñez del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

⁷¹ **Artículo 24.** 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

⁷² **Artículo 19.** Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

“Protocolo de San Salvador”⁷³ y el 24. Derechos del menor de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea⁷⁴, consignan específicos derechos a favor de los menores, a saber:

A) Protección al menor por parte del Estado. Interés superior del menor.- Todo niño tiene derecho, *sin discriminación alguna por motivos de nacimiento, a las medidas de protección y a los cuidados necesarios para su bienestar que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado*. En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, *el interés superior del menor constituirá una consideración primordial*.

B) Derecho a la protección de los padres.- Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres.

C) Derecho a la educación.- Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.

Las previsiones así expuestas son claras y parecieren no ameritar mayor aclaración. No obstante, es pertinente hacer las siguientes breves acotaciones sobre la interpretación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos:

Para garantizar el mejor desarrollo del niño, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para *garantizar su educación*, para así asegurar su *proyecto de vida*⁷⁵, proveyendo un *ambiente y condiciones propicias* para su pleno desarrollo intelectual⁷⁶. El Comité de Derechos del Niño ha interpretado la palabra “desarrollo” de una manera amplia, holística, que abarca lo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social⁷⁷.

⁷³ **Artículo 16.** Derecho de la Niñez. Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.

⁷⁴ **Artículo 24.** Derechos del menor. 1. Los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tomada en cuenta en relación con los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su madurez. 2. En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial. 3. Todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si son contrarios a sus intereses.

⁷⁵ *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.* Regla 13.5 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing). Asamblea General. Resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985.

⁷⁶ *Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana.* Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130.

⁷⁷ *Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay.* Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112.

En ese sentido, es claro que los actos reclamados vulneran frontalmente tales disposiciones e interpretaciones, en tanto afectan el acceso de nuestros menores hijos a la educación, pues se les exige acudir presencialmente cuando resulta perfectamente viable el continuar con las clases vía remota, visto que así se ha hecho desde 2020. Luego es palmario que la actitud arbitraria, tajante y draconiana del Presidente de la República y las demás autoridades responsables que se enuncian en los actos reclamados, carece de base alguna y contraría los criterios de los expertos, así como lo que sucede en otras naciones, lo que denota la inconventionalidad planteada.

V.- Derecho a la cultura.- Los numerales 17 de la Convención sobre los derechos del Niño⁷⁸; XIII. Derecho a los beneficios de la cultura de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre⁷⁹ y 14. Derecho a los Beneficios de la Cultura del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”⁸⁰, señalan:

A) Derecho al acceso a Información y Materiales Culturales.- El Estado debe velar porque el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y *su salud física y mental*.

B) Derecho a participar en la vida cultural.- Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios

⁷⁸ **Artículo 17.** Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes: **a)** Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29; **b)** Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales; **c)** Alentarán la producción y difusión de libros para niños; **d)** Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena; **e)** Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

⁷⁹ **Derecho a los beneficios de la cultura. Artículo XIII.** Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. Tiene, asimismo, derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas o artísticas de que sea autor.

⁸⁰ **Artículo 14. Derecho a los Beneficios de la Cultura. 1.** Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: **a.** participar en la vida cultural y artística de la comunidad; **b.** gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; **c.** beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. **2.** Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. **3.** Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. **4.** Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.

que resulten de *los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos*.

C) Derecho a los Beneficios de la Cultura.- Para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la cultura, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte, respetando la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora, comprometiéndose a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.

Los derechos así consignados son evidentemente transgredidos por los actos reclamados, porque se niega a nuestros menores hijos el acceso a la educación por vías remotas (televisivas e internet), que bajo las condiciones pandémicas en que se encuentra México, permitiría el cimiento de la cultura educativa, y que debía regirse además por el respeto a la libertad sobre el tema.

V.- Prohibición de cualquier tipo de discriminación.- Los artículos 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos⁸¹; 2 Inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁸²; Artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño⁸³; 1. Obligación de Respetar los Derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica⁸⁴; 3. Obligación de no Discriminación del

⁸¹ **Artículo 2.-** Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

⁸² **Artículo 2. 1.** Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. **2.** Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. **3.** Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: **a)** Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; **b)** La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; **c)** Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se hayan estimado procedente el recurso.

⁸³ **Artículo 2. 1.** Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. **2.** Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

⁸⁴ **Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1.** Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”⁸⁵ y 21. No discriminación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, prohíben cualquier tipo de discriminación, disponiendo lo siguiente:

A) Prohibición de discriminación.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en los tratados citados, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, edad o cualquier otra condición. El Estado debe respetarlos derechos y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción.

B) Medidas necesarias para hacer efectivos los derechos.- El Estado debe adoptar las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos citados, que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. El Estado debe tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

C) Medios de defensa y desarrollo de sus posibilidades.- El Estado se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos hayan sido violados pueda interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y *desarrollará las posibilidades de recurso judicial*.

D) Prohibición de discriminación por nacionalidad.- Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad, lo que coincide con las ideas expuestas *ut supra* en referencia a la validez de cualquier tratado en materia de derechos humanos a favor de los gobernados en México, y especialmente en beneficio de los mexicanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que “la diferencia entre los dos artículos (1.1 y 24 CADH) radica en que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar ‘sin discriminación’ los derechos contenidos en la Convención Americana. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna, violaría el artículo 24”⁸⁶. Así, el deber de respetar y garantizar – sin discriminación – los derechos humanos, entraña la prohibición de discriminación *de iure* y *de facto*

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

⁸⁵ **Artículo 3. Obligación de no Discriminación.** Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

⁸⁶ *Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4.*

Como se ha esgrimido reiteradamente, los actos reclamados discriminan a nuestros menores hijos para ser susceptibles de obtener la educación que corresponde a su grado escolar, en tanto se les pretende obligar a que concurren presencialmente a la escuela, a pesar del grave riesgo de su salud, lo que gesta la inconventionalidad de los actos reclamados.

VI.- No limitación o supresión de los Derechos Humanos.- Los preceptos 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos⁸⁷; 41 de la Convención de los Derechos del Niño⁸⁸; Artículo 29. Normas de Interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica⁸⁹; 5 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”⁹⁰ y 53. Nivel de protección de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, establecen la imposibilidad jurídica de interpretar los derechos de forma restringida o de suprimirlos.

A) Interpretación favorable.- El contenido de los tratados internacionales de mérito no puede interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión, limitación o exclusión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en los mismos. No se pueden afectar las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en el derecho nacional o en el derecho internacional.

Ya antes se ha hecho alusión a la interpretación de estos temas realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las que se deben tener aquí por reproducidas.

VII.- Flexibilidad para adaptarse a la normatividad que garantice más protección a los derechos.- Los ordinales 4 de la Convención de los Derechos del Niño⁹¹; 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno y 26. Desarrollo Progresivo, ambas de la

⁸⁷ **Artículo 30.** Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

⁸⁸ **Artículo 41.** Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: **a)** El derecho de un Estado Parte; o **b)** El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.

⁸⁹ **Artículo 29.** Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: **a)** permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; **b)** limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; **c)** excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y **d)** excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

⁹⁰ **Artículo 5.** Alcance de las Restricciones y Limitaciones. Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.

⁹¹ **Artículo 4.** Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica⁹²; 1. Obligación de Adoptar Medidas y 2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno, ambos del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”⁹³, establecen la obligación de flexibilidad mencionada.

A) Adopción de todas las medidas necesarias para efectivizar los derechos humanos.- El Estado debe adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en los tratados mencionados. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y *culturales*, se deben adoptar esas medidas *hasta el máximo de los recursos de que disponga el Estado* y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

B) Desarrollo Progresivo.- El Estado debe adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, *para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en los tratados internacionales*, por vía legislativa u otros medios apropiados, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos.

Ya se ha hecho notar *ut supra*, que en la Observación General N° 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de las Naciones Unidas, se ha establecido como parte de los “Elementos esenciales del derecho a la educación”, la *Accesibilidad*, que implica que las instituciones y *los programas de enseñanza deben ser accesibles a todas las personas sin discriminación*, lo que involucra entre otras cosas, que la educación debe ser accesible a todas las personas; la *Aceptabilidad*, que involucra que la forma y los contenidos de la educación deben ser aceptables, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad “para los estudiantes y, cuando proceda, los padres” y la *Adaptabilidad*, que importa que la educación *debe poder tener la flexibilidad*

⁹² **Artículo 2.** Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. **Artículo 26.** Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

⁹³ **Artículo 1.** Obligación de Adoptar Medidas. Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo. **Artículo 2.** Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.

necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los/las alumnos/as en contextos culturales y sociales variados⁹⁴.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que los Derechos económicos, sociales y culturales se deben valorar con base en los principios de Principios de progresividad y no regresividad. Así, el Tribunal observa que el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido materia de pronunciamiento por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el sentido de que la plena efectividad de aquéllos “no podrá lograrse en un breve período de tiempo” y que, en esa medida, “*requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria* que refleje las realidades del mundo [...] y las dificultades que implica para cada país el asegurar [dicha] efectividad”⁹⁵.

En el marco de dicha flexibilidad en cuanto a plazo y modalidades, *el Estado tendrá esencialmente*, aunque no exclusivamente, *una obligación de hacer, es decir, de adoptar providencias y brindar los medios y elementos necesarios para responder a las exigencias de efectividad de los derechos involucrados*, siempre en la medida de los recursos económicos y financieros de que disponga para el cumplimiento del respectivo compromiso internacional adquirido⁹⁶. Así, la implementación progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de rendición de cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado podrá ser exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos humanos.

En tal tesitura, los actos reclamados impiden siquiera el ejercicio de discrecionalidad alguna, pues sería imprescindible que alguien que pueda apreciar la razonabilidad del caso, valorase los graves riesgos que se corren y con esa base científica, determinase la perfecta

⁹⁴ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 13. El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto). 1999. p. 3.

⁹⁵ Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), U.N. Doc. E/1991/23, Quinto Período de Sesiones (1990), párr. 9.

⁹⁶ El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha señalado que “[c]uando estudie una comunicación en que se afirme que un Estado Parte no ha adoptado medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, [...] examinará las medidas, legislativas o de otra índole, que el Estado Parte haya adoptado efectivamente. *Para determinar si esas medidas son ‘adecuadas’ o ‘razonables’*, el Comité podrá tener en cuenta, entre otras, las consideraciones siguientes: a) *[h]asta qué punto las medidas adoptadas fueron deliberadas, concretas y orientadas al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales*; b) *[s]i el Estado Parte ejerció sus facultades discrecionales de manera no discriminatoria y no arbitraria*; c) *[s]i la decisión del Estado Parte de no asignar recursos disponibles se ajustó a las normas internacionales de derechos humanos*; d) *[e]n caso de que existan varias opciones en materia de normas, si el Estado Parte se inclinó por la opción que menos limitaba los derechos reconocidos en el Pacto*; e) *[e]l marco cronológico en que se adoptaron las medidas*; y f) *[s]i las medidas se adoptaron teniendo en cuenta la precaria situación de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, si las medidas fueron no discriminatorias y si se dio prioridad a las situaciones graves o de riesgo*”. Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración sobre la “Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el ‘máximo de los recursos de que disponga’ de conformidad con un protocolo facultativo del Pacto”, E/C.12/2007/1, 38° Período de Sesiones, 21 de septiembre de 2007, párr. 8.

viabilidad de que las clases continúen vía remota, en vez del ciego criterio obtuso de negarlo por el capricho del Presidente de la República⁹⁷.

Como consecuencia, es paralógico que los actos reclamados pretendan exponer a graves riesgos de salud a los menores porque el Titular del Ejecutivo Federal desprecia la opinión de la mayoría, contra la esencia misma del concepto democrático, contrariando todos los dispositivos internacionales citados a lo largo de esta demanda.

TERCERO.- VIOLACIONES AL DERECHO A LA SALUD.- Los artículos 4^o⁹⁸ Constitucional; 3 y 25⁹⁹ de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 y 12¹⁰⁰ del

⁹⁷ A este respecto resultan ilustratorias la Tesis Jurisprudencial XIV.2o.44 K, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, página 1063 (Registro 184888); la Tesis P. LXII/98 que aparece en la misma Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, Pleno, página 56 (Registro 195530) y la Tesis 70, que se ve en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Segunda Sala, página 49 (Registro 390960), que rezan: “**FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLADAS. DIFERENCIAS.-** Para determinar si la autoridad goza de facultades discrecionales o regladas debe atenderse al contenido de la norma legal que las confiere. Si ésta prevé una *hipótesis de hecho ante la cual la autoridad puede aplicar o no la consecuencia de derecho prevista en la misma, según su prudente arbitrio, debe afirmarse que la autoridad goza de facultades discrecionales.* Empero, cuando la autoridad se encuentra vinculada por el dispositivo de la ley a actuar en cierto sentido sin que exista la posibilidad de determinar libremente el contenido de su posible actuación, debe concluirse que la autoridad no goza de facultades discrecionales sino regladas”; “**FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD.-** *La base toral de las facultades discrecionales es la libertad de apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley les señala, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más decisiones,* sin que ello signifique o permita la arbitrariedad, ya que esa actuación de la autoridad sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional”; y “**FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO.-** El uso del arbitrio o de la facultad discrecional que se concede a la autoridad administrativa puede censurarse en el juicio de amparo cuando se ejercita en forma arbitraria o caprichosa, cuando la decisión no invoca las circunstancias que concretamente se refieren al caso discutido, cuando éstas resultan alteradas o son inexactos los hechos en que se pretende apoyar la resolución, o cuando el razonamiento en que la misma se apoya es contrario a las reglas de la lógica”.

⁹⁸ **Artículo 4o.**

“**Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.** La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

⁹⁹ **Declaración Universal de los Derechos Humanos,** Adopción: Asamblea General de la ONU, Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948.

“**Artículo 3.-** *Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.*

“**Artículo 25.**

“**1.** *Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,* y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, *la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;* tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, *enfermedad,* invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

“**2.** La maternidad y *la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.* Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

¹⁰⁰ **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,** Adopción: Nueva York, EUA, 16 de diciembre de 1966, Adhesión de México: 23 de marzo de 1981, Decreto Promulgatorio: Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 1981.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; las Observaciones Generales Números 3 y 14¹⁰¹; del Comité de los

“Artículo 2.

“1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

“2. Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

“3. Los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos”.

“Artículo 12

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

“2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

“a) La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños;

“b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

“c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

“d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.

¹⁰¹ **Observación general N° 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto).**- De esta Observación destacan los siguientes aspectos: **1. Estas obligaciones incluyen tanto lo que cabe denominar (siguiendo la pauta establecida por la Comisión de Derecho Internacional) obligaciones de comportamiento como obligaciones de resultado** 2. La plena realización de los derechos pertinentes puede lograrse de manera paulatina, *las medidas tendentes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve* tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados. *Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto.* **3. Los medios que deben emplearse para dar cumplimiento a la obligación de adoptar medidas se definen en el párrafo 1 del artículo 2 como "todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas". En esferas como la salud, la protección de los niños y las madres y la educación, así como en lo que respecta a las cuestiones que se abordan en los artículos 6 a 9, las medidas legislativas pueden ser asimismo un elemento indispensable a muchos efectos. **4. La adopción de medidas legislativas,** como se prevé concretamente en el Pacto, *no agota por sí misma las obligaciones de los Estados Partes.* Al contrario, se debe dar a la frase *"por todos los medios apropiados"* su significado pleno y natural. Conviene que los Estados Partes indiquen en sus informes no sólo *las medidas que han adoptado sino también en qué se basan para considerar tales medidas como las más "apropiadas" a la vista de las circunstancias.* No obstante, corresponde al Comité determinar en definitiva si se han adoptado o no todas las medidas apropiadas. **5.** El Comité observa, por ejemplo, que *el disfrute de los derechos reconocidos, sin discriminación, se fomentará a menudo de manera apropiada, en parte mediante la provisión de recursos judiciales y otros recursos efectivos.* **Observación general N° 14 (2000): El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).** De esta Observación destacan los siguientes aspectos: **1. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.** **2. Numerosos instrumentos de derecho internacional reconocen el derecho del ser humano a la salud.** En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que *"toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios"*. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud. **3. El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos,** que se enuncian en la Carta**

Internacional de Derechos, *en particular el derecho* a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, *a la educación*, a la dignidad humana, *a la vida, a la no discriminación, a la igualdad*, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud. **4. La referencia que en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto se hace al "más alto nivel posible de salud física y mental" no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial de la elaboración y la redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano. **9. El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.** **11.** Otro aspecto importante es la participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional. **16. "La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas" (apartado c) del párrafo 2 del artículo 12) exigen que se establezcan programas de prevención y educación para hacer frente a las preocupaciones de salud** que guardan relación con el comportamiento... y las que afectan de forma adversa a la salud ... y se promuevan los factores sociales determinantes de la buena salud, *como la seguridad ambiental, la educación*, el desarrollo económico y la igualdad de género. El derecho a tratamiento comprende la creación de un sistema de atención médica urgente en los casos de accidentes, epidemias y peligros análogos para la salud, así como la prestación de socorro en casos de desastre y de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. *La lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica* y la reunión de datos desglosados, *la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas.* **22.** En el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 se pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas para reducir la mortalidad y la mortalidad infantil y promover el sano desarrollo de los niños. En los posteriores instrumentos internacionales de derechos humanos se reconoce que los niños y los adolescentes tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y al acceso a centros de tratamiento de enfermedades. **17.** En la Convención sobre los Derechos del Niño se exhorta a los Estados a que garanticen el acceso a los servicios esenciales de salud para el niño y su familia, incluida la atención anterior y posterior al parto de la madre. La Convención vincula esos objetivos con el acceso a la información, respetuosa del niño, sobre prevención y fomento de la salud y la prestación de ayuda a las familias y comunidades para poner en práctica esas medidas. *La aplicación del principio de no discriminación requiere que tanto las niñas como los niños tengan igual acceso a una alimentación adecuada, un entorno seguro* y servicios de salud física y mental. **23. Los Estados Partes deben proporcionar a los adolescentes un entorno seguro y propicio que les permita participar en la adopción de decisiones que afectan a su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las cuestiones que afectan a su salud. **24. La consideración primordial en todos los programas y políticas con miras a garantizar el derecho a la salud del niño y el adolescente será el interés superior del niño y el adolescente.** **30. Los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la salud, como la garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna** (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo 2) en aras de la plena realización del artículo 12. Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena realización del derecho a la salud. **31.** La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado período no debe interpretarse en el sentido de que priva de todo contenido significativo las obligaciones de los Estados Partes. Antes al contrario, *la realización progresiva significa que los Estados Partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del artículo 12.* **32.** Al igual que en el caso de los demás derechos enunciados en el Pacto, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. Si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles del Estado Parte. **33.** Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de *respetar, proteger* y *cumplir*. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. **23.******

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del

La obligación de *respetar* exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de *proteger* requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, *la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud.* 36. *Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas contra los peligros que para la salud representan la contaminación del medio ambiente y las enfermedades profesionales, así como también contra cualquier otra amenaza que se determine mediante datos epidemiológicos.* 37. *La obligación de cumplir (facilitar) requiere en particular que los Estados adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades disfrutar del derecho a la salud. Los Estados Partes también tienen la obligación de cumplir (facilitar) un derecho específico enunciado en el Pacto en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición. La obligación de cumplir (promover) el derecho a la salud requiere que los Estados emprendan actividades para promover, mantener y restablecer la salud de la población.* Entre esas obligaciones figuran las siguientes: i) fomentar el reconocimiento de los factores que contribuyen al logro resultados positivos en materia de salud, por ejemplo la realización de investigaciones y el suministro de información; ii) velar por que los servicios de salud sean apropiados desde el punto de vista cultural y el personal sanitario sea formado de manera que reconozca y responda a las necesidades concretas de los grupos vulnerables o marginados; iii) velar por que el Estado cumpla sus obligaciones en lo referente a la difusión de información apropiada acerca de la forma de vivir y la alimentación sanas, así como acerca de las prácticas tradicionales nocivas y la disponibilidad de servicios; iv) apoyar a las personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones por lo que respecta a su salud. 43. En la observación general N° 3, el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, incluida la atención primaria básica de la salud. Por consiguiente, el Comité considera que *entre esas obligaciones básicas figuran, como mínimo, las siguientes: f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un proceso participativo y transparente; esa estrategia y ese plan deberán prever métodos, como el derecho a indicadores y bases de referencia de la salud que permitan vigilar estrechamente los progresos realizados; el proceso mediante el cual se concibe la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberá prestar especial atención a todos los grupos vulnerables* o marginados. 44. El Comité confirma asimismo que *entre las obligaciones de prioridad comparables figuran las siguientes: b) Proporcionar inmunización contra las principales enfermedades infecciosas que tienen lugar en la comunidad; c) Adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y endémicas;* 48. *Las violaciones del derecho a la salud pueden producirse mediante la acción directa de los Estados o de otras entidades que no estén suficientemente reglamentadas por los Estados. La adopción de cualesquiera medidas regresivas que sean incompatibles con las obligaciones básicas en lo referente al derecho a la salud, a que se hace referencia en el párrafo 43 supra, constituye una violación del derecho a la salud.* Entre las violaciones resultantes de *actos de comisión* figura la revocación o suspensión formal de la legislación necesaria para el continuo disfrute del derecho a la salud, o la promulgación de legislación o *adopción de políticas que sean manifiestamente incompatibles con las preexistentes obligaciones legales nacionales o internacionales relativas al derecho a la salud.* 52. *Las violaciones de las obligaciones de cumplir se producen cuando los Estados Partes no adoptan todas las medidas necesarias para dar efectividad al derecho a la salud. Cabe citar entre ellas la no adopción o aplicación de una política nacional de salud con miras a garantizar el derecho a la salud de todos;* los gastos insuficientes o la asignación inadecuada de recursos públicos que impiden el disfrute del derecho a la salud por los particulares o grupos, en particular las personas vulnerables o marginadas; *la no vigilancia del ejercicio del derecho a la salud en el plano nacional, por ejemplo mediante la elaboración y aplicación de indicadores y bases de referencia;* el hecho de no adoptar medidas para reducir la distribución no equitativa de los establecimientos, bienes y servicios de salud; la no adopción de un enfoque de la salud basado en la perspectiva de género; y *el hecho de no reducir las tasas de mortalidad infantil y materna.*

cual México es parte; 2¹⁰² de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10¹⁰³ del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; y 34, inciso i)¹⁰⁴, de la Carta de la Organización de los Estados Americanos -incorporado con motivo del protocolo de reformas a la propia carta, suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 5 de diciembre de 1985- y 24¹⁰⁵ de la Convención Sobre los Derechos del Niño¹⁰⁶, establecen una

¹⁰² Publicada en el Diario Oficial de la federación el 7 de mayo de 1981

“Artículo 2.- Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

¹⁰³ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre de 1998.

Artículo 10.- Derecho a la salud

“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

“2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

“a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

“b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

“c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

“d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;

“e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y

“f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”.

¹⁰⁴ Reformada por los Protocolos de Buenos Aires, 27 de febrero de 1967, Cartagena de Indias, 5 de diciembre de 1985, Washington, 14 de diciembre de 1992, y Managua, 10 de junio de 1993, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1949.

“Artículo 34.- Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas:

“i) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica;...”.

¹⁰⁵ Artículo 24 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia. 3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr

serie de obligaciones a cargo del Estado Mexicano que las autoridades responsables infringen de manera frontal, a saber:

I.- Las garantías consistentes en:

- A) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
- B) Todo individuo tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona.
- C) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho al seguro en caso de enfermedad.
- D) La infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
- E) El Estado se compromete a adoptar medidas especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos mencionados.
- F) El Estado se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos mencionados sin discriminación alguna por motivos de opinión política o de otra índole, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
- G) El Estado reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
- H) Entre las medidas que debe adoptar el Estado a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figuran las necesarias para:

progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

¹⁰⁶ La Convención fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989 por la Organización de las Naciones Unidas a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

“Artículo 24

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

“2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

“a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

“b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;

“c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

“d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;

“e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

“f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

“3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

“4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”.

- 1.- La reducción de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños.
- 2.- La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas y la lucha contra ellas.
- 3.- La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad

D) El Estado reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades, asegurando la plena aplicación de este derecho y, en particular, que adoptará las medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez y desarrollar la atención sanitaria preventiva.

A) Obligaciones de las Autoridades Responsables.- Las obligaciones reseñadas incluyen tanto **a) Obligaciones de Comportamiento**, como **b) Obligaciones de Resultado**, lo que involucra que las medidas tendentes a lograr los objetivos a que se han enunciado, deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve; deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones referidas; los medios que deben emplearse para dar cumplimiento a la obligación de adoptar medidas son *“todos los medios apropiados*, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas”. En esferas como la salud, la protección de los niños y la educación, las medidas legislativas pueden ser asimismo un elemento indispensable a muchos efectos, pero no agotan por sí mismas las obligaciones del Estado que debe emplear *“todos los medios apropiados”* y que sean *“las más apropiadas”* a la vista de las circunstancias.

B) Alcance del derecho a la salud.- La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, en particular el derecho a la educación, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad. En ese sentido, el “más alto nivel posible de salud física y mental” a que tienen derecho todos los gobernados, y especialmente los niños y adolescentes, no se limita al derecho a la atención de la salud, sino que abarca una amplia gama de factores socioeconómicos *que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como las condiciones sanitarias adecuadas, seguras y sanas, lo que ineludiblemente implica que no se deba concurrir a la escuela en la mitad de una pandemia, como pretenden las responsables.*

El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, y es claro que las condiciones imperantes en el país a la mitad de la tercera ola de coronavirus no son idóneas para exponer a los niños y adolescentes a que se contagien y quizás hasta fallezcan, lo que parece no importarles a las autoridades responsables.

C) Necesidad Jurídica de tomar en cuenta a los destinatarios de las medidas que afectan su salud.- A este respecto, el tema de la salud involucra la participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional, y es notorio que el Presidente de la República contraría esta obligación de manera inverecunda, cuando aduce que “no

importa lo que diga la mayoría” y que “llueva truene o relampagueé”, se regresará a las clases presenciales.

D) Necesidad Jurídica de la Prevención.- La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, y la lucha contra ellas, que se encuentran como específico (que se enuncian en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas) *exigen que se establezcan programas de prevención y educación para hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el comportamiento*, y las que afectan de forma adversa a la salud, y se promuevan los factores sociales determinantes de la buena salud, *como la seguridad ambiental y la educación*, lo que jamás se puede alcanzar ignorando la pandemia y exponiendo a la infancia y adolescencia del país a que se contagien y/o mueran, que es exactamente como operan las responsables, que tienen abandonada cualquier tipo de estrategia para combatir dicha pandemia.

E) Necesidad Jurídica del Uso de la Tecnología que facilite la prevención de las enfermedades.- A ello se suma que la lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos del Estado para facilitar, entre otras cosas, *las tecnologías pertinentes como sería el uso de medios televisivos e internet para impartir las clases* (tal como se ha hecho durante 2020 y parte de 2021); el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica, y la reunión de datos desglosados, la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas.

F) Responsabilidad Jurídica de tomar medidas para evitar riesgos potencialmente mortales en detrimento de la infancia y adolescencia.- Bajo la misma óptica, el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas pone de manifiesto la *necesidad de adoptar medidas para reducir la mortalidad infantil y promover el sano desarrollo de los niños*, lo que resulta imposible exponiéndolos a una enfermedad pandémica de la que a la fecha no se conoce cura y cuando no existe la previsión para vacunar a niños y adolescentes, sino desde los 16 años de edad (siendo que además ni siquiera se ha iniciado la vacunación de los adolescentes a partir de los 16 años), y a pesar de que *en los instrumentos internacionales de derechos humanos se reconoce que los niños y los adolescentes tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud*

Es por tal razón que la aplicación del principio de no discriminación requiere que tanto las niñas como los niños tengan igual acceso a *un entorno seguro*, que jamás podría encontrarse en la escuela donde se encontrarán con muchos otros niños y jóvenes, de cuya salud no puede responder el Estado, máxime que cada uno de ellos se halla expuesto a los riesgos que se gesten en su seno familiar al menos. Luego y como el Estado debe proporcionar a los adolescentes un entorno seguro y propicio que les permita participar en la adopción de decisiones que afectan a su salud, es notorio que incumple su deber cuando los manda a las clases presenciales donde pueden contraer coronavirus y hasta morir de dicha enfermedad.

La consideración primordial en todos los programas y políticas con miras a garantizar el derecho a la salud del niño y el adolescente se encuentra en el interés superior del niño y el adolescente, que está siendo ignorado por las responsables. Así, el Estado tiene la obligación

por lo que respecta al derecho a la salud, de adoptar medidas en aras de su plena realización, las que deben ser deliberadas y concretas.

G) No son permisibles jurídicamente las medidas regresivas.- Es importante hacer notar que la Organización de las Naciones Unidas ha expresado de manera contundente que en acatamiento del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud*, como claramente resulta la pretensión de que se acuda a clases presenciales sin importar las consecuencias, que no sufrirían las responsables, sino la infancia y adolescencia mexicanas.

La obligación de cumplimiento de las garantías contenidas en los instrumentos internacionales, requiere que el Estado adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, *administrativo*, presupuestario, judicial o de otra índole *para dar plena efectividad al derecho a la salud*, a más de que *también tiene la obligación de adoptar medidas contra los peligros que para la salud*, así como contra *cualquier otra amenaza que se determine mediante datos epidemiológicos*. Luego, la obligación de cumplir (facilitar) requiere en particular que el Estado adopte medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades disfrutar del derecho a la salud. A ello se suma que el Estado también tiene la obligación de cumplir (facilitar) el derecho a la salud en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición. Así, es ineludible que las responsables están obligadas a dar continuidad al programa “Aprende desde Casa”, y utilizando los medios televisivos e internet, impartir las clases necesarias para salvaguardar la salud de los educandos.

A lo anterior se adosa que la Organización de las Naciones Unidas estima que *las violaciones del derecho a la salud pueden producirse mediante la acción directa del Estado cuando se adoptan cualesquiera medidas regresivas incompatibles con las obligaciones básicas en lo referente al derecho a la salud*, lo que evidentemente se gesta cuando se encía a los niños y adolescentes a las clases presenciales sin ningún tipo de cura para la enfermedad pandémica y sin que se les haya proporcionado ningún tipo de inmunización.

La propia Organización de las Naciones Unidas expresa que *las violaciones de las obligaciones de cumplir se producen cuando el Estado no adopta todas las medidas necesarias para dar efectividad al derecho a la salud*, como sería la no adopción o aplicación de una política nacional de salud con miras a garantizar el derecho a la salud de todos; la no vigilancia del ejercicio del derecho a la salud en el plano nacional, por ejemplo mediante la elaboración y aplicación de indicadores y bases de referencia y el hecho de no reducir las tasas de mortalidad infantil, todo lo cual se genera en la especie, pues las responsables pretieren cualquier obligación y de manera arbitraria han decidido que se reinicien las clases presenciales a pesar de que nos hallemos en plena pandemia, con variantes del virus que ya se hallan en territorio nacional (como es la delta) y que se generen muy importantes riesgos para la salud de los educandos, que podrían llevarlos hasta la muerte incluso.

H) Colofón.- Como se advierte, las autoridades responsables infringen de manera frontal todas y cada una de sus obligaciones constitucionales y convencionales, en tanto que

con su determinación irracional para que las clases presenciales se reanuden a pesar de que existe una tercera ola de la pandemia que afecta a nuestro país, y que se dan miles de contagios y decesos de manera cotidiana, han decidido arriesgar la salud y hasta la vida de los niños y adolescentes.

II.- Garantía del Derecho a la Salud en la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación.- Haciendo la interpretación del alcance del artículo 4º de la Carta magna, y a la vez analizando el contenido y obligaciones que para el Estado Mexicano se desprenden de los Tratados Internacionales, el Poder Judicial de la federación ha estimado lo siguiente:

A) Deberes del Estado Mexicano.- La faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, lo cual comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas que propendan a la protección de la salud, a partir de la identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, como es el caso de una pandemia¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Sobre este respecto, son aplicables la Tesis XVII.1o.P.A.21 K (10a.) que se puede consultar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, Décima Época, página 1931 (Registro 2022336); la **Jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.)** que se advierte en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, **Primera Sala**, página 486 (Registro 2019358); la Tesis 1a. LXV/2008 que se ubica en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, Primera Sala, página 457 (Registro 169316), y la Tesis P. XVI/2011 que se puede encontrar en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pleno, página 29 (Registro 161333), del tenor literal siguiente: **“SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO DECRETADA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO PARA QUE SE PROVEA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD DURANTE LA EPIDEMIA POR COVID-19. SU CUMPLIMIENTO NO PUEDE CONDICIONARSE A LA APROBACIÓN DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA HACER FRENTE A LA OBLIGACIÓN IMPUESTA, LO QUE NO RESULTA VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.- El derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye una responsabilidad social que se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud; y aunque el financiamiento de los servicios respectivos no es exclusivo del Estado, sí es responsable de que se presten de manera eficiente.** Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL.", consideró que el derecho a la protección de la salud tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. *La faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, lo cual comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.* Asimismo, del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que *el Estado Mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos humanos reconocidos en la Convención*, sobre dichas obligaciones. Por su parte, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió la "Observación General Número 3", en la que se sostuvo, sustancialmente, que *estas obligaciones se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo*

de flexibilidad, que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país, asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por tanto, *la obligación de "cumplir", requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho a la salud.* Reiterándose que si el Estado Mexicano aduce que la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud del pago, tendrá que justificar no sólo ese hecho, sino que ha realizado todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que dispone para satisfacer el derecho a la salud. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis aislada P. XX/2002, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO.", y sostuvo que el citado precepto constitucional acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé que pueda variar, al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la Norma Constitucional subyace el principio de modificación presupuestaria. Por lo que puede adecuarse a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que permiten solicitar ajustes presupuestarios necesarios para enfatizar las obligaciones pecuniarias del Estado. Ahora bien, el Consejo de Salubridad General aprobó, por unanimidad, entre otros, la elaboración final de las consideraciones sobre el proyecto de Guía para Asignación de Recursos en Situación de Contingencia. Por tanto, **conceder la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado para que las autoridades responsables provean del equipo de protección personal a los trabajadores del sector salud, según la guía, en función de los riesgos de trabajo, durante la epidemia generada por el virus Sars-CoV2 (COVID-19), no viola el artículo 126 constitucional,** en razón de que el cumplimiento de la suspensión no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, ya que la supremacía de la Constitución General impone que aquélla se acate inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado precepto constitucional, pues técnicamente no se contravendría, sino que se actualizaría un caso de excepción, en el que no sería punible la conducta de la autoridad"; **"DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL.-** La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. **Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.** De ahí que resulta evidente que **el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar.** Por otro lado, **la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras**"; **"DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.-** Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que **toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar** y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al **derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho;** y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de

B) Protección de la Salud.- Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene la obligación constitucional de procurar en favor de las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar, y atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende la obligación de emprender las acciones necesarias para alcanzar los fines referidos, lo que involucra el desarrollo de políticas públicas e identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, como en el caso de la pandemia que afecta no sólo a nuestra nación, sino al mundo entero.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual *toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.* En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, *el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano.* Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y *entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.* Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud"; y **“DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN.-** Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y *refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él.* Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también *impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas.* Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud”.

Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes y **tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud.**

En esa tesitura, las autoridades responsables tienen la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Sobre estos aspectos, son aplicables la Tesis 1a. CCCXLIII/2015 (10a.) que se ve en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Primera Sala, página 969 (Registro 2010420); la Tesis 2a. CVIII/2014 (10a.) que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Segunda Sala, página 1192 (Registro 2007938); la Tesis I.4o.A.86 A (10a.) que se localiza en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1759 (Registro 2004683); y la Tesis P. XVII/2011 que se halla en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pleno, página 30 (Registro 161332), que expresan: “**DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN.-** *Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes.* Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) **tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud;** v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes”; “**SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO.-** *El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales,* mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, **teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga.** De ahí que **se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado**”; “**DERECHO A LA SALUD. FORMA DE CUMPLIR CON LA OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO 14 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS SOCIALES Y**

C) Renuencia de las autoridades en el cumplimiento de las garantías que tutelan el derecho a la salud.- La “renuencia” de las autoridades responsables a cumplir con los deberes constitucionales reseñados se presenta en tanto no sólo no están dispuestas a utilizar el máximo de los recursos de que disponen para dar efectividad del derecho a la salud, sino que operan en sentido exactamente opuesto, negando la existencia de la grave enfermedad pandémica y de sus efectos en los menores, cuando pretenden que necesaria e ineludiblemente deben acudir a las clases presenciales¹⁰⁹.

CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA GARANTIZAR SU DISFRUTE.- El Estado Mexicano suscribió convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar, al más alto nivel, ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute del derecho a la salud, y existen documentos que las desarrollan en términos de su contenido y alcance. Uno de los más importantes es la Observación General Número 14 del Comité de los Derechos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte y el que, esencialmente, consagra la obligación de proteger, respetar y cumplir progresivamente el derecho a la salud y no admitir medidas regresivas en su perjuicio, absteniéndose de denegar su acceso, garantizándolo en igualdad de condiciones y sin condicionamiento alguno, debiendo reconocer en sus ordenamientos jurídicos, políticas y planes detallados para su ejercicio, tomando, al mismo tiempo, medidas que faciliten el acceso de la población a los servicios de salud, es decir, este ordenamiento incluye no solamente la obligación estatal de respetar, sino también la de proteger y cumplir o favorecer este derecho. En estas condiciones, ese cumplimiento requiere que los Estados reconozcan suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes, adoptando una política nacional de salud acompañada de un plan detallado para su ejercicio, cuando menos en un mínimo vital que permita la eficacia y garantía de otros derechos, y emprendan actividades para promover, mantener y restablecer la salud de la población, entre las que figuran, fomentar el reconocimiento de los factores que contribuyen al logro de resultados positivos en materia de salud; verbigracia, la realización de investigaciones y el suministro de información, velar porque el Estado cumpla sus obligaciones en lo referente a la difusión de información apropiada acerca de la forma de vivir y de alimentación sanas, así como de las prácticas tradicionales nocivas y la disponibilidad de servicios, al igual que apoyar a las personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones por lo que respecta a su salud”; y **“DERECHO A LA SALUD. LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY IMPONE DAN FORMA A UNA ESPECÍFICA MODALIDAD DE GOCE DE AQUÉL, Y DELIMITAN SU CONTENIDO EN UNA SOCIEDAD DETERMINADA.-** La naturaleza y la intensidad de las obligaciones que las normas imponen a los poderes públicos o a los particulares para mantener, preservar, restablecer o promover la salud son directamente relevantes desde la perspectiva del contenido garantizado por el derecho a la salud y pueden ser denunciadas por los particulares en caso de afectación, aunque no sean los destinatarios de las citadas normas. Así, las obligaciones que la ley impone a publicistas, promotores de productos derivados del tabaco, propietarios o poseedores de lugares concurridos, áreas interiores de trabajo (públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior) o consumidores de productos derivados del tabaco, por ejemplo, dan forma a una específica modalidad de goce del derecho a la salud y, por tanto, delimitan su contenido en una sociedad determinada”.

¹⁰⁹ A este respecto es aplicable la Tesis 1a. XV/2021 (10a.) que se lee en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, Primera Sala, página 1224 (Registro 2022889), que explica: **“DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE SU PLENA EFECTIVIDAD. Hechos:** Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece el cual, por su parte, se limitó a justificar esa falta de entrega por la inexistencia física del medicamento. **Criterio jurídico:** La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que *en aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad.* En esa tesitura, *tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud. Justificación:* Lo anterior, en virtud de la diferencia entre la

Así, y violando todas sus obligaciones constitucionales y convencionales, las responsables han emitido los actos reclamados, que perjudican gravemente la seguridad de los quejosos y de los educandos en general, exponiéndoles a riesgos gravísimos en la mitad de la tercera ola de la pandemia de coronavirus, lo que debe ser reparado en este juicio de garantías.

CUARTO.- CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.- Derivado de lo dispuesto por los artículos 1° y 133 de la Carta Magna, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que constituye una obligación *ex officio* de ***todos los tribunales del país*** el realizar el control de convencionalidad, lo que les obliga a **aplicar las normas más benéficas para el gobernado en todos los casos**, siendo que incluso *deben preferir las normas internacionales y su interpretación, sobre las normas mexicanas de índole ordinario*¹¹⁰.

A) Obligatoriedad de las tesis sustentadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la

"incapacidad" y la "renuencia" del Estado a cumplir con dicha garantía, en atención a que la "incapacidad" del Estado para garantizar el derecho humano a la salud parte de su obligación de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, o bien, justificar que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para garantizar ese derecho; mientras que *la "renuencia" del Estado se presenta cuando no está dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud, violando entonces las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. De ahí que *las violaciones del derecho a la salud pueden producirse por no adoptar las medidas necesarias que emanan de las obligaciones legales, como no contar con políticas o legislación que favorezca el nivel más alto de salud posible, o no hacer cumplir las leyes existentes en la materia*".

¹¹⁰ A este respecto, resultan ilustrativas la Tesis P. LXVII/2011(9a.) que se lee en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, **Pleno**, página 535; la Tesis P. LXVIII/2011 (9a.), que se localiza en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, **Pleno**, página 551; la Tesis P. LXIX/2011(9a.), que también se halla en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, **Pleno**, página 55; la Tesis P. LXX/2011 (9a.), que también se puede consultar en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, **Pleno**, página 55; la Tesis XI.1o.A.T.47 K, que se aprecia en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 1932; la Tesis XI.1o.A.T.45 que se ve en la propia Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 2079; la Tesis I.4o.A.91 K, que se advierte en la misma Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 2927 y la Tesis XI.1o.A.T.47 K, que se puede encontrar en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 1932, de los epígrafes: **"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD"**; **"PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS"**; **"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS"**; **"SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO"**; **"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO"**; **"TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN"**; **"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES DEL ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN, A FIN DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA NO CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS"** y **"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO"**.

Nación.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la Jurisprudencia de dicho Tribunal es aplicable en sus términos cuando el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio, y en todo caso, sus criterios son orientadores para el Poder Judicial¹¹¹. Es más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado Mexicano no fue parte, son orientadores para los jueces mexicanos *siempre que sean más favorables a la persona* en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal¹¹².

B) Obligatoriedad de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conforme a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.- A lo anterior se suma que en la *sentencia de 31 de agosto de 2010* dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), a fojas 78, párrafo 219, la misma sostuvo lo siguiente:

“219. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico 277. Pero *cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces,*

¹¹¹ En tal sentido se manifiestan la Tesis P. III/2013 (10a.) que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1; **Pleno**, página 368; la Tesis 1a. XIII/2012 (10a.) que se lee en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, **Primera Sala**, página 650; la Tesis P. LXV/2011 (9a.), que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; **Pleno**, página 556; y la Tesis I.7o.C.51 K, que figura en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 1052, de los rubros: **“SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS DONDE EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE. PARA QUE SUS CRITERIOS TENGAN CARÁCTER VINCULANTE NO REQUIEREN SER REITERADOS”**; **“CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO”**; **“SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO”** y **“JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”**.

¹¹² En ese sentido se pronuncia la Tesis P. LXVI/2011 (9a.), que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Pleno, página 550, que reza: **“CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional.** De este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos”.

*también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. **El Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana**, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, *el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana*²⁷⁸”.*

277 Cfr. *Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124; *Caso La Cantuta Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 173, y *Caso Radilla Pacheco*, *supra* nota 36, párr. 339;

278 Cfr. *Caso Almonacid Arellano*, *supra* nota 282, párr. 124; *Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 20 de noviembre de 2007, Serie C No. 169, párr. 78, **y Caso Radilla Pacheco, supra nota 36, párr. 339**”.

Como se advierte, la Corte Interamericana prevé que no sólo se ha de considerar el Texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino *la interpretación que de la mismo ha hecho la propia Corte*, lo que ha hecho en el **Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México** invocando a la vez el **Caso Radilla Pacheco vs. México**, lo que de acuerdo a las Tesis P. III/2013 (10a.); 1a. XIII/2012 (10a.); P. LXV/2011 (9a.) y I.7o.C.51 K, reseñadas *ut supra*, **resulta obligatorio para todos los tribunales mexicanos**.

De las tesis transcritas se aprecia la obligación de Su Señoría para realizar el control de convencionalidad, inclusive *ex officio*, ***empleando los criterios más favorables para el gobernado*** (amplitud y progresividad interpretativas) y de aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que de la misma ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, es de destacar que los siguientes aspectos de la mencionada Convención y su interpretación por parte de la citada Corte Internacional, son aplicables en la especie.

D) Protección más amplia.- Los artículos 1 (Obligación de respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno); 8 (Garantías Judiciales); 25 (Protección Judicial); 29 (Normas de Interpretación) y 30 (Alcance de las Restricciones) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que la actuación de las responsables es absolutamente inconvencional.

1.- Artículo 1. Obligación de respetar los Derechos. Este numeral señala:

“Los Estados Partes en esta Convención *se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y **pleno ejercicio** a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción*, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Este precepto es nítido *per se*, y de manera irrefutable conduce a concluir que se deben respetar los derechos e intereses legítimos de la parte quejosa por parte de las responsables, que no le pueden afectar A LOS MENORES POR UN CAPRICHOS DEL Presidente de la República.

2.- Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Este precepto dispone:

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

De dicho numeral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desprendido entre otras, las siguientes nociones interpretativas, que se refieren invocando los casos correspondientes en que se han formulado las interpretaciones que se explican:

a) Deber de respeto y garantía de los derechos humanos. Opera frente al Estado, sus órganos, sus agentes y todos aquellos que actúan en su nombre.- La Corte Interamericana sostiene que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene por fin ***proporcionar al individuo medios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente frente al Estado*** (sus órganos, sus agentes, y todos aquellos que actúan en su nombre)¹¹³.

Es claramente inconvencional que las responsables ***afecten*** los derechos de los quejosos cuando los actos reclamados carecen de cualquier base lógica o jurídica, y contrarían la opinión de los científicos en cuanto hace a las posibilidades de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en menores de edad, que incluso han fallecido por dicho padecimiento.

b) Deber de respeto y garantía de los derechos humanos. Se actualiza en función de las necesidades de protección, a pesar de que la Convención no defina en forma taxativa todas las hipótesis de infracción a los derechos humanos.- La propia Corte ha estimado que las diversas formas y modalidades que pueden asumir los hechos en situaciones violatorias de derechos humanos hacen poco menos que ilusoria la pretensión de que el Derecho Internacional defina en forma taxativa –o cerrada o *numerus clausus*– todas las hipótesis o situaciones –o estructuras– de atribubilidad o imputabilidad al Estado de cada una de las posibles y eventuales acciones u omisiones de agentes estatales o de particulares. De tal manera, ***al interpretar y aplicar la Convención, la Corte debe prestar atención a las***

¹¹³ Caso —*Masacre de Mapiripán*” vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134; *Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120.

particulares necesidades de protección del ser humano, destinatario último de las normas contenidas en el tratado de referencia. En razón del carácter *erga omnes* de las obligaciones convencionales de protección a cargo de los Estados, no resulta posible determinar su alcance en función de una visión centrada en la voluntad soberana de aquéllos y de los efectos de las relaciones meramente interestatales. Dichas obligaciones incumben a todos los sujetos del Derecho Internacional y *los supuestos de incumplimiento deberán determinarse en cada caso particular en función de las necesidades de protección*¹¹⁴

Luego, en la especie se conculca esta disposición, porque las responsables han obrado violando las garantías individuales de los quejosos con un ánimo meramente afectatorio de su salud y de su educación, sin que exista base alguna para la determinación del Titular del Ejecutivo Federal.

c) Deber de dotar de efecto útil a todas las medidas nacionales dirigidas a tutelar derechos humanos.- En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos *debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile).* Esto significa que *el Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno.* Dichas medidas sólo son efectivas cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención¹¹⁵

En ese sentido, el único efecto útil que se puede imprimir a la sentencia que se dicte en este juicio, estribaría en conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa para que no se obligue a sus menores hijos a acudir de manera presencial a las clases, sino que se les brinde la oportunidad de continuar tomándolas por medios remotos, como se ha venido haciendo con el programa “Aprende en Casa”, y a la vez se les permita acreditar el año escolar bajo dichas premisas.

3.- Artículo 29. Normas de Interpretación.- Este ordinal establece lo siguiente:

“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

“a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, *suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;*

“b) *limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;*

¹¹⁴ Caso *de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140.

¹¹⁵ Caso *Cinco Pensionistas Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98; Caso *Gómez Palomino Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136.

“c) *excluir otros derechos y garantías* que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
 “d) *excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza*”.

De tal precepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desprendido entre otras, las siguientes nociones interpretativas que se refieren, invocando los casos correspondientes en que se han formulado las interpretaciones respectivas:

a) Métodos de interpretación de las normas sobre derechos humanos.- Aunque el texto de una norma sobre derechos humanos parezca literalmente claro, es necesario analizarlo aplicando otros métodos interpretativos, de manera que, para el Tribunal interamericano, el sentido corriente de los términos no puede ser una regla por sí misma, sino que debe involucrarse dentro del contexto y, en especial, dentro del objeto y fin del tratado, de forma que la interpretación de manera alguna debilite el sistema de protección consagrado en la Convención, lo que puede propiciarse mediante la aplicación de los métodos siguientes: **i) *Interpretación sistemática***, según el cual, las normas deben ser interpretadas como parte de un todo cuyo significado y alcance deben fijarse en función del sistema jurídico al que pertenecen; **ii) *Interpretación teleológica, que busca analizar el propósito de las normas involucradas, para lo cual es pertinente analizar el objeto y fin del tratado*** y, de ser necesario, examinar los propósitos del sistema regional de protección; **iii) *Principio de efecto útil (effet utile), que precisa tener presente la especificidad de los tratados de derechos humanos, cuyo objetivo tiene que ver con la creación de un orden legal en el cual los Estados asumen obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción; además de que estos tratados se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva;*** y, por último, es posible acudir a los **iv) *Trabajos preparatorios*** de las normas sobre derechos humanos, aunque sólo en forma subsidiaria ante la insuficiencia de los métodos interpretativos antes enunciados¹¹⁶.

b) Deber de dotar de efecto útil a todas las medidas nacionales dirigidas a tutelar derechos humanos.- Como se ha apuntado *ut supra*, en el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos *debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile)*. Esto significa que *el Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno*. Dichas medidas sólo son efectivas cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención¹¹⁷.

¹¹⁶ **Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México.** Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

¹¹⁷ Caso *Cinco Pensionistas Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98; Caso *Gómez Palomino Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136.

c) Principio de interpretación de la norma más favorable a la persona humana.-

De conformidad con el artículo 29.b) de la Convención, si alguna ley del Estado Parte u otro tratado internacional del cual sea Parte dicho Estado otorga una mayor protección o regula con mayor amplitud el goce y ejercicio de algún derecho o libertad, éste deberá aplicar la norma más favorable para la tutela de los derechos humanos. Es preciso recordar que la Corte en diversas ocasiones ha aplicado el principio de la norma más favorable para interpretar la Convención Americana, de manera que siempre se elija la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado. ***Según lo ha establecido este Tribunal, si a una situación son aplicables dos o más normas distintas, “debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana”***¹¹⁸.

d) Interpretación progresiva de la Convención Americana.- En otras oportunidades, tanto la Corte Interamericana como la Corte Europea de Derechos Humanos han señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En este sentido, ***la Corte Interamericana ha afirmado que al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste*** (inciso segundo del artículo 31 de la Convención de Viena), ***sino también el sistema dentro del cual se inscribe*** (inciso tercero del artículo 31 de dicha Convención). En el presente caso, al analizar los alcances del citado artículo 6.2 de la Convención, **el Tribunal considera útil y apropiado utilizar otros tratados internacionales distintitos a la Convención Americana**, tales como el Convenio No. 29 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante “OIT”) sobre Trabajo Forzoso, para interpretar sus disposiciones de acuerdo a la evolución del sistema interamericano, habida consideración del desarrollo experimentado en esta materia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos¹¹⁹.

Todo lo así expuesto se ve infringido por las responsables a través de los actos reclamados, porque ***pasan sobre los derechos humanos de los quejosos a la salud y a la educación, pretiriendo la obligación del Estado Mexicano de operar bajo el principio del interés superior de la niñez***. Así, es palmaria la cantidad de violaciones de carácter convencional en que inciden las autoridades, y que deben dar lugar a que se conceda la protección de la justicia federal a la peticionaria de garantías.

E) Colofón.- Al derivar del precepto constitucional 1º, el derecho de la quejosa se halla amparado por tales prescripciones internacionales, que en nuestro país son garantías del gobernado¹²⁰.

¹¹⁸ Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C, 111.

¹¹⁹ Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110.

¹²⁰ Al respecto resulta aplicable la Tesis I.7o.C.46 K, que aparece en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, página 1083, bajo el rubro: **“DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES**

Como consecuencia, los actos reclamados también devienen inconventionales al desacatar la garantía de legalidad que se deriva de las previsiones internacionales apuntadas, a más de las invocadas a lo largo de este escrito.

QUINTO.- PROTECCIÓN EN LA MAYOR AMPLITUD Y GARANTÍA DE JUSTICIA COMPLETA.

I.- Protección en la Mayor Amplitud.- Como se ha hecho notar *ut supra*, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, *favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia*¹²¹.

En ese sentido y derivado de lo dispuesto por el artículo 1º de la *Lex Legum* y de su interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Su Señoría debe aplicar las normas que ofrezcan una mayor protección a los quejosos, tal como se señala a lo largo de esta demanda de garantías.

Lo anterior guarda clara relación con el principio *pro homine* o *pro personae* que debe regir la determinación de Su Señoría, y que indica que la sentencia debe dictarse en el sentido de favorecer con la mayor amplitud a los gobernados cuando se trate de proteger sus derechos humanos, y ya ha quedado claramente demostrado que el derecho de los padres y de nuestros menores hijos, a no ser obligados a acudir presencialmente a clases en medio de la pandemia, sin menoscabo de que el Estado debe continuar con el programa “Aprende en Casa” y

POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUELLOS”.

¹²¹ A este respecto, es de acotar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado sobre el particular que la interpretación de la Constitución y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser *en las mejores condiciones para las personas*, tal como se aprecia de la Tesis 1a. XVIII/2012 (9a.) que se lee en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Primera Sala, página 257 (Registro 160073), que enseña: “**DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA.-** Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, *favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia*, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que *la interpretación de aquella y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas*. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, *deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad*, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos”.

proporcionar a los educandos los elementos necesarios para continuar sus clases desde casa, con el uso de la tecnología, los medios televisivos e internet¹²².

¹²² Al respecto son aplicables la Tesis XVIII.3o.1 K (10a.), que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1838 (Registro 2000630); la Tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), que se lee en la propia Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Primera Sala, página 659 (Registro 2000263); la Tesis I.4o.A.464 A, que figura en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1744 (Registro 179233) y la Tesis I.4o.A.441 A, que se puede consultar en la misma Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 2385 (Registro 180294), entre otras, que enseñan: **“PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS.-** En atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, *las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia.* Dicho precepto recoge de manera directa el criterio o directriz hermenéutica denominada *principio pro homine*, el cual consiste en *ponderar ante todo la fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos* e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el plano del derecho internacional, el principio en mención se encuentra consagrado en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, de manera respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno”; **“PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.-** *El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas,* lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual *debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos,* e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues *ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios.* Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, *la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección* y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro”; **“PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA.-** *El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos* y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, *como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria*”; y **“PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN.-** *El principio pro homine, incorporado en múltiples tratados internacionales, es un criterio hermenéutico que coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, por virtud del cual debe estarse siempre a favor del hombre e implica que debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos* y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio”.

En el mismo sentido y tal como se advierte de lo expuesto *ut supra*, los artículos 1 (Obligación de respetar los Derechos); 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno); 8 (Garantías Judiciales); 25 (Protección Judicial); 29 (Normas de Interpretación) y 30 (Alcance de las Restricciones) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que se debe dar a la parte quejosa **la protección más amplia posible**, para el pleno ejercicio de sus derechos en función de las necesidades de protección, máxime que se debe de dotar de un efecto útil a todas las medidas nacionales dirigidas a tutelar derechos humanos, debiendo realizarse la interpretación de la norma más favorable a la persona humana, siendo que tal interpretación además debe de ser progresiva.

II.- Efectos de la Sentencia que conceda el Amparo y Protección de la Justicia Federal.- El numeral 77, fracción II de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales prescribe que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto **obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija**.

Ahora bien, los actos reclamados en este juicio de garantías son de dos clases: **a)** la orden positiva de que los quejosos acudan de manera presencial a las clases que le corresponden por su grado académico; y **b)** de naturaleza negativa o rehusatoria, por lo que corresponde a la negativa de las responsables de continuar con el programa “Aprende en Casa”, y negar a los quejosos la posibilidad de acreditar el año escolar si no acuden presencialmente a clases. En esas condiciones, para que en su oportunidad se acate la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia federal, es necesario que las autoridades obraren en sentido inverso; es decir, **dejando insubsistentes los actos reclamados y emitiendo otros en los que se otorgue a los quejosos la posibilidad de continuar las clases vía remota y con ello acreditar el año escolar**, porque sólo de esa manera se podría considerar que las responsables respetan el derecho de que se trata y cumplen con lo que éste exige, y sólo así se acatarían los conceptos de **mayor amplitud** establecido en el ordinal 1° de la *Lex Legum* y de **progresividad**, derivado del control de convencionalidad.

A ello se añade que si no se les indica de manera concreta y determinante a las autoridades responsables que deben obrar en el sentido mencionado, podrían intentar burlar la Constitución, a más de a la justicia federal, lo que conduciría a una serie interminable de juicios de amparo, con la consecuente afectación en sobrecarga para los Tribunales Federales.

Lo expuesto además se basa en el hecho de que como se ha demostrado en este juicio de garantías, **no existe fundamento posible para los actos que se reclaman**, de lo que se debe concluir que no hay otra forma de acatar la sentencia que se llegue a dictar en la especie, si no es destruyendo tales actos y obligando a las responsables a respetar el derecho de los quejosos en los términos expresados¹²³.

¹²³ Sirve de apoyo a la conclusión expuesta la Tesis jurisprudencial publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Tomo XCVI, Tercera Parte, página 96 (Registro 265922), que reza:

“SENTENCIAS DE AMPARO, EFECTOS DE LAS.- Toda sentencia de amparo, cuando el acto reclamado sea positivo, debe restituir plenamente al quejosos en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Dos clases de efectos pueden contener las ejecutorias de amparo: una, en que la protección federal se otorga limitada y concretamente para ciertos efectos; otra, en que el amparo se

En las relatadas condiciones, al concederse al amparo y protección de la justicia federal al quejoso, se deben considerar los alcances más amplios que tiene derecho a obtener y que han quedado señalados.

SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

I.- Suspensión de Plano.- En la especie procede se otorgue la **suspensión de plano**, en términos de lo dispuesto por el artículo 126¹²⁴ de la Ley de Amparo, en tanto de actos que **importen peligro de privación de la vida**, siendo irrefutable que **el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ha generado la muerte de millones de personas** en el mundo entero y de cientos de miles en nuestro país, a lo que se agrega que **entre los decesos, se cuentan menores de edad como los quejosos**¹²⁵, lo que implica que los actos reclamados les exponen a dicho

concede con un efecto que no es necesario expresar, por tratarse de un aniquilamiento total, absoluto y definitivo del acto reclamado. *Cuando el agraviado acredita que el acto que se impugna carece de fundamento y motivo, en el sentido de que no hay ley aplicable que lo justifique*, o que no han acontecido los hechos en que jurídicamente podría aquel acto apoyarse, *la protección constitucional debe concederse lisa y llanamente, sin limitaciones ni restricciones, pues se trata de un acto intrínseca y radicalmente anticonstitucional*. Una resolución que se halla en este caso debe anularse en absoluto, sin que pueda sobrevivir en parte o reaparecer posteriormente. Por el contrario, cuando, como en la especie, alega los quejosos que se ha vulnerado el artículo 16 de la Carta Magna, simplemente porque la autoridad no citó la ley aplicable o no invocó los hechos concretos que motivan el acto, el propio agraviado no reclama que la resolución sea absoluta e irremisiblemente infundada, sino que sólo argumenta que, en el supuesto de que haya ley aplicable y de que hayan ocurrido los hechos que motivan la misma, esa ley y esos hechos no se invocan en la propia resolución. En estas últimas situaciones, en que la falta de fundamento o de motivaciones, podríamos decir, procesal, estamos frente a una violación que puede ser reparada dentro de los mismos límites de lo alegado y pedido en la demanda de garantías, es decir, para el efecto de que la autoridad pronuncie una nueva resolución en que se cumplan todos los requisitos omitidos”.

¹²⁴ “**Artículo 126.** La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

“En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

“La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal”.

¹²⁵ Sobre este respecto existen numerosas notas periodísticas que lo evidencian, como son las que se enuncian a continuación:

<https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/15/569-menores-han-fallecido-en-mexico-por-covid-19-segun-reporte-del-sipinna>

<https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/30/muertes-ninos-covid-19-brasil-ritmo-alarmando-trax/>

<https://www.dw.com/es/covid-alerta-por-muerte-de-ni%C3%B1os-en-am%C3%A9rica-latina/a-57626898>

<https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/15/reportan-569-menores-que-murieron-por-coronavirus/>

<https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/27/politica/cerca-de-600-ninos-en-mexico-han-muerto-por-covid-19-lopez-gatell/>

https://mexico.as.com/mexico/2021/06/25/actualidad/1624586468_466827.html

<https://www.animalpolitico.com/2020/07/menores-muertos-covid-19-contagios/>

<https://coronavirus.onu.org.mx/tag/mortalidad-infantil>

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56754935>

<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/al-menos-600-ninos-han-muerto-en-mexico-por-covid-19>

<https://www.youtube.com/watch?v=zvjJE6Nx9kI>

gravísimo riesgo, **cuando las responsables están obligadas a proteger su salud** en términos de los ordinales 4º Constitucional; 3 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; las Observaciones Generales Números 3 y 14; del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte; 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; y 34, inciso i), de la Carta de la Organización de los Estados Americanos -incorporado con motivo del protocolo de reformas a la propia carta, suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 5 de

Nuevamente es de apuntar que el contenido de las mismas configura ***hechos notorios*** que hacen prueba en este juicio en términos de los artículos 88 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, máxime que la información puede ser corroborada en cada sitio correspondiente a las direcciones que se mencionan, para lo cual **en todo caso desde este momento se ofrece la inspección de dichas páginas de Internet**. En este sentido, son aplicables la Tesis I.3o.C.35 K (10a.), que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373; la **Jurisprudencia 2398**, que figura en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, página 2804; Tesis XIX.2o.P.T.37 L publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 2051; la Tesis IV.3o.A.47 K, que se ubica en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 2063; la Tesis I.7o.C.56 K, que aparece en la propia Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, página 1943; la Tesis XX.2o.33 K, que figura en la propia Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1643; la Tesis 32, que se lee en el Apéndice (actualización 2002), Tomo IV, Civil, P.R. TCC, página 99 (Genealogía Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1279, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis V.3o.9 C) y la Tesis V.3o.10 C, que figura en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 1306, transcritas *ut supra*, de los epígrafes: **“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”**; **“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”**; **“INFORMACIÓN OBTENIDA DE UNA PÁGINA DE INTERNET. AL EQUIPARARSE SU IMPRESIÓN A UNA PRUEBA DOCUMENTAL, LE RESULTAN APLICABLES LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA ÉSTA POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO RESPECTO A SU OFRECIMIENTO, ADMISIÓN, DESAHOGO, OBJECIONES, ALCANCE Y VALOR PROBATORIO”**; **“PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBE ADMITIRSE LA DE INSPECCIÓN DE PÁGINAS OFICIALES EN INTERNET, A FIN DE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES”**; **“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”**; **“DOCUMENTAL CONSISTENTE EN INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE INTERNET. EN CUANTO DOCUMENTO INNOMINADO, CON BASE EN EL ARBITRIO JUDICIAL, PUEDE ASIGNÁRSELE VALOR INDICIARIO”**, e **“INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO”**.

diciembre de 1985- y 24 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, tal como se ha demostrado a lo largo de esta demanda.

Resulta aplicable por analogía la Tesis I.18o.A.33 K (10a.) que se lee en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Décima Época, página 2160 (Registro 2020283), que señala:

“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA.- *El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud”.*

II.- Suspensión a petición de parte.- Sin menoscabo de lo expuesto, y para el caso de que Su Señoría estime que a pesar de las circunstancias no procede la suspensión de plano, *se solicita la suspensión de los actos reclamados* tanto en su fase provisional como definitiva, para lo cual se formulan los siguientes argumentos:

A) Naturaleza de los actos reclamados cuya suspensión se solicita.- Aún cuando el acto reclamado marcado con el números 1¹²⁶ podría considerarse un acto consumado, *por el mero hecho de que ya se emitió*, también lo es que **los actos reclamados que se mencionan con los números 2 al 6¹²⁷** del Capítulo correspondiente de este escrito inicial de demanda, **se configuran como actos denegatorios, futuros de realización inminente.**

¹²⁶ **“1.- Orden de acudir a clases presenciales.-** La orden para que de manera inevitable se presenten mis menores hijos a clases presenciales en el Ciclo Escolar 2021-2022, a pesar de que el país se encuentra en Pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

“Este acto se lo atribuimos en cuanto a su emisión al C. Presidente de la República”.

¹²⁷ **“2.- Orden para que no se impartan clases por medios remotos.-** La orden para que no se impartan clases vía remota; es decir, por medios televisivos y/o internet para los alumnos de escuelas públicas o privadas en el Ciclo Escolar 2021-2022., lo que entraña la cancelación del programa “Aprende en Casa”.

“Este acto se lo atribuimos indistintamente a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables.

En efecto, aún y cuando el Presidente de la República emitió la orden para el regreso a clases presenciales a toda costa, los demás actos reclamados *no han producido sus efectos denegatorios en detrimento de los quejosos a la fecha*; pero aunque así hubiere ocurrido, es palmario que *la medida cautelar sí puede tener efectos restitutorios en la especie*.

1.- Efectos para los cuales se solicita la suspensión.- La suspensión se solicita para los siguientes efectos:

a) Que no se obligue a los menores quejosos a asistir presencialmente a clases en el ciclo escolar 2021-2022.

b) Que no se dejen de impartir las clases por medios remotos; es decir, por medios televisivos y/o internet para los alumnos de escuelas públicas o privadas en el Ciclo Escolar 2021-2022, y por ende se de continuidad al programa “Aprende en Casa”.

c) Que las responsables no se nieguen a continuar clases vía remota, bien sea con las impartidas por medios televisivos o incluso por medios electrónicos (Internet).

d) Que las responsables no desconozcan la posibilidad de acreditar el Ciclo Escolar 2021-2022 por parte de los menores quejosos, en función de la inasistencia a clases presenciales.

e) Que las autoridades responsables no prohibían y/o impidan a los menores quejosos el que cursen el Ciclo Escolar 2021-2022 vía remota; es decir, por medios televisivos o electrónicos (internet).

f) Que las autoridades responsables se abstengan de aplicar cualquier efecto o consecuencia que de hecho o de derecho deriven de los actos reclamados.

En las relatadas condiciones, esta demanda amerita un tratamiento de la mayor celeridad posible, especialmente en cuanto atañe a la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que no se generen los actos cuya suspensión se solicita en perjuicio de los menores quejosos y *quede sin materia el juicio de garantías*.

“3.- Negativa a continuar clases vía remota.- La negativa a continuar con el esquema de clases vía remota, bien sea con las impartidas por medios televisivos o incluso por medios electrónicos (Internet).

“Este acto se lo atribuimos indistintamente a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables.

“4.- Desconocimiento del Ciclo Escolar 2021-2022.- El desconocimiento de la posibilidad de acreditar el Ciclo Escolar 2021-2022 por parte de nuestros menores hijos, en función de la inasistencia a clases presenciales.

“Estos actos se los atribuimos indistintamente a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables.

“5.- Prohibición o Impedimento.- La prohibición y/o impedimento para que nuestros menores hijos cursen el Ciclo Escolar 2021-2022 vía remota; es decir, por medios televisivos o electrónicos (internet).

“Estos actos se los atribuimos indistintamente a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables.

“6.- Efectos y Consecuencias.- Todos los efectos y consecuencias que de hecho y de derecho deriven de los actos reclamados.

“Estos actos se los atribuimos indistintamente a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables”.

B) Crédito debido a las afirmaciones de la quejosa.- A este respecto, es de destacar que conforme a la **Jurisprudencia 2a./J. 5/93**, que se halla en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, Agosto de 1993, Segunda Sala, página 12 (Registro 206395), así como la **Jurisprudencia IX.1o. J/10**, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 65, Mayo de 1993, página 59 (Registro 216271), se *debe* dar crédito a lo señalado en esta demanda de garantías, pues no se puede poner en duda el dicho de la parte quejosa, máxime que para ello es que la narración de los antecedentes de la misma se presenta condicionada a la *protesta de decir verdad* que establece el numeral 66 de la Ley de Amparo¹²⁸.

C) Suspensión con efectos restitutorios.- La medida cautelar **procede incluso con efectos restitutorios en términos de lo dispuesto por el artículo 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo**, porque como se ha explicado y demostrado, *nuestros menores se ven afectados por la arbitraria y draconiana orden del Titular del Ejecutivo Federal de que deben acudir por modo ineludible de manera presencial a sus clases para el Ciclo Escolar 2021-2022 a pesar del grave riesgo que ello entraña para su salud*. En ese sentido, igualmente cobra aplicabilidad lo dispuesto en el *último párrafo del ordinal 147 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales*, que establece que **el juzgador debe tomar las medidas necesarias para que no se defrauden los derechos de los menores**, en tanto se dicta sentencia definitiva en el juicio de amparo.

Así, resulta procedente conceder la suspensión provisional como definitiva, *incluso con efectos restitutorios provisionales*, adelantando los efectos de la decisión final, en aras de asegurar la materia del juicio de amparo y poder restituir plenamente en el goce de sus derechos violados a la quejosa¹²⁹.

¹²⁸ Dichas Tesis enseñan: “**SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.-** Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito *deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad*, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, **sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra**, pues para resolver sobre la suspensión provisional, *el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos*. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo” y “**SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS RECLAMADOS. DEBE RESOLVERSE CONFORME A LAS AFIRMACIONES DEL QUEJOSO EN LA DEMANDA DE AMPARO.-** La suspensión de los actos reclamados que se concede en forma provisional, tiene la particularidad de que se otorga o se niega sin que, en ocasiones, el Juez de Distrito tenga ante sí todos los medios de prueba que tiendan a acreditar el dicho del quejoso y sin que se hubiese llamado a juicio a las demás partes en el mismo, ya que se decide sobre la medida cautelar, contando únicamente con la demanda de amparo; esto es, con el dicho de la parte promovente del juicio de garantías, a diferencia de la resolución que concede o niega la suspensión definitiva, en la que se está en posibilidad de tener a la vista los informes previos que hubieran rendido las autoridades responsables, de recibir pruebas a las partes en la audiencia incidental y de escuchar sus alegatos. La decisión sobre la medida cautelar en las circunstancias apuntadas, obedece a la obligación que impone al Juez de Distrito el artículo 124 de la Ley de Amparo, fracción III, segundo párrafo, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva”.

¹²⁹ Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis I.1o.A.3 K (10a.) publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1911; la **Jurisprudencia I.4o.A. J/90** aparecida en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de

2011, página 1919 (Registro 161447); la Tesis I.15o.A.43 K, que se halla en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 1599 (Registro 161733); la **Jurisprudencia I.7o.A. J/57** que figura en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 2838 (Registro 163539); la **Jurisprudencia 2a./J. 12/2008** visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, **Segunda Sala**, página 697 (Registro 170171); la Tesis XIV.2o.4 A que se ubica en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 524 (Registro 201018); la **Jurisprudencia P./J. 16/96** que se lee en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, **Pleno**, página 36 (Registro 200137); la Tesis que se localiza en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 75, Sexta Parte, página 60 (Registro 254781) (Ponencia del Señor Ministro Guillermo Guzmán Orozco) y la Tesis que se advierte en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, **Pleno**, página 376 (Registro 280555), que son del tenor literal siguiente: **“SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO.-** De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, ***restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal***; de ahí que el Juez, atendiendo a cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o negativo, dado que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras únicamente a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos del agraviado, podrá conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, ***restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, lo que atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1o. constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas***. En consecuencia, se concluye que ***en la actualidad la suspensión*** no solamente tiene una función de esa naturaleza, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, merced a lo dispuesto por el segundo párrafo del referido precepto, ***puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto*** que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento, como en el evento de que el demandante esté privado del suministro de energía eléctrica de manera continuada, sin que pueda afirmarse categóricamente que todo acto de carácter omisivo o de abstención es susceptible de suspenderse, como sucede con la falta de contestación a una petición, en que existe un impedimento jurídico, consistente en que se dejaría sin materia el juicio; por ende, el juzgador deberá realizar un examen particular, caso por caso, en que atienda a la naturaleza del acto y determine si existe algún impedimento jurídico o material que amerite la negativa de la suspensión”; **“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA, A PESAR DE QUE PUEDA ADELANTAR LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN FINAL, SI ES NECESARIO PARA ASEGURAR UNA TUTELA CAUTELAR EFECTIVA QUE PRESERVE LA MATERIA DEL JUICIO Y LA CABAL RESTITUCIÓN DEL AFECTADO EN SUS DERECHOS.-** El criterio de que la suspensión no debe otorgar efectos restitutorios o que anticipen la decisión final, por ser propios de la sentencia de fondo, debe superarse en aras de ser congruentes con la finalidad constitucional de preservar la materia del juicio y evitar la ejecución de actos de imposible o difícil reparación, siempre y cuando exista interés suspensivo del solicitante y materia para la suspensión, para lo que es menester considerar la naturaleza del acto reclamado. Consecuentemente, ***procede conceder la suspensión a pesar de que pueda adelantar los efectos de la decisión final, pues ello sería en forma provisional, si es necesario para asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución del afectado en sus derechos***; es decir, cuando de no otorgarse, la restitución que, en su caso, se ordene en la resolución definitiva, pueda ser ilusoria”; **“SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS.- Desde un punto de vista general, los actos emanados de las autoridades pueden ser positivos o negativos; los primeros entrañan una acción, orden, prohibición, privación, molestia y su ejecución puede ser instantánea, continuada o inacabada o de trazo sucesivo; en cambio, los segundos implican que las autoridades se rehúsan a realizar algo u omiten hacer lo que la ley les impone a favor de lo solicitado por los gobernados, es decir, constituyen abstenciones. Así, debe entenderse que ***dentro de los actos positivos se encuentran los "prohibitivos", que son aquellos que fijan una limitación, que tienen efectos positivos, como*****

son los de coartar o limitar los derechos de quienes los reclaman en el juicio de amparo. En esos términos, los actos prohibitivos imponen al particular una obligación de no hacer, que se traduce en una limitación de su conducta; la imposición del acto constituye el hacer positivo de la autoridad, lo que lo diferencia de los actos negativos, en los que prevalece una actitud de abstención y rehusamiento de actuar de las autoridades. Es importante significar que con la emisión de los actos prohibitivos la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos, a diferencia de los negativos en donde aquélla se abstiene de actuar o se rehúsa a conducirse de la forma solicitada por el particular. En otras palabras, los actos prohibitivos entrañan una orden positiva de la autoridad encaminada a impedir el ejercicio de un derecho o vedar una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el Estado. Desde esa óptica destaca el principio legal de que la suspensión sólo opera cuando se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, contra los actos de autoridad que sean de carácter positivo, o sea, contra la actividad estatal que se traduce en la decisión o ejecución de un hacer, a menos que su ejecución sea instantánea, como sucede con los actos meramente declarativos que se consuman con su dictado, en cuyo caso carece de materia la suspensión, ya que de concederse se le darían efectos restitutorios, propios de la sentencia de fondo. Sobre esas premisas jurídicas, es patente que resulta procedente la suspensión contra los actos prohibitivos, porque implican un actuar de la autoridad encaminado a impedir o restringir el ejercicio de un derecho de los particulares, dado que aquéllos no se traducen en una abstención o la negativa de una solicitud, sino que equivalen a un verdadero hacer positivo de las autoridades, consistente en imponer determinadas obligaciones de no hacer o limitaciones a la actividad de los gobernados. Se expone tal aserto, en virtud de que si se entiende que prohibir entraña un impedimento o restricción, es válido señalar que los actos prohibitivos imponen al individuo una obligación de no hacer, que se traduce en una limitación a su conducta y derechos. Por tales motivos, los actos prohibitivos son susceptibles de paralizarse, porque si un acto impide el ejercicio de derechos jurídicamente reconocidos y vigentes o coarta la libertad de acción de los particulares, la medida cautelar procede para mantener la situación que existía antes de que se dictara o ejecutara el acto que se reclama como violatorio de garantías, sin que esto implique dar a la suspensión efectos restitutorios, sino sólo impedir que surta efectos la orden prohibitiva"; **“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO DE LOS DATOS COMPROBABLES EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE SE ADVIERTA LA EXISTENCIA PREVIA DEL DERECHO CUYA TUTELA SE SOLICITA, ES POSIBLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LO REINTEGRE PROVISIONALMENTE AL QUEJOSO.-** Aun cuando la suspensión en el juicio de garantías tiende, por su naturaleza, a mantener las cosas en el estado que tengan al momento de ser dictada, en la actualidad el concepto ha evolucionado de forma tal, que en casos excepcionales y sin desatender los requisitos que para decretarla prevé el artículo 124 de la Ley de Amparo, cuando de los datos comprobables en el expediente correspondiente se advierta la existencia previa del derecho cuya tutela se solicita, es posible que el Juez de Distrito, en función de la demora y acorde con la naturaleza de toda providencia preventiva, lo reintegre provisionalmente al quejoso, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en el fondo del asunto planteado. Diversa circunstancia acontece cuando de la información y de los documentos aportados por el quejoso no es posible advertir que cuenta con un derecho por proteger, el cual afirma le ha sido violentado, pues en ese caso la medida cautelar que le permitiera gozar de una prerrogativa inexistente, le constituiría un estado jurídico indebido, lo cual no es propio de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo”; **“SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LOS ACTOS DE CLAUSURA DE CONSTRUCCIONES, SIN QUE SE REQUIERA TOMAR EN CONSIDERACIÓN SI DE NEGARSE EL AMPARO SE OCASIONARÍAN MAYORES DAÑOS A LA PARTE DEMANDANTE CON LA DEMOLICIÓN DE AQUÉLLAS.-** El artículo 124 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión, entre los que se encuentran que la solicite la parte quejosa, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto; de lo anterior se advierte que para determinar si procede o no otorgar la suspensión solicitada contra la clausura de construcciones no se requiere tomar en consideración si de negarse el amparo se ocasionarían mayores daños a la parte demandante con la demolición de aquéllas, pues dicha medida solamente tiene como finalidad evitarle perjuicios de difícil reparación, lo que se logra con la concesión de la misma, quedando a su cargo ponderar si le conviene o no seguir construyendo antes de que se dicte la sentencia, pues ese es un juicio de valor que no le corresponde al juzgador por no permitírsele la ley de la materia”; **“SUSPENSIÓN. PROCEDE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UN DECRETO MATERIALMENTE LEGISLATIVO Y DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA (DECRETO NÚMERO 34 EXPEDIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN).-** *Es incorrecto negar la suspensión solicitada en contra de un acto de autoridad materialmente legislativo y de naturaleza*

autoaplicativa, como lo es el Decreto Número 34 expedido por el gobernador constitucional del Estado de Yucatán, publicado el 4 de enero de 1996 en el Periódico Oficial de dicha entidad; por considerar que es un acto consumado y que, de concederse, se le darían efectos restitutorios. *Ello obedece a que se trata de un conjunto de normas generales, abstractas e impersonales*, que reviste la calidad de un acto de naturaleza autoaplicativa, ya *que con su sola expedición irrumpen en la esfera jurídica de los gobernados* que se dedican al comercio de ganado bovino porque entre otras cosas, *declara prohibido* el sacrificio indiscriminado en rastros municipales y privados, así como la salida del Estado, de todo tipo de ganado bovino hembra con excepción de los considerados como desechos y, *en consecuencia, su propia condición ocasiona que sus efectos sean continuos y no consumados, al prever situaciones jurídicas que no necesitan de un acto posterior de autoridad, para afectar la esfera jurídica del gobernado*"; “**SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO.**- El artículo 107, fracción X de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, *pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión.* Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y sería que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, *el Juez de Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido,* y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que impliquen no una restitución, sino *un adelanto provisional del derecho cuestionado*, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, *el efecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto,* sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la "aparición del buen derecho" sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del dispositivo constitucional citado, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado”; “**SUSPENSIÓN. ACTOS PROHIBITIVOS.**- Aunque es cierto que la suspensión no procede contra actos negativos ni contra abstenciones, porque ello equivaldría a darle efectos restitutorios o constitutivos, cuando su función es únicamente la de conservar la materia de amparo, también es cierto que no se deben confundir los actos negativos con los actos prohibitivos. *El acto prohibitivo implica una orden o conducta positiva de la autoridad, tendiente a impedir una conducta del particular afectado.* Ahora bien, *respecto de los actos prohibitivos, la procedencia de la suspensión debe examinarse en cada caso particular, sopesando cuidadosamente, por una parte, el interés del particular en realizar la conducta prohibida y por otra, el interés de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de esos intereses se puede seguir de la concesión o negativa de la suspensión.* Así, *cuando se trata de una conducta permanente o reiterada del particular, la suspensión en principio es procedente, si el perjuicio que puede sufrir con la prohibición es legalmente mayor que el perjuicio que puede seguirse al interés de las autoridades con la realización temporal de la conducta prohibida.* Y cuando se trata de una conducta que puede quedar consumada en forma más o menos breve o instantánea, habrá que determinar, de la misma forma y sopesando los elementos

III.- Procedencia de la Suspensión en este juicio.- La suspensión procede tanto en su fase provisional como en su fase definitiva, en función de los siguientes conceptos:

A) Los actos cuya suspensión se solicita se traducen en denegatorios, futuros de realización inminente.- En efecto, los actos reclamados consistentes en la Orden para que no se impartan clases por medios remotos; la Negativa a continuar clases vía remota, el Desconocimiento del Ciclo Escolar 2021-2022; la Prohibición y/o Impedimento para que nuestros menores hijos cursen el Ciclo Escolar 2021-2022 vía remota; es decir, por medios televisivos o electrónicos (internet); y los Efectos y Consecuencias que de hecho y de derecho deriven de los actos reclamados, *se configuran como actos futuros de realización inminente*, en la medida en que se producirán por modo ineludible en un futuro.

En esas circunstancias, *la suspensión se reitera que la solicitud de suspensión es para los efectos señalados ut supra*¹³⁰.

que se tienen a mano en el incidente, cuál es el daño mayor a un interés legítimo. En estos casos, hay situaciones en las que al conceder la suspensión, lo mismo que al negarla, se dejará sin materia el amparo en cuanto al fondo, y cuando el juzgador se enfrenta a esta situación no puede aplicar la regla de que en el incidente no se debe prejuzgar sobre cuestiones de fondo, pues ello será lógica y legalmente imposible (ya que de una manera o de otra, ya sea que niegue o conceda la suspensión, dejará sin materia el fondo del negocio). Así, *en el ejemplo de la prohibición para celebrar un acto en una fecha y hora determinadas, si se niega la suspensión, el amparo puede quedar sin materia, lo mismo que si se concede la suspensión. En tales casos, el juzgador tendrá que prejuzgar en el incidente, con los elementos que tenga a mano, sobre el fondo de la pretensión y sobre la constitucionalidad de los actos, así como sobre los daños que puede sufrir el interés particular legítimo y su irreparabilidad*, y sobre el diverso interés legítimo de las autoridades, en relación con el interés social, para conceder o negar la suspensión solicitada” y **“LEVANTAMIENTO DE SELLOS.- Cuando se concede la suspensión contra la clausura de un local, deben levantarse los sellos puestos por la autoridad responsable**, la fijación de los cuales, no constituye un estado jurídico, sino un medio preliminar para ejecutar el acto”.

¹³⁰ Sobre el particular son aplicables la Tesis publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, página 563 (Registro 230636); la Tesis aparecida en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Marzo de 1994, página 493 (Registro 213284) y la Tesis que halla en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXI, Cuarta Sala, página 3692 (Registro 376926), que enseñan: **“SUSPENSIÓN DEFINITIVA, PROCEDENCIA DE LA, CONTRA LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA.-** Aun cuando no existe prueba que permita llegar al conocimiento de que se han dictado órdenes tendientes a ejecutar la sentencia reclamada, debe estimarse que *tal ejecución tiene el carácter de inminente, porque existe la certidumbre de que en cualquier momento se llevará al cabo, de manera que si bien la sentencia es un acto consumado, no lo es su ejecución, por lo que contra éste procede otorgar la suspensión definitiva para mantener viva la materia de juicio de garantías*”; **“SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA EMISIÓN DE ÓRDENES O RESOLUCIONES DE AUTORIDAD.-** Aun cuando la orden o resolución de autoridad que se reclama ya exista, y por ende, puede estimarse que tiene el carácter de acto consumado; sin embargo, *la suspensión de la misma en el incidente relativo comprende sus efectos, los que se traducen en una ejecución material y no se agotan con el simple dictado de aquella*. Así pues, entre la emisión del acto reclamado, y su ejecución, existe una estrecha vinculación que no permite concebir uno sin el otro; luego entonces, aun cuando la pluricitada orden o resolución ya se hubiese dictado, ello no la convierte necesariamente en un acto consumado para los efectos de resolver sobre la suspensión de la misma, *si no se ha ejecutado materialmente, pues esos actos de ejecución son los que constituyen propiamente la materia de la suspensión por ser susceptibles de ello*, pero vinculados con la multimencionada orden o resolución reclamada”; **“SUSPENSIÓN, DISTINCIÓN ENTRE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA Y SUS EFECTOS, EN MATERIA DE.-** Existe una marcada distinción entre una resolución y sus efectos. La resolución, una vez dictada por la autoridad, se consuma; pero *las consecuencias jurídicas que produce, no se realizan desde luego, en la mayoría de los casos, sino que requieren otros hechos o actos consecutivos para su ejecución, y por eso son susceptibles de suspenderse*”.

B) Resulta jurídicamente correcto el suspender los efectos de los actos reclamados.- Por otra parte, es intrascendente que la ejecución de las consecuencias de los actos reclamados se haya de realizar *por parte de cualesquiera autoridades*, dependientes jerárquicos de las autoridades responsables, agentes de autoridad o *incluso particulares*, pues la suspensión resulta procedente de cualquier manera¹³¹.

¹³¹ De ese modo se desprende de la Tesis que figura en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Diciembre de 1992, página 375 (Registro 217829) y la Tesis visible en la misma Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLIV, Segunda Sala, página 4509 (Registro 335764), que enseñan: **“SUSPENSIÓN, EL AUTO EN EL QUE SE CONCEDE SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. POR LO TANTO, EL ACTO QUE SE EJECUTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR, ES VIOLATORIO DE LA MISMA Y DEBE DECLARARSE INEXISTENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA FECHA EN QUE SE EJECUTÓ EL ACTO, LAS RESPONSABLES AÚN NO HABÍAN SIDO NOTIFICADAS.-** El primer párrafo del artículo 139 de la Ley de Amparo, es claro y contundente al señalar el momento en que surte efectos la suspensión, pues establece: "El auto en que un juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego", disposición tajante, en virtud de que el legislador utilizó el modo adverbial "desde luego", que significa "inmediatamente, sin tardanza" (Diccionario de la Lengua Española, décima novena edición, 1970, página 821, bajo la voz "luego... desde luego"), así resulta claro que el momento en que surte efectos la suspensión es cuando, una vez solicitada la medida cautelar, o bien, si procede de oficio, el juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio, examinando las constancias que tenga, determina que la medida suspensiva procede, y dicta el acuerdo o resolución en el que ordena se mantengan las cosas en el estado que guardan. De esta manera, es en la fecha en que se dicta o emite el auto concediendo la suspensión (considerándose que el ideal es que sea la misma fecha en que se solicitó o que se reclamó la violación), *cuando surte sus efectos paralizadores, debiendo ser acatadas por cualquier autoridad e incluso por cualquier persona que no obstante no teniendo el carácter de autoridad, tenga alguna injerencia en la ejecución de los actos.* En la práctica se presenta el problema de que el acuerdo o resolución en que se concede la suspensión, desafortunadamente ya no es notificado el mismo día en que se dicta, como fue el deseo del legislador sino que ahora media un tiempo, en ocasiones largo, entre la fecha del acuerdo en el que se concede la suspensión al quejoso, y la fecha en que se notifica éste a las autoridades responsables, sucediendo que en este lapso se llegan a ejecutar los actos suspendidos por el juez de Distrito, actos que son violatorios de la suspensión concedida, por haberse ejecutado con posterioridad a la fecha en que se emitió el auto de suspensión, por consiguiente, atendiendo a que la violación a la suspensión tiene dos consecuencias que son: el volver las cosas al estado que tenían al momento de decretarse la suspensión, y el determinar la responsabilidad en que incurre la autoridad que desató lo ordenado por un juez de Distrito, estas consecuencias pueden darse la una sin la otra, o bien, las dos juntas. Respecto a la primera consecuencia, esto es, el volver las cosas al estado que tenían al momento de decretarse la suspensión provisional, encontramos dos requisitos: el primero, que la naturaleza del acto ejecutado lo permita, y el segundo, que respecto a dicho acto se haya concedido la suspensión definitiva, en el supuesto de que ésta ya se hubiere resuelto, como es el caso que nos ocupa, en virtud de que la suspensión definitiva va a sustituir a la provisional, dejándola sin efecto en el caso de que se niegue la medida cautelar en contra del acto suspendido con la provisional; el primer requisito de la especie si se da, toda vez, el acto ejecutado después de concedida la suspensión provisional, es la clausura del negocio de la quejosa, acto que por su naturaleza puede dejarse sin efectos y ordenar el levantamiento del estado de clausura ejecutado cuando la quejosa ya disfrutaba de la medida cautelar concedida por la juez de Distrito, y el segundo requisito, relativo a que, de haberse resuelto sobre la suspensión definitiva, ésta se haya concedido por el acto cuya ejecución se reputa violatoria de la suspensión provisional, pues de negarse la definitiva, esto haría jurídicamente imposible volver las cosas al estado que tenían cuando se otorgó la provisional, también se surte, puesto que la juez a quo concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se clausure la negociación que defiende la quejosa. Por consiguiente, al darse los dos requisitos necesarios para que se actualice la primera consecuencia de resultar fundada la denuncia de violación a la suspensión provisional, consistente en que vuelvan las cosas al estado que tenían al decretarse la suspensión provisional, procede declarar inexistente la clausura ejecutada y ordenar que las cosas vuelvan al estado que tenían al decretarse la suspensión provisional. Por lo que hace a la segunda consecuencia que se deriva de la violación a la suspensión, consistente en determinar la responsabilidad en que incurre la autoridad que desató lo ordenado por un juez de Distrito, no se da, es decir, no es el caso de determinar la responsabilidad en que incurrieron las autoridades denunciadas, toda

III.- Reunión de los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo.-

En la especie procede conceder la medida cautelar que se solicita, porque se reúnen los elementos previstos en el ordinal 128 de la Ley de Amparo, dado que no se sigue perjuicio al interés social, ni se afectan normas de orden público y de negarse la medida se irrogarían a la quejosa *daños no sólo de difícil, sino incluso de imposible reparación.*

A) No se sigue perjuicio al interés social porque *la sociedad está interesada en que se acate puntualmente el contenido de las garantías del gobernado, que en nuestro país, igualmente involucran la observancia de los Tratados Internacionales*, siendo que no puede anteponerse a tal concepto el capricho del Presidente de la república de que se deba acudir presencialmente a clases “llueva trueno o relampagueé”; es decir, sin importar las consecuencias de tal determinación arbitraria y draconiana, que pueden acarrear graves consecuencias en la salud de los menores quejosos e incluso la muerte.

B) No se afectan normas de orden público, porque no existe ninguna disposición que permita a las autoridades responsables afectar sus *obligaciones constitucionales en materias de educación y de salud*, y el derecho de los padres, tutelados por los numerales 3° y 4° Constitucionales; 3, 25 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; las Observaciones Generales Números 3 y 14; del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte; 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 y 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; 34, inciso i), de la Carta de la Organización de los Estados Americanos -incorporado con motivo del protocolo de reformas a la propia carta, suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 5 de diciembre de 1985-; 14, 18, 24 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y XXX Deberes para con

vez que, ésta no existe de conformidad con el artículo 206 de la Ley de Amparo, el cual señala que será sancionada la autoridad que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, lo que interpretado a contrario sensu significa que una autoridad que no se encuentra debidamente notificada de un auto de suspensión, al momento de ejecutar el acto suspendido o desobedecer lo ordenado en aquél, no será sancionada, esto es, no incurre en el delito de abuso de autoridad, por lo que de no darse exactamente los supuestos que prevé este numeral (que exista una suspensión concedida por el juez de Distrito, que esté debidamente notificada a la autoridad y que ésta la desobedezca), no es el caso de determinarle responsabilidad a esa autoridad, y en el caso a estudio no se dan los tres supuestos jurídicos mencionados, en virtud de que el acto violatorio de la suspensión provisional se ejecutó antes de que el auto que la concedió fuera debidamente notificado a las responsables. Es de concluirse que el hecho de que la autoridad ejecute un acto suspendido por un juez de Distrito, con desconocimiento de que existía tal medida cautelar con anterioridad a su ejecución, no impide que dicho acto se declare nulo de pleno derecho por ser violatorio de la determinación del juez de Distrito y se ordene volver las cosas al estado que tenían cuando se concedió la suspensión, pues el desconocimiento de la medida cautelar, por no haberse notificado legalmente a la autoridad denunciada, el auto suspensivo, sólo trae como efecto el salvar su responsabilidad para que no se le sancione, pero no el que subsistan los actos violatorios de la suspensión concedida” y “**AUTORIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES.-** Si el amparo se endereza contra una autoridad, de la cual depende otra subalterna y ésta es la que ejecuta el acto reclamado, debe concederse la suspensión respecto de las dos autoridades, puesto que el acto reclamado, por ejemplo un embargo fiscal, se ejecutó por una dependencia de la primera de las citadas autoridades, que no puede obrar independientemente de la misma”.

los hijos y los padres de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tal como se ha demostrado a lo largo de esta demanda, que tutelan ***el derecho de los menores a recibir la educación que les corresponde conforme a su grado académico, y a la vez proteger su salud hasta el máximo de los recursos del Estado.***

Sobre este respecto es de acotar nuevamente que derivado de lo dispuesto por los artículos 1° y 133 de la Carta Magna, todos los tribunales el país *deben* desplegar un control de convencionalidad *ex officio* estando obligados a ***preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior,*** por lo que jamás se podría oponer ninguna disposición ordinaria a lo señalado en las normas internacionales invocadas y que tutelan el derecho de la parte quejosa.

C) No se contraviene el interés social, porque con la concesión de la medida cautelar no se lesionaría el interés colectivo, ya que ***no se le privaría de un provecho, utilidad, ganancia o beneficio,*** que no se generará jamás obligando a los menores quejosos a acudir presencialmente a clases, impidiendo la inscripción de nuestros menores hijos a la Educación Preescolar, arrojando graves riesgos para su salud y hasta para su vida en función de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) que afecta a todo el planeta y que en México ha cobrado la vida de cientos de miles de personas, incluyendo menores de edad.

A este respecto no bastaría la invocación formal de normas que a sí mismas se califican como de orden público e interés social, sino que dado que Su Señoría cuenta con las facultades para definir tales condiciones, y en todo caso ***se requeriría que las responsables aportaran elementos de convicción suficientes que justificasen la “urgencia” de realizar los actos concretos que se les reclaman, para demostrar que en la especie el otorgamiento de la suspensión sí lesionaría al interés público.*** Sólo así se podría estimar razonablemente, que en el caso concreto la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social o que implicaría una contravención ***directa e ineludible, por los efectos de la suspensión a disposiciones de orden público,*** y no sólo por el apoyo formal en dichas disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo.

Así, las autoridades responsables tendrían que aportar al ánimo del juzgador los elementos convictivos que demostrasen en forma razonable y con los medios probatorios que en él pueden aportarse, la conexión que existe entre esos actos concretos y los fines abstractos que se postulan, así como la adecuación de esos actos como medios para alcanzar aquellos fines y la inaplazable urgencia de ponerlos en práctica, ***pues de lo contrario, indebidamente se arrojaría sobre la parte quejosa la carga de la prueba de un hecho negativo.***

Ahora bien, es claro que tales elementos probatorios sólo podrían presentarse en la audiencia incidental que ese H. Juzgado habrá de conducir, por lo que de esa guisa, también resulta patente que ante la ausencia de pruebas en tal sentido, ***la suspensión provisional y definitiva debe decretarse en los términos solicitados***¹³².

¹³² A este respecto son aplicables la ***Jurisprudencia I.3o.A. J/16,*** que figura en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 383 (Registro 199549); la ***Jurisprudencia V. 2o. J/8,*** que igualmente se halla en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, página 185 (Registro 204866); la Tesis que se lee en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, página 516 (Registro 228764); la **Jurisprudencia** que aparece en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 121-126 Sexta Parte, página 289 (Registro 252108); la Tesis que se lee en la misma Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 109-114 Sexta Parte, página 206 (Registro 252576); la **Jurisprudencia** publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 72 Sexta Parte, página 185 (Registro 254979) y la **Jurisprudencia** que se consigna en la propia Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 72 Sexta Parte, página 187 (Registro 254980), que enseñan: **“SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.-** De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. *El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado.* Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que *corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto.* El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevaecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad”; **“SUSPENSIÓN. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE APORTAR PRUEBAS SUFICIENTES PARA ACREDITAR EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL.-** Cuando la suspensión se concede para el efecto de hacer respetar un derecho que se estima legitimado con base en un contrato y la autoridad aduce que es incorrecta tal medida por no reunirse los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, substancialmente porque su otorgamiento causa perjuicio al interés social contraviéndose disposiciones de orden público, debe estimarse que *si ese perjuicio no es evidente y manifiesto, las autoridades deben aportar al ánimo del juzgador los elementos de prueba y datos necesarios para acreditar que el otorgamiento de la suspensión sí lesionaría al interés público, pues de lo contrario, indebidamente se arrojaría sobre la parte quejosa la carga de la prueba de un hecho negativo*”; **“ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN.-** No es ajeno a la función de los juzgadores apreciar la existencia del orden público en los casos concretos que les someten para su resolución; de ahí que corresponda al juzgador, haciendo uso de la facultad que como tal está dotado, apreciar cada caso concreto que se le presente y determinar, tomando en consideración las circunstancias del mismo, si de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, dado que *no basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda seguir una finalidad de interés social, para que la suspensión sea improcedente* conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sino que *es menester que las autoridades responsables aporten al ánimo del juzgador elementos de convicción suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social o que implicaría una contravención directa e ineludible, por los efectos de la suspensión, a la disposición de orden público, no sólo para el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo*”; **“SUSPENSIÓN. INTERÉS PÚBLICO. AFIRMACIÓN ABSTRACTA DE PROGRAMAS.-** Este tribunal considera que para que se niegue la suspensión con base en que se lesionaría con ella el interés social (artículo 124, fracción II de la Ley de Amparo), *no basta que las autoridades afirmen en forma dogmática e imprecisa que los actos reclamados forman parte de un programa tendiente a obtener ciertos objetivos que, expresados en forma abstracta y general, sí resultan de manifiesto interés público, sino que es menester que las autoridades justifiquen la urgencia de realizar los actos concretos que se les reclaman y que demuestren en forma razonable, para los efectos del incidente de suspensión y con los medios probatorios que en él pueden aportarse (estudios realizados, etcétera), la conexión que existe entre esos actos concretos y los fines abstractos que se postulan, la adecuación de esos actos como medios para alcanzar aquellos fines y la inaplazable urgencia de ponerlos en práctica* antes de que se falle en el fondo el juicio de amparo. De lo contrario, bastaría la enunciación de fines más o menos abstractos de claro interés público, como fines postulados

IV.- Conforme al Artículo 131 de la Ley de Amparo, cuando el quejoso solicita la suspensión aduciendo un interés legítimo, tal como ocurre en la especie, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue.- En este caso, los daños, los que se ocasionarían a la parte quejosa a más de inminentes en los términos expuestos *ut supra*, serían no sólo de difícil sino aún *de imposible reparación, porque las consecuencias de los actos reclamados se podrían traducir en que los menores quejosos se contagiaran del virus SARS-CoV2 (COVID-19), y pudieren llegar a perder la vida, lo que también pone en riesgo a toda su familia en idénticos alcances*¹³³.

para los actos reclamados, para que se negara la suspensión, *a pesar de que se les pudieran causar a los quejosos perjuicios de difícil reparación*, lo cual sería incorrecto, y más si se considera que al obtener la suspensión los quejosos garantizan los daños y perjuicios que con ella se puedan causar, mientras que las autoridades responsables no suelen indemnizar a dichos quejosos de los daños y perjuicios que les causan con la ejecución de sus actos cuando éstos resultan ilegales, al fallarse el fondo del negocio"; “**SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CONCEPTO DE. INTERÉS SOCIAL PARA SUS EFECTOS.-** Es cierto que no existe un criterio definido sobre qué debe entenderse por interés público o social, sin embargo se infiere que dicho concepto conlleva implícito el aspecto generalidad o colectividad y por "interés" debe entenderse, según el Diccionario de la Lengua Española como aquel provecho, utilidad, ganancia o beneficio que se percibe o bien, llamar la atención sobre alguna cosa; en tales condiciones, por interés general, debe entenderse aquel *beneficio que obtiene la colectividad*, del cual evidentemente se le privaría de concederse la suspensión solicitada”; “**SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN.-** *No basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, para que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que las autoridades o los terceros perjudicados aporten al ánimo del juzgador elementos de convicción suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social, o que implicaría una contravención directa e ineludible, prima facie y para los efectos de la suspensión, a disposiciones de orden público, no sólo por el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo.* Por lo demás, aunque pueda ser de interés público ayudar a ciertos grupos de personas, no se debe confundir el interés particular de uno de esos grupos con el interés público mismo, y cuando no esté en juego el interés de todos esos grupos protegidos, sino el de uno solo de ellos, habría que ver si la concesión de la suspensión podría dañar un interés colectivo en forma mayor que como podría dañar al quejoso la ejecución del acto concreto reclamado. O sea que, en términos generales y para aplicar el criterio de interés social y de orden público contenidos en el precepto a comentario, *se deben sopesar o contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado, y el monto de la afectación a sus derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de autoridad*” y “**SUSPENSIÓN. PRUEBA DEL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL.-** Si bien el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que la suspensión se decretará cuando, entre otros requisitos, se satisfaga el de que no se siga perjuicio al interés social, debe estimarse que *si ese perjuicio no es evidente y manifiesto, las autoridades deben aportar al ánimo del juzgador los elementos de prueba y datos necesarios para acreditar que el otorgamiento de la suspensión sí lesionaría al interés público, pues de lo contrario, indebidamente se arrojaría sobre la parte quejosa la carga de la prueba de un hecho negativo*”.

¹³³ Resultan aplicables la Tesis IV.3o.A.14 K (10a.), que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, página 1722 (Registro 2001657) y la Tesis que se puede localizar en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril de 1991, página 268 (Registro 223309), del tenor literal siguiente: “**INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. BASTA CON QUE SE JUSTIFIQUE PRESUNTIVAMENTE PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.-** Previo a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, vigentes a partir del 4 de octubre siguiente, el principio de iniciativa de parte agraviada previsto en el artículo 107 constitucional, implicaba la necesidad de que el gobernado probara que era titular de un derecho subjetivo que estimaba violado con los actos reclamados; sin embargo, ahora, partiendo de la premisa de un marco protector más amplio de los derechos humanos, aquellas personas que aduzcan tener un interés legítimo pueden accionar una instancia, esgrimiendo un daño en su esfera

V.- Apariencia del buen derecho y peligro en la demora.- *En la especie se colman los extremos de fracción X del artículo 107 de la Lex Legum, que prescribe que se debe ponderar la apariencia del buen derecho para la concesión de la medida cautelar* y de las Tesis de **Jurisprudencia P./J. 15/96 y P./J. 16/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 16 (Registro 200136) y Tomo III, Abril de 1996, página 36 (Registro 200137)¹³⁴.

jurídica tutelada por la ley y no así una afectación directa a un derecho subjetivo. Por tanto, el interés legítimo en la suspensión provisional en el amparo debe acreditarse de manera presuntiva y no plena, ya que esto último será materia del juicio principal” y **“SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SUS ALCANCES.-** Una de las finalidades que se persigue con la promoción del juicio de amparo, es que los tribunales de control constitucional examinen si la determinación de las autoridades responsables cumple con los supuestos constitucionales reguladores de las garantías individuales de los gobernados; por tanto, *la actuación de la autoridad responsable, debe quedar paralizada hasta conocer la ejecutoria que al efecto emitan dichos órganos de control constitucional, por medio de la cual se conozca si la determinación de aquélla es o no infractora de las garantías individuales del quejoso; permitir que las autoridades responsables actúen sin conocer si sus actos son o no constitucionales, implica que el particular sufra una afectación, muchas veces irreparable, en sus derechos e intereses legítimamente tutelados, y, para el caso de que se resolviera que el acto reclamado en el juicio de amparo es inconstitucional, impediría posteriormente restituir al quejoso en el goce de la garantía violada”*.

¹³⁴ Dichas tesis son del tenor literal siguiente: **“SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.-** La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la *apariencia del buen derecho* y el *peligro en la demora*. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, *para la concesión de la medida*, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, *basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso*, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensiva *deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado*. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión” y **“SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO.-** El artículo 107, fracción X de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y

A) Buen derecho.- Las tesis apuntadas cobran aplicabilidad en la especie, porque el *buen derecho* en que se apoya la parte quejosa se hace consistir en los siguientes elementos:

1.- Patria Potestad.- Los suscritos somos titulares de la patria potestad de nuestros menores hijos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 411, 412, 413, 414, 414 bis, 416 Ter, 422, 424, 425 y 427 del Código Civil para el Distrito Federal y demás relativos de las Entidades Federativas, lo que implica *nuestro derecho y obligación de representarlos ante cualquier autoridad para lograr su mayor beneficio*, siendo que tal como se ha acotado *ut supra*, también presentamos esta demanda *por nuestro propio derecho* y en función del interés jurídico y legítimo que poseemos, tal como se demostró antes.

2.- Obligación Educativa.- De consuno con lo dispuesto por el ordinal 31, fracción I de la propia Carta Magna los suscritos estamos *obligados* a inscribir a nuestros hijos en las escuelas públicas o privadas, para obtener su educación conforme al grado escolar que han de cursar, que es exactamente lo que pretendemos hacer, y las autoridades por su parte, están obligadas conforme al artículo 3º Constitucional a impartirles la educación necesaria velando por su interés y con la flexibilidad necesaria dadas las circunstancias pandémicas actuales, lo que importa la necesidad de que las clases se puedan tomar por medios remotos y no necesariamente de modo presencial.

3.- Derecho a la salud.- Conforme al numeral 4º de la *Lex Legum* y los Tratados Internacionales invocados *ut supra*, los menores quejosos tienen derecho a que se resguarde su salud con todos los recursos disponibles del Estado Mexicano, que bajo esa óptica, no puede

concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: **1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la demora.** *La apariencia de la existencia del derecho* apunta a una *credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable*, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; *el peligro en la demora* consiste en la *posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo*. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, el Juez de Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la "apariencia del buen derecho" sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del dispositivo constitucional citado, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, **con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio**, si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado”.

arriesgarla a grado tal que puedan llegar a perder la vida en función de la pandemia existente y que deriva del virus SARS-CoV2 (COVID-19)

4.- Interés Superior de la Niñez.- En términos de lo prescrito por los artículos 4º y 73, fracción XXIX–P constitucionales, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el **principio del interés superior de la niñez, acatando los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte** (todos los reseñados a lo largo de esta demanda) y garantizando de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades ***de salud y de educación para su desarrollo integral***. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez¹³⁵.

El interés superior del menor condiciona todos los actos de autoridad que les puedan afectar de alguna manera, y por ende implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos, de lo que se sigue que las autoridades responsables no pueden tomar determinaciones sin base alguna que puedan afectar a los menores, tal como ocurre en la especie¹³⁶.

El Principio del Interés Superior del Niño implica la garantía y protección de los derechos de los menores para su ejercicio *pleno*, para propiciar su desarrollo con el *pleno aprovechamiento de sus potencialidades*¹³⁷; involucra el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un *desarrollo humano integral* y a generar las condiciones que permitan el *máximo bienestar de los menores*¹³⁸; y **demanda de**

¹³⁵ Sobre el particular son aplicables la Tesis 1a. CXXIII/2012 (10a.), que se halla en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Primera Sala, página 259 (Registro 2000987) y la Tesis 1a. CXXII/2012 (10a.), que asimismo se puede consultar en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Primera Sala, página 260 (Registro 2000988), bajo los rubros “**INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PAUTA INTERPRETATIVA PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS POR INCOMPATIBILIDAD EN EL EJERCICIO CONJUNTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS**” y “**INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR**”, transcritas *ut supra*.

¹³⁶ Son aplicables al respecto la **Jurisprudencia 1283** que aparece en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Familiar Subsección 1 – Sustantivo, página 1435 (Registro 1013882); la **Jurisprudencia I.5o.C. J/14** que figura en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2187 (Registro 162563) y la Tesis P. XLV/2008 que se lee en la misma Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Pleno, página 712 (Registro 169457), de los epígrafes “**INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO**”; “**INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO**”; “**MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA**”, transcritas antes.

¹³⁷ En este sentido es aplicable la Tesis 1a. CXXI/2012 (10a.), que se localiza en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Primera Sala, página 261 (Registro 2000989), bajo el rubro “**INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS**”, transcrita con antelación.

¹³⁸ En ese sentido son aplicables la Tesis I.3o.C.1022 C (9a.) que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, página 1222 (Registro 160227); la **Jurisprudencia 1284** que se ubica en el del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte -

los órganos jurisdiccionales realicen un escrutinio estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión, para satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales.¹³⁹

El mismo numeral 4° de la *Lex Legum* señala que el Estado ***otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez***, lo que valida plenamente la intención de los suscritos de que los menores continúen tomando clases por medios remotos, como se hizo desde 2020 y se ha hecho este año.

B) Peligro en la demora.- A pesar de que existe un cúmulo considerable de infracciones a las garantías individuales de los quejosos en los actos reclamados y en su ejecución; y no obstante que las mismas son patentes, el Titular del Ejecutivo Federal de modo simplista “las justifica” aduciendo que “ya es bastante”. ***Así, la medida cautelar procede para que no se produzca la afectación que producirán los actos reclamados***, pues si no se concede la suspensión, las consecuencias de los mismos se consumarán de manera irreparable para la quejosa, lo que evidencia el *periculum in mora* a que aluden las tesis jurisprudenciales citadas *ut supra*¹⁴⁰.

TCC Segunda Sección - Familiar Subsección 1 – Sustantivo, página 1436 (Registro 1013883) y la ***Jurisprudencia I.5o.C. J/16*** que se puede consultar en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2188 (Registro 162562), de los epígrafes “**INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DEBE PONDERARSE SU PREFERENCIA EN RELACIÓN CON OTROS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ATENTO AL CASO CONCRETO**”; “**INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO**” y “**INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO**”.

¹³⁹ Sobre este respecto son aplicables la Tesis 1a. LXVII/2013 (10a.) que se halla en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Primera Sala, página 824 (Registro 2002815) y la Tesis 1a. XV/2011 que se puede consultar en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Primera Sala, página 616 (Registro 162807), de los rubros “**INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS**” y “**INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL**”, transcritas *ut supra*.

¹⁴⁰ Resulta aplicable al caso la Tesis I.4o.C.322 C que aparece en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2349 (Registro 162789), que señala: “**MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD.-** En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad ***deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros***. Esto implica que ***deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias***, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que ***sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación***, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten

VI.- Efectos *erga omnes* que se deben imprimir a la suspensión.- El artículo 139¹⁴¹ de la Ley de Amparo establece que cuando la suspensión sea procedente, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación, el órgano jurisdiccional deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, tomando las medidas convenientes para que se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible y que no quede sin materia el juicio de amparo.

Por su parte, el artículo 147, primer párrafo¹⁴², de la Ley de Amparo, dispone que es facultad del órgano jurisdiccional fijar la situación en que habrán de quedar las cosas.

Bajo esas perspectivas, Su Señoría debe concluir que *los efectos de la medida cautelar deben ser generales*, ya que de otorgar una suspensión con efectos particulares; es decir, solamente para los quejosos en este juicio, se les estaría otorgando un trato preferencial frente a los demás menores que se ubican en idéntica situación, lo que podría ocasionar que algunos sí vean en peligro inminente su salud y hasta su vida, *que son precisamente los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar*.

Este concepto *erga omnes*, es perfectamente válido y viable, en tanto se apoya en la intelección de normas constitucionales (artículos 1°, 3°, 4°, 16, 17, 107 y 133), que son de la misma jerarquía y que no pueden imperar uno sobre otro, de suerte que deben armonizarse. En ese sentido hemos de considerar que la interpretación de las normas jurídicas se debe realizar de manera hermenéutica, como parte del conjunto al cual pertenecen, de modo que no existan contradicciones en las mismas, siendo que en cualquier caso se ha de atender a la teleología normativa, de manera que no se interprete algo ajeno a lo que es la intención de la ley¹⁴³.

la convivencia del niño con ambos padres, *hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso*, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado”.

¹⁴¹ “**Artículo 139.** En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si *hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden* hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, *ni quede sin materia el juicio de amparo*.”

“Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional”.

¹⁴² “**Artículo 147.-** *En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensiva siga surtiendo efectos.*

“Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

“El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo”.

¹⁴³ En ese sentido son aplicables la Jurisprudencia 858, que se publicara en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte TCC, página 656 (Registro 391748); la Tesis que aparece en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Octubre de 1993, página 446 (Registro 21471); la Jurisprudencia VIII.2o. J/11 que asimismo se lee en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 57, Septiembre de 1992, Octava

Sobre este aspecto, debe estimarse que es una *facultad implícita*¹⁴⁴ de Su Señoría el conceder la suspensión con los efectos *erga omnes* que se solicitan le imprima, en tanto cuenta

Época, página 77 (Registro 218424); la Tesis que figura en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988, Pleno, página 22 (Registro 206005); la Tesis que se ubica en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Primera Parte, Pleno, página 113 (Registro 232232) (Genealogía: Informe 1972, Primera Parte, Pleno, página 343); la Tesis visible en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXIII, Primera Sala, página 666 (Registro 294707) y la Tesis que se puede consultar en la propia Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXV, Segunda Sala, página 359 (Registro 318739), que señalan: **“INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE UN MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.-** *Debe aplicarse el principio de que las normas de un mismo ordenamiento legal deben ser interpretadas de tal manera que no resulten contrarias, sino que se complementen, para que sean acordes y armónicas.* Por lo que debe inferirse que el legislador, al utilizar indistintamente en el Código Fiscal de la Federación, los términos "modificación" y "revocación", pretendió darles un significado común. Desde el punto de vista etimológico, modificar viene del latín *modificare*, que significa transformar o cambiar la forma o substancia de una cosa, mudando algunos de sus conceptos. Mientras que revocar viene del latín *revocare*, que significa dejar sin efecto algo, una concesión, un mandato o una resolución. Mientras que el primer concepto hace alusión a la permanencia del acto, aun cuando cambiado, en el de revocar se puede considerar la ausencia del acto por haberse dejado insubsistente”; **“LEYES. INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LAS.-** *Conforme a los principios lógicos que rigen en materia de hermenéutica o interpretación de las leyes y de sus normas en general, unas y otras han de ser ponderadas conjunta y no parcialmente, armónica y no aisladamente, para desentrañar la intención del legislador,* resolver la cuestión efectivamente planteada y evitar la incongruencia o contradicción, que repugna a la razón y a la correcta administración de la justicia”; **“INTERPRETACION DE NORMAS DE UN MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.-** *Debe aplicarse el principio de que las normas de un mismo ordenamiento legal deben ser interpretadas de tal manera que no resulten contrarias, sino que se complementen, para que sean acordes y armónicas.* Por lo que debe inferirse que el legislador, al utilizar indistintamente en el Código Fiscal de la Federación, los términos "modificación" y "revocación", pretendió darles un significado común. Desde el punto de vista etimológico, modificar viene del latín *modificare*, que significa transformar o cambiar la forma o substancia de una cosa, mudando algunos de sus conceptos. Mientras que revocar viene del latín *revocare*, que significa dejar sin efecto algo, una concesión, un mandato o una resolución. Mientras que el primer concepto hace alusión a la permanencia del acto, aun cuando cambiado, en el de revocar se puede considerar la ausencia del acto por haberse dejado insubsistente”; **“INTERPRETACIÓN DE LA LEY.-** *Los preceptos de un ordenamiento legal deben interpretarse principalmente en el sentido de que no se contradigan;* y para lograrlo, a fin de establecer su verdadero sentido y alcance, deben ser interpretados *en relación con los demás de la misma ley, armónicamente*”; **“INTERPRETACIÓN DE LA LEY.-** *Los preceptos de un ordenamiento legal deben interpretarse principalmente en el sentido de que no se contradigan;* y para lograrlo, a fin de establecer su verdadero sentido y alcance, *deben ser interpretados en relación con los demás de la misma ley, armónicamente*”; **“INTERPRETACIÓN DE LA LEY.-** *La interpretación correcta es la que atiende al espíritu de la ley, a los fines del legislador, o sea la teleológica*” y **“LEYES, INTERPRETACIÓN DE LAS.-** *De acuerdo con nuestra técnica legislativa, doctrina y jurisprudencia, toda norma legal debe interpretarse armónicamente sin darle a sus términos mayor alcance del que naturalmente tienen, y además, en todo caso debe prevalecer la voluntad o intención del legislador,* pues las leyes tributarias deben interpretarse conforme a las reglas generales de derecho, cuando no se trate de disposiciones de índole excepcional que, por su propia naturaleza sean restrictivas o privativas de los derechos particulares, ya que éstos están garantizados como en cualquiera otra situación jurídica, por el principio de su aplicación exacta, y, si la jurisprudencia ha definido que el Poder Legislativo puede autorizar la retroactividad de una ley, como lo ha autorizado respecto del decreto que establece el 15% ad-*valorem* su aplicación debe acatarse”.

¹⁴⁴ El sistema constitucional y su interpretación jurisprudencial, admiten la existencia de *facultades implícitas*, que se derivan de las *expresamente otorgadas*, entendiéndose por implícitas aquellas atribuciones sin las cuales sería nugatoria, o estéril, o se vería sustancialmente mermada la facultad que expresamente se otorgó. Así, y a *fin de que el ejercicio de las atribuciones explícitas sea eficaz y funcional*, el órgano facultado puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales de las primeras. En ese sentido se manifiestan la Tesis que figura en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 145-150, Sexta Parte, página 119 (Registro 250860), *ponencia del Señor Ministro Guillermo Guzmán Orozco* y la Jurisprudencia 134, que se lee en el

con la *facultad expresa* prevista en el ordinal 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que como se ha acotado, le confiere la atribución de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, lo que sólo se podría *condicionar* (no excluir) del mismo modo; esto es, *de forma*

Apéndice 1917-Septiembre 2011, VIII. Electoral Primera Parte – Vigentes, Sala Superior, página 167 (Registro 1000773), que expresan: **“FACULTADES IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS. MULTAS.-** En un sistema constitucional como el nuestro, de facultades específicamente otorgadas a las autoridades, de manera que sólo pueden hacer lo que la ley les permite, a diferencia del particular, que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, se debe estimar que las autoridades, para actuar con competencia en términos del artículo 16 constitucional al causar perjuicios o molestias a los particulares, deben actuar con facultades legales que les hayan sido otorgadas en la Constitución o en alguna ley. Por una parte, si hay cierto tipo de facultades que se otorgan en forma genérica, de manera que las autoridades no pueden actuar fuera de los fines, objetivos y materia que se les señalan, pero que al mismo tiempo, por la naturaleza misma de la facultad otorgada, resulta imposible que la propia Constitución contenga todos los elementos y matices de la facultad otorgada, y en estos casos, *se deben estimar constitucionalmente otorgadas todas las facultades implícitas en las expresamente otorgadas, entendiendo por implícitas aquellas facultades sin las cuales sería nugatorio, o estéril, o se vería sustancialmente mermada la facultad que expresamente se otorgó.* Y, aun tratándose de las facultades legislativas del Congreso, por ejemplo, que están sólo sucintamente enunciadas en el artículo 73 constitucional, la doctrina ha dicho que si el fin de la ley es legítimo, y si está dentro de los objetivos señalados en la Constitución, y los medios escogidos en la ley son claramente adecuados para alcanzar esos objetivos, y además no sólo no están prohibidos, sino que son compatibles con la letra y el espíritu de la Constitución, esa ley es constitucional. Pero hay otros campos en los que las facultades se otorgan en forma restrictiva, de manera que no puede hablarse ahí de facultades implícitas, y sólo se puede admitir que se ejerciten las facultades expresa y limitativamente otorgadas. Es el caso de las normas que imponen cargas fiscales, reconocido en el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación y emanado primordialmente de la fracción IV del artículo 31 constitucional, conforme a la cual ningún cobro se puede hacer por la vía económico-coactiva ni aplicarse ninguna otra sanción a un particular, sin acudir a los tribunales previamente establecidos (como excepción a lo dispuesto en el artículo 14 constitucional), si no está claramente determinado en una ley, sin que las autoridades administrativas puedan ampliarse sus facultades al respecto por razones de interés público, o de conveniencia en el ejercicio de sus facultades, ni por ningunas otras. En el caso de las multas y sanciones administrativas se está, evidentemente en la segunda hipótesis de las examinadas, y las facultades para imponer sanciones, así como las sanciones mismas y las hipótesis en que procede su aplicación, deben estar expresa y explícitamente enunciadas en la ley, sin que se pueda ampliar ni facultades, ni sanciones, ni hipótesis de infracción, ni por analogía, ni por mayoría de razón, ni porque indebidamente se estime que el que puede lo más debe poder lo menos. Luego, para imponer las sanciones a que restrictivamente se refiere el artículo 23, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sin analizar aquí si es el Congreso el que debe fijar las facultades de los órganos de autoridad del Ejecutivo, o si éste puede por sí y ante sí ampliarlas, otorgarlas o modificarlas), con base en ese precepto sólo tiene facultades el director general de Control y Vigilancia Forestal, sin que pueda asumirlas el secretario del ramo por analogía ni por mayoría de razón, ni por poder lo más, como superior de quien puede lo menos, porque esto violaría el sistema de facultades restringidas para imponer sanciones cobrables por la vía económico-coactiva, o imponibles sin acudir a los tribunales previamente establecidos” y **“FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES.-** El Consejo General del Instituto Federal Electoral, como órgano máximo de dirección y encargado de la función electoral de organizar las elecciones, cuenta con una serie de atribuciones expresas que le permiten, por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas electorales protegen; por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por que todos los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente. En este sentido, *a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado el Instituto Federal Electoral”.*

*expresa*¹⁴⁵, y jamás podría entenderse que se concede una atribución absoluta, pero a la vez “se restringe” dicha facultad, pues tal idea implica la contravención de la primera de las reglas de la Lógica, que enseña que *nada puede ser y no ser al mismo tiempo*.

Finalmente es de acotar que **los Juzgados de Distrito ya han emitido suspensiones con el alcance mencionado**, tal como se advierte del juicio de amparo **118/2021 y su acumulado 120/2021** seguido ante el C. Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, lo que configura **hechos notorios**¹⁴⁶ para Su Señoría en términos de lo dispuesto por el artículo 88¹⁴⁷ del Código Federal de Procedimientos Civiles.

¹⁴⁵ En ese sentido, configura un ejemplo nítido del lenguaje constitucional a ese efecto, lo dispuesto por el artículo 1º de la *Lex Legum* (cuyo texto data de 1917 en la porción relativa) que señala que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, *cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece*”.

¹⁴⁶ En ese sentido se pronuncian la **Jurisprudencia VI.1o.P. J/25**, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1199; la **Jurisprudencia VI.2o.C. J/211**, que se lee en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 939; la **Jurisprudencia 2a./J. 27/97**, que aparece en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, **Segunda Sala**, página 117 y la **Jurisprudencia XXII. J/12**, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 295, mismas que dicen: “**HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO.- Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional.** En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, *las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente*, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento”; “**HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.- Se considera que son hechos notorios para un tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional.** Por consiguiente, por ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su artículo 2o., pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria a un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes”; “**HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.-** Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, *las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente*, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial” y “**HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN.-** La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.”,

His Expositis, y en vista de todas las razones apuntadas, resulta que es imprescindible que Su Señoría conceda la suspensión tanto provisional como definitiva de los actos reclamados, en los términos solicitados en este apartado, hasta que se dicte sentencia que cause ejecutoria en este juicio de amparo.

Por lo expuesto y fundado,

A USTED C. JUEZ, atentamente pedimos se sirva:

PRIMERO.- Tenernos por presentados en los términos de este escrito, promoviendo demanda de garantías en contra de los actos de las autoridades que señalamos como responsables, y por las violaciones constitucionales que se cometen en nuestro perjuicio y de nuestros menores hijos.

SEGUNDO.- Tener por señalado el domicilio que para oír y recibir notificaciones se indica en el proemio de este ocurso y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionales que allí mismo se mencionan.

TERCERO.- Conceder la suspensión tanto en su fase provisional, como en su fase definitiva, en los términos solicitados en esta demanda de garantías, analizando el capítulo correspondiente, que inicia en la **foja 99** de este ocurso.

CUARTO.- Ordenar se expida a nuestra costa, copia certificada por duplicado del auto por el que se conceda la suspensión provisional de los actos reclamados.

QUINTO.- En su oportunidad y previos los trámites de ley, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.

PROTESTAMOS LO NECESARIO

Ciudad de México, a __ de agosto de 2020.

sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que *para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan* y, por lo tanto, cuando en un *cuaderno incidental* exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, **uede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento**".

¹⁴⁷ "Artículo 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes".